



UNIVERSIDAD DE MURCIA

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Severidade punitiva e reincidência criminal: o caso da violência doméstica em Portugal

Severidad punitiva y reincidencia criminal: el caso de la violencia doméstica en Portugal

Dña. Ana Rita Mendes Domingos

2017

Ana Rita Mendes Domingos

Severidade punitiva e reincidência criminal: o caso da violência doméstica
em Portugal

Severidad punitiva y reincidencia criminal: el caso de la violencia
doméstica en Portugal

Universidad de Murcia

Murcia 2017

Ana Rita Mendes Domingos

Severidade punitiva e reincidência criminal: o caso da violência doméstica
em Portugal

Severidad punitiva y reincidencia criminal: el caso de la violencia
doméstica en Portugal

Tese apresentada à Universidad de
Murcia para obtenção do grau de
Doctorado em Ciencias de la
Salud, sob orientação do Professor
Doutor Carlos Alberto Poiares e
tutoria do Professor Doutor
Bartolomé Llor Esteban

RESUMEN

RITA DOMINGOS: Severidad punitiva y reincidencia criminal: el caso de la violencia doméstica en Portugal

(Orientación del Profesor Doctor Carlos Alberto Poiares y la tutela del Profesor Doctor Bartolomé Llor Esteban)

El crimen de violencia doméstica es una problemática actual que ha adquirido creciente visibilidad como resultado de la progresiva concienciación de la sociedad por su complejidad, resultado de un largo y penoso recorrido, a lo largo del cual nos hemos vuelto a encontrar con una realidad cada vez más visible y, por consiguiente, objeto de investigación.

En 2007 se tipifica definitivamente en el ordenamiento jurídico portugués el crimen de violencia doméstica a través del artículo 152º del Código Penal, pudiendo el mismo ser castigado con pena de prisión de uno a cinco años o de dos a cinco años, en caso de que el crimen sea practicado contra o en presencia de menores, en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.

Esta es una problemática presente y expresiva en Portugal, y en el Informe Anual de la Seguridad Interna del año 2016 aparecen referidos 27291 casos registrados por la Policía de Seguridad Pública y Guardia Nacional Republicana referentes a casos de violencia doméstica. Contextualizando la realidad del fenómeno en Portugal, el mismo informe señala que el 71,7% de estas situaciones corresponden a relaciones entre cónyuges o compañeros, o ex cónyuges o ex compañeros. En cuanto al tipo

de violencia practicada, el 82% de los casos guardan relación con violencia psicológica, el 68% con violencia física, el 16% con violencia de tipo social, el 9% con violencia económica y el 3% con violencia sexual. Se concluye, además, que en el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres y en un 86% los denunciados eran hombres, lo que viene a coincidir con lo apuntado por la literatura (Lisboa, Barroso, Patrício & Leandro, 2009) en relación con el alto riesgo de victimización por parte del género femenino en este tipo de crimen. Por este motivo, la presente investigación se centrará esencialmente en la violencia ejercida contra las mujeres, que se considera el abuso más generalizado contra los derechos humanos en el mundo (Day, V., Telles, L., Zoratto, P., Azambuja, M., Machado, D., Silveira, M., Debiagii, M., Reis, M., Cardoso, R. & Blank, P. 2003; Rosa, Boing, Buchele, Oliveira & Coelho, 2008).

A la vista de su complejidad, reflejada en las distintas variantes que podrá asumir, conceptualizar la violencia doméstica ha constituido un desafío para los investigadores del área, habiéndose formulado diferentes propuestas basadas en variadas perspectivas, que, sin embargo, tienen en común el hecho de destacar que una de las principales especificidades de este tipo de violencia es que la misma se produce en el seno de las relaciones de intimidad (Manita, 2005; Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009), repercutiendo este hecho, necesariamente, en que las consecuencias adversas se acentúan para todos los intervinientes.

En la presente investigación se ha optado por la utilización de la terminología violencia doméstica, siendo ésta la definición legal que abarca la violencia practicada en el seno de relaciones de intimidad en sus diversas

manifestaciones, particularmente la ejercida contra la mujer, reconociéndose su predominancia, legitimada por la necesidad de consonancia con el marco jurídico portugués, en el cual se encuadra el diseño metodológico utilizado.

En este contexto, creemos que la intervención desarrollada deberá revestir un carácter sistémico, incluyendo los diversos actores sociales involucrados en el proceso, en particular el agresor, como protagonista de la acción transgresora. Considerando que el fin último de esta intervención debe ser la resocialización y la (re)integración social del agresor, es importante atender a la actuación del sistema punitivo, particularmente en lo que se refiere a su severidad, concurriendo en su eficacia (Poiars, 2001).

Este ha constituido el punto de partida de la presente investigación que tiene como principales objetivos:

1. Profundizar el conocimiento sobre la actuación del sistema punitivo en el crimen de violencia doméstica e investigar en el funcionamiento preventivo de la reincidencia criminal;

1.1. Conocer la actuación del sistema punitivo en el crimen de violencia doméstica a través del estudio de su severidad punitiva;

1.2. Inferir en qué medida el sistema punitivo posee un funcionamiento preventivo de la reincidencia criminal a través del estudio de la actuación del Legislador y del Ejecutor;

Para ello, la muestra está constituida por 50 decisiones judiciales referentes al crimen de violencia doméstica porque, como principio, ésta concreta la actuación del sistema jurídico sobre el transgresor, reflejando al mismo tiempo su presupuesto retributivo, disuasorio y resocializador.

Potenciando el rigor de la información obtenida, sólo se han considerado las decisiones judiciales referentes a procesos de violencia doméstica relacional, excluyendo, por lo tanto, las que podríamos clasificar como encuadradas en el ámbito familiar (como la violencia contra descendientes).

Las decisiones judiciales que constituyen la muestra fueron exploradas a través del Índice de Severidad Punitiva y Psicologización (Poiares, 2009) y su respectiva plataforma de cotización (Branco & Poiares, 2013) con el fin de obtener información sobre tendencias y cambios en la aplicación de la ley a los acusados de crimen de violencia doméstica, posibilitando al mismo tiempo un análisis a nivel de la discursividad del sentenciar. La información obtenida fue explorada a través del *SPSS Statistic Pacage 24*, recurriendo a métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos, en función de las variables en cuestión, potenciando el análisis de los resultados obtenidos.

Analizando el perfil socioeconómico de los agresores que forman parte de la muestra verificamos que tienen una edad media de 46 años, variando éstas entre los 27 y 65 años, reflejando la transversalidad en términos de franjas de edad asociadas a la práctica de este crimen, no circunscrito a un determinado patrón, pero alternando entre la juventud y la tercera edad, tantas veces relacionadas intergeneracionalmente (Cortez, Padovani & Williams, 2005; Oliveria & Sani, 2009). Como se esperaba, la abrumadora mayoría de la muestra está representada por hombres, el 98%, que coincide con lo referido en la literatura en lo que respecta a la tendencial victimización de la mujer en este tipo de crimen (Day *et al.*, 2003; Lisboa *et al.*, 2009; Gilchrist, 2010). En cuanto al estado civil, el 34% de los agresores están casados o viven en unión de hecho, el 40% están divorciados o

separados y el 18% son solteros. Por lo que respecta a su situación profesional, el 56% tienen un puesto de trabajo, el 32% no tienen trabajo, el 4% son jubilados o pre jubilados y el 2% son estudiantes.

En las decisiones judiciales consultadas encontramos referencia a algún tipo de perturbación psicológica en un 6% de los agresores, notando, sin embargo, la elevada escasez de información disponible a este nivel. En cuanto a la intervención juspsicológica en el dominio de la actuación del sistema judicial en el crimen de violencia doméstica, sólo en una decisión judicial hemos visto una referencia a la realización de una evaluación psicológica.

Los resultados a este nivel evidencian la poca permeabilización todavía existente en lo que se refiere a la necesidad y legitimidad de la intervención psicológica en el territorio judicial, a pesar del largo historial de llamamientos y evidencias que reclaman una acción contraria (Poiars, 2001; Gonçalves, 2010; Manita & Machado, 2012; Poiars, 2013).

Explorando la trayectoria vivencial de los agresores verificamos que la del 30% había coincidido anteriormente con la transgresión, de los cuales el 8% directamente relacionada con violencia doméstica y el restante 20%, que poseían esta información disponible, con crímenes diversos como vemos en el ejemplo de la conducción bajo el efecto del alcohol y sin permiso o el tráfico de estupefacientes. Este es un dato que resulta coincidente con el alertado por la literatura, reconociéndose los expresivos índices de reincidencia criminal en este tipo de crimen, directa o indirectamente relacionados (Simon, 1995; Ventura & Davis 2005; Manita, 2008; Llor-Esteban, García-Jimenez, Ruiz-Hernández y Godoy-Fernández, 2016).

En cuanto a la asociación entre adicciones y la práctica de violencia doméstica, constatamos en el 38% de los agresores la referencia al consumo de alcohol y en el 2% al consumo de alcohol asociado a drogas, sin otra especificación, estando este hecho de acuerdo con el referido en la literatura por lo que se refiere al factor de riesgo que representan los consumos en relación con prácticas transgresoras (Lisboa *et al.*, 2009; Gonçalves, Cunha & Dias, 2011). En cambio, en lo relativo al seguimiento terapéutico durante el proceso, sólo el 4% de los agresores se han beneficiado de este apoyo. Creemos que la problemática adictiva requeriría una atención particular por parte del sistema jurídico, habiendo autores que incluso defienden una acción específica en este ámbito, reconociendo su influencia en el proceso resocializador del transgresor (Larkin, 2016).

Trazando un panorama global de la acción del sistema punitivo en el crimen de violencia doméstica comprobamos que en la mayoría de las decisiones judiciales aplicadas, precisamente el 50%, se optó por la suspensión de la ejecución de la pena mediante el cumplimiento de obligaciones, el 26% por la suspensión provisional del proceso, el 8% por la suspensión de la ejecución de la pena simple, el 6% por la pena de prisión efectiva, el 6% por la absolución y el 4% por la suspensión de la ejecución de la pena mediante el pago de una multa y el cumplimiento de obligaciones.

Analizando la escala de severidad punitiva que la plataforma de cotización del ISPP nos permite identificar, concluimos que la media de severidad de las penas aplicadas se sitúa en los 39, en una escala de 0 y 100. Se trata de un promedio de severidad punitiva extremadamente reducida, pero que confirma el ya anunciado a través de la opción por las medidas

alternativas a la pena de prisión utilizadas. Los resultados reflejan también una expresiva diversidad en términos de severidad punitiva aplicada al mismo tipo de crimen, variando entre 11 y 79.

Los resultados obtenidos revelan una inconsistente actuación del sistema jurídico, reflejando un amplio espectro de severidad punitiva ejercida por el Ejecutor y no siendo posible establecer relaciones, con significancia estadística, con ninguna de las variables previstas en el ISPP relacionadas con el agresor, sea la reincidencia criminal (la que se esperaba), dimensiones socioeconómicas, referencia a consumos o perturbación psicológica.

Atendiendo en particular al objetivo resocializador de la acción jurídica, considerando las estrategias que más objetivamente parecen haber sido utilizadas para este fin, constatamos que el 46% de los agresores fue encaminado para acompañamiento por la Dirección-General de Reinserción y Servicios Prisionales, el 20% para tratamiento en el ámbito de la problemática de las adicciones, para un 12% se determinó la participación obligatoria en programas de intervención específicos para agresores y en el 8% de los casos se llevó a cabo una intervención psicológica / psiquiátrica.

Los resultados reflejan una escasa inversión del sistema punitivo en lo que respecta al encaminamiento de los agresores hacia intervenciones especializadas, promotoras de alteraciones comportamentales y de una efectiva resocialización del actor. Este hecho, si bien por un lado refleja la escasa permeabilización del Poder al Conocimiento, particularmente juspsicológico, evidencia simultáneamente una acción del sistema jurídico desconcertada con los objetivos resocializadores asociados a la sanción.

Estas reflexiones se afirman, de manera todavía más inquietante cuando atendemos al fenómeno de la reincidencia criminal, reflejando ésta, *a priori* la quiebra del sistema penal respecto a su presupuesto resocializador, debiendo implicar, por consiguiente, una mayor atención en la actuación penal.

Los resultados obtenidos revelan una acentuación de la severidad punitiva concertada con la existencia de antecedentes penales reflejados en el hecho de que las sanciones más severas, como la pena de prisión efectiva, suspensión de la ejecución de la pena, simple o con obligaciones, se han aplicado principalmente a agresores reincidentes y, por el contrario, la suspensión provisional del proceso fue aplicada, como tendencia, a los transgresores primarios. En cuanto a la media de la severidad punitiva aplicada verificamos que la misma se situó en 39,31 en los agresores reincidentes y en 38,68 en los no reincidentes.

A pesar de las diferencias identificadas entre reincidentes y no reincidentes, unas más expresivas que otras, no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel de la severidad punitiva aplicada, tanto en términos de tipo de decisión como en el nivel de su escala de severidad.

En lo relativo a la intervención especializada con los agresores considerando la dimensión de reincidencia criminal, verificamos que la necesidad de acompañamiento por la Dirección-General de Reinserción y Servicios Prisionales fue atribuida al 53% de los reincidentes y al 42% de no reincidentes, y por contra, el encaminamiento hacia una intervención psicológica / psiquiátrica fue obligatoria para sólo el 7% de los agresores

reincidentes y para el 10% de los no reincidentes, el tratamiento en el marco de las adicciones fue indicado para el 13% de los reincidentes y el 19% de los no reincidentes y el encaminamiento para programas de intervención específicos para agresores al 7% de los reincidentes y el 10% de no reincidentes.

A pesar de que los encaminados a estos tipos de intervención han sido, en general, residuales, se constata que en su mayoría se realizaron con transgresores primarios, reforzando así la desinversión en el proceso resocializador del individuo reincidente.

Creemos que ésta es una actuación inversa a la esperada con respecto a los principios resocializadores del sistema punitivo, en la medida en que, independientemente del motivo, el individuo reincidente ya mantuvo un contacto previo con el sistema jurídico, reflejando su reincidencia la quiebra de su actuación, por lo que se esperaría el reconocimiento de la necesidad de reforzar la inversión en la vertiente pedagógica, juspsicológica. Sin embargo, por el contrario, se constata que el Ejecutor encamina residualmente a intervenciones especializadas e incluso con menos regularidad en estas circunstancias, en comparación con los agresores primarios.

En general, creemos que los resultados obtenidos en la presente investigación legitiman una seria reflexión sobre la acción del sistema punitivo en el crimen de violencia doméstica, particularmente en lo que concierne a la reincidencia criminal, urgiendo la necesidad de una ruptura con el paradigma punitivo vigente.

La acción del sistema jurídico se revela marcadamente incierta, siendo amplio el espectro de las tipologías de sanciones y la severidad punitiva aplicadas, no consiguiendo establecer relaciones estadísticamente significativas con ninguna variable referente al agresor integrado en el ISPP. Presenta, asimismo, una acción predominantemente intimidatoria, en la medida en que el Legislador define severas penas abstractas, sin embargo el Ejecutor opta por castigar suavemente, desinvirtiendo fuertemente en la psicologización del proceso jurídico, reflejado en la excasa recurrencia a esta área del conocimiento a lo largo de todo el proceso de criminalización. La gravedad de estas conclusiones aumenta al referirnos a su actuación en el espectro de la reincidencia criminal donde se comprueba que la desinversión es todavía superior en la vertiente pedagógica y resocializadora de la acción punitiva, sancionando más severamente y encaminando con menor regularidad hacia intervenciones especializadas.

Reconociendo la complejidad del crimen de violencia doméstica se afirma necesaria una efectiva reflexión crítica sobre la acción jurídica, reforzando la necesidad y legitimidad de la intervención psicológica en el ámbito judicial, promoviendo una jurisprudencia más terapéutica y que efectivamente promueva su presupuesto resocializador.

RESUMO

RITA DOMINGOS: Severidade punitiva reincidência criminal: o caso da
violência doméstica em Portugal

(Sob a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Poiares e tutela do
Professor Doutor Bartolomé Llor Esteban)

A presente investigação é desenvolvida com o principal objetivo o aprofundar do conhecimento sobre a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica e, simultaneamente, investigar o seu funcionamento preventivo da reincidência criminal. Para o efeito, propomo-nos conhecer a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica através do estudo da sua severidade punitiva, bem como inferir em que medida o sistema punitivo possui um funcionamento preventivo da reincidência criminal, através do estudo da atuação do legislador e aplicador.

Para o efeito, a amostra foi constituída por 50 decisões judiciais referentes ao crime de violência doméstica porque, enquanto princípio, esta concretiza a atuação do sistema jurídico sobre o transgressor, refletindo, simultaneamente, o seu pressuposto retributivo, dissuasivo e ressocializador. Potenciando o rigor da informação obtida, foram apenas consideradas as decisões judiciais referentes a processos de violência doméstica relacional, excluindo, portanto, as que poderíamos classificar como enquadradas no âmbito familiar (como a violência contra descendentes).

As decisões judiciais constituintes da amostra foram exploradas através do Índice de Severidade Punitiva e Psicologização - Criminalização

Secundária (ISPP-CS) (Poiares, 2009) e respetiva plataforma de cotação (Branco & Poiares, 2013) a fim de obter informação sobre tendências e alterações na aplicação da lei aos arguidos pelo crime de violência doméstica.

Os resultados obtidos validam o alertado pela literatura no que respeita à multifactorialidade de problemáticas associadas ao crime de violência doméstica, como é exemplo a reincidência criminal, encontrando-se nesta circunstância 30% dos agressores da amostra, ou o consumo de álcool, referido em 38% dos agressores.

Os resultados revelam uma inconsistente atuação do sistema jurídico, particularmente no que respeita à variabilidade de tipologias de sanções aplicadas, bem como de severidade exercida pelo Aplicador, punindo, em média, brandamente e não sendo possível estabelecer relações, com significância estatística, com nenhuma das variáveis previstas no ISPP-(CS) relacionadas com o agressor.

Da exploração dos resultados obtidos verificamos ainda um frágil investimento na vertente ressocializadora da ação punitiva, sendo a dimensão psicológica do agressor, e portanto fundamental, omissa na esmagadora maior das decisões judiciais consultadas, constatando-se um parco investimento do Aplicador no encaminhamento para intervenções especializadas e que possam concorrer para uma efetiva alteração de modalidades de ação, neste caso, transgressivas.

Conclui-se, ainda, frágil permeabilização do Poder ao Saber, ao longo de todo o processo de criminalização, refletido na escassa recorrência ao

saber psicológico ao longo de todo o processo, desde o suporte à formulação da decisão judicial ao seu fim, que em princípio, se assume ressocializador.

Globalmente, cremos que as conclusões formuladas através da presente investigação legitimam a necessidade de rutura com o paradigma punitivo atual, sendo para o efeito fundamental uma efetiva psicologização do processo de criminalização, concorrendo para uma jurisprudência mais terapêutica e concertada com os seus pressupostos.

Palavras-chave: violência doméstica; reincidência criminal; severidade punitiva; intervenção juspsicológica

ABSTRACT

RITA DOMINGOS: Punitive severity and criminal recidivism: the case of
domestic violence in Portugal

(Oriented by Professor Doutor Carlos Alberto Poiares and guardianship by
Professor Doutor Bartolomé Llor Esteban)

The present investigation is developed with the main goal to increase the knowledge about the performance of the punitive system in the crime of domestic violence and, simultaneously, investigate its preventive operation of criminal recidivism. For this purpose, we propose to explore the performance of the punitive system in the crime of domestic violence through the study of its punitive severity, as well as to infer to what extent the punitive system has a preventive functioning of criminal recidivism, through the study of the action of the legislator and applicator.

In this sense, the sample was consisted by 50 judicial decisions regarding the crime of domestic violence because, as a principle, this concretizes the performance of the legal system over the offender, simultaneously reflecting its retributive, dissuasive and resocializing presupposition. By enhancing the accuracy of the information obtained, only judicial decisions regarding relational domestic violence processes were considered, thus excluding those that we could classify as family contexts (such as violence against offspring).

The judicial decisions that constituted the sample were explored through the Punitive Severity and Psychologization Index – (Secondary Criminalization) (ISPP-CS) (Poiares, 2009) and its quotation platform (Branco & Poiares, 2013) in order to obtain information on trends and changes in the application of the law to defendants for the crime of domestic violence.

The obtained results validate the alert in the literature to the multifactoriality of problems associated with the crime of domestic violence, such as criminal recidivism, being in this circumstance 30% of sample, or alcohol consumption, referred to in 38 % aggressors.

The results reveal an inconsistent performance of the legal system, particularly regarding the variability of the types of sanctions applied, as well as the severity exercised by the Applicator, punishing, on average, softly and not being possible to establish relationships, with statistical significance, with none of the variables predicted in the ISPP-(CS) related to the aggressor.

From the exploration of the obtained results we also find a fragile investment in the resocializer aspect of the punitive action, being the psychological dimension of the aggressor, and therefore fundamental, missing in the overwhelming majority of the judicial decisions consulted. It is also exposed the scarce the investment of the Applicator in the referral to specialized interventions and that can contribute to an effective change of modalities of action, in this case, transgressive.

It has also concluded a fragile permeabilization of Power to Knowledge throughout the entire process of criminalization, reflected in the scarce recurrence of psychological knowledge throughout the process, from the support to the formulation of the judicial decision to its end, which in principle, is assumed resocializer.

Overall, we believe that the conclusions formulated through the present investigation legitimize the need for rupture with the current punitive paradigm, being for the fundamental effect an effective psychologization of the criminalization process, concurring to a more therapeutic jurisprudence and concerted with its presuppositions.

Keywords: domestic violence; criminal recidivism; punitive severity; juspsychological intervention

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS	XXII
1. A construção do criminoso, crime e punição: o papel do Legislador e Aplicador	1
1.1. A alteração na lógica punitiva: O transgressor enquanto objeto de estudo	8
2. A afirmação da Psicologia no território judicial: a convergência de saberes	19
3. De realidade oculta a problemática social: o caso da violência doméstica.....	28
4. Sistema punitivo, fins e meios: a severidade punitiva	46
5. A falência do sistema: o caso da reincidência criminal.....	53
5.1. Aproximações ao pressuposto ressocializador: a intervenção em agressores.....	63
6. A jurisprudência terapêutica e intervenção juspsicológica no contexto da violência doméstica: hipóteses e alternativas.....	69
7. Legitimação do estudo.....	78
8. Metodologia.....	85
8.1. Amostra.....	89
8.2. Medida.....	90
8.3. Procedimento.....	92

9. Resultados.....	96
10. Discussão.....	107
11. Considerações finais	118
12. Referências bibliográficas	126
13. Anexos	I

Lista de abreviaturas:

APA - American Psychological Association

OMS - Organização Mundial de Saúde

ONG - Organizações Não Governamentais

ONU - Organização das Nações Unidas

EUA - Estados Unidos da América

ISPP – (CS) - Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização –
(Criminalização Secundária)

1. A construção do criminoso, crime e punição: o papel do Legislador e Aplicador

Ao longo dos distintos períodos históricos o Homem tem traçado um percurso evolutivo nas suas diversas dimensões, das quais o Direito Penal, bem como a compreensão do crime e do sujeito criminoso não constituíram exceção, adquirindo o Legislador e Aplicador da norma um papel de destaque.

Com o ser humano a consolidar a sua vivência em sociedade, tornou-se necessário garantir a proteção dos seus membros contra aqueles cuja ordem ameaçavam, surgindo a necessidade de definição de um conjunto de regras às quais a conduta humana deveria obedecer, através de um *contrato social*, teoria desenvolvida por autores como Beccaria e Rousseau, emergindo, assim, a criação das Leis. Desta forma pretendia-se uma convivência em harmonia e o bem-estar da comunidade (Rousseau, 1762/2013; Beccaria, 1764/2007).

As leis, conjunto de normas definidas por uma maioria, foram sendo formuladas com base no que, a cada período histórico, era considerado como o normativo e desejado do comportamento humano. No entanto, a existência destas Leis *per si* não era suficiente para garantir o seu cumprimento, pelo que foi necessário criar contrapartidas para quem não obedecesse a determinada normativa, emergindo, assim, as penas (Beccaria, 1764/2007; Beleza, 1998; Agra & Faria, 2012).

Etimologicamente, crime deriva do latim *crimen*, que significa ação contrária à lei; por sua vez, “pena”, tem origem no latim “poena”, que

expressa dor, castigo, suplício, derivando do grego “poiné”, que significa a retribuição em resultado de um dano, e do “ponos” que se traduz por punição, humilhação e sofrimento (Le Blanc, Quimet & Szabo, 2008; Sá, 2012). Ao longo dos tempos várias têm sido as propostas de concetualização do crime e respetiva punição, formuladas por diversos autores, como vemos no exemplo de Platão (IV a.C.), que entendia o crime como um sintoma de uma doença para a qual a pena corresponderia ao remédio; S. Tomás (1269-1272) encontrava na miséria a justificação da criminalidade; ou Morus (1516) para quem o crime se traduz num reflexo da sociedade (Dias & Andrade, 1997).

Na Antiguidade, a essência da punição residia na vingança, fosse privada, pública ou até mesmo divina. Ao longo dos anos e até cerca da Idade Média, estas três tipologias foram coexistindo, não possuindo uma sequência rígida e definida. Durante este trajeto, a punição foi adquirindo variadas finalidades, desde a retributiva, surgindo com a Lei de Talião a preocupação com o estabelecimento de uma proporcionalidade entre a pena aplicada e o crime praticado, até ao ideário preventivo da pena.

Neste período a punição era entendida como necessária para que a justiça corrigisse a injustiça praticada para com a vítima, sendo que, quando possível, o criminoso deveria desculpar-se perante a vítima e reparar o dano causado (Cusson, 2006). Neste propósito, podemos estabelecer um paralelismo com os princípios atuais da justiça restaurativa, perspetiva que prioriza a reconciliação em prol da punição, o tratamento ao invés da retribuição, e que tem sido defendida como abordagem alternativa eficaz ao tradicional sistema judicial (Wormer, 2009; Ptacek & Frederick, 2009).

Durante a Antiguidade, nas penalizações aplicadas, ainda que raramente, encontramos referências à pena de prisão, nomeadamente, nos casos de dívida e corrupção (Morris & Rotman, 1997). A pena de prisão é aprofundadamente refletida por Platão, fazendo a distinção entre a prisão que acondicionava pessoas com vista a prevenção de novos crimes, uma prisão corretiva e uma terceira, punitiva, destinada aos criminosos incorrigíveis.

Ao longo do percurso evolutivo do sistema penal e até à segunda metade do século XVIII a prisão manteve, essencialmente, uma missão preventiva, como uma espécie de depósito onde os arguidos aguardavam a instrução (Lopes, 1993; Vieira, 2005), tendo início a alteração nesta perspetiva com o estreitar da relação entre a prisão e a religião, que surgiu na Idade Média, período em a Igreja adquiria cada vez mais poder e influência nas comunidades.

Durante o Antigo Regime a lógica punitiva baseava-se no castigo do transgressor como resultado das suas ações, mas também como forma de exemplo para a restante sociedade. Com base neste último objetivo eram justificados os castigos severos, exemplares e públicos. Encontramos nestas finalidades os pressupostos retribucionistas e dissuasores da punição (Ribeiro, Costa, Soares & Neves, 1977; Agra & Faria, 2012).

A definição da culpabilidade do agente era essencial para os juristas da época, devendo, mediante avaliação da gravidade do crime e a respetiva culpabilidade do autor, ser determinada uma sanção proporcional. A graduação da severidade penal era longa e terminava nas penas de morte,

associadas a suplícios e tormentos, como a roda, fogueira ou esquartejamento.

O Aplicador da sanção poderia basear a sua atuação nas leis do reino, nos costumes ou ainda na sua própria consideração, procurando garantir que seria aplicada a penalização correspondente à gravidade do crime, submetendo, conseqüentemente, o juízo a tamanha subjetividade.

Tratava-se de uma espécie de imitação da justiça divina através do ordenamento do rei (Agra & Faria, 2012) num período em que se estabelecia uma correspondência entre a moral, o direito e a religião, sendo o crime considerado um pecado e o delinquente entendido como um ser humano igual aos outros, dotado de liberdade e responsabilidade. Por sua vez, o crime era compreendido como resultado de paixões, definindo-o Jousse (1763) como toda a ação praticada injustamente, que é proibida pelas leis, que perturba e causa dano à sociedade.

No que respeita à reincidência criminal, a mesma era julgada severamente, sendo que, a título de exemplo, à terceira condenação por furto simples o transgressor poderia ter como consequência a pena de morte. Neste contexto, a pena tinha uma essência retribucionista, sendo ainda a reabilitação do transgressor uma questão fundamentalmente religiosa, começando a emergir, assim e progressivamente, a pena de prisão como alternativa aos castigos corporais até então praticados. À luz do entendimento da Igreja pretendia-se que durante o tempo de reclusão o transgressor alcançasse o arrependimento, se libertasse do pecado e se aproximasse de Deus, devendo a pena ser dotada de ética e emenda (Lopes, 1993; Cusson, 2006).

Na Idade Moderna teve início um processo de segregação através de casas de correção, manicómios e hospícios, tratando-se de um procedimento com vista à regeneração dos indivíduos através do trabalho regular (Vieira, 2005), bem como a garantia do controlo social. Em 1656 é construído o Hospital Geral de Paris, com estrutura semi-jurídica, inexistindo ainda, no entanto, o conhecimento científico sobre a loucura (Agra & Faria, 2012). Este foi um período de significativa transição do modelo feudal para o capitalismo, verificando-se um incremento do comércio a partir do século XV, bem como o aumento do número de pobres e delinquentes, resultado, nomeadamente, das guerras religiosas que tiveram lugar. O Direito Penal surge como instrumento de segregação social, passando, a título de exemplo, a ser previsto o trabalho forçado do condenado (Foucault, 1975).

A Igreja, em associação à generalização da prática segregacionista, foi a forte impulsionadora da utilização da pena de prisão (Beiras, 2003) notando-se um aumento significativo da sua utilização, de tal forma que passou a ser uma prática generalizada pela Europa, tendo, inclusivamente, sido construídos edifícios especialmente para o efeito, seguindo-se o exemplo do Papa Clemente XI que, em 1703, fundou, em Sant Michel, uma casa de correção para jovens.

A partir do século XVIII, fortemente influenciada pela corrente Iluminista, emerge uma nova ideologia contestando as violentas e primitivas penas até então aplicadas: a Escola Clássica. Com pensadores como Beccaria, Howard e Bentham, passam a ser defendidos os direitos humanos e o Homem a ser entendido na sua essência (Foucault, 1975; Vieira, 2005), emergindo a noção de prevenção geral da pena, passando a sua aplicação a

ter como fim garantir a normatividade necessária à segurança da sociedade (Dias & Andrade, 1997; Beleza, 1998). Sob forte influência de Carrara, o foco do crime é colocado no ato em si e o ónus da pena aplicada na retribuição ao criminoso do mal por si causado, mantendo-se uma lógica essencialmente retributiva da penalização. Com as penas privativas de liberdade a substituírem os castigos corporais, as prisões surgem com um renovado objetivo, passando a funcionar como instrumento de execução do controlo social.

A prisão, enquanto instrumento de penalização, ao encontro do apontado por Foucault (1975), oferece uma clareza na medida, uma proporcionalidade entre o crime praticado e o período de prisão correspondente, sendo o tempo a unidade de medida utilizada, surgindo a ressocialização do indivíduo como um eventual resultado secundário, prevalecendo a lógica retributiva, a lógica do sofrimento. Neste pressuposto revela-se a ainda evidente essência vingativa e emotiva da penalização.

Resultado das alterações sociais ocorridas ao longo do século XVIII, como são exemplo a ampliação da esperança média de vida, o aumento da alfabetização da população, elevando-se o número de habitantes das cidades para o dobro, verificam-se acentuadas alterações na criminalidade, aumentando o número dos delitos praticados, mas diminuído a sua gravidade, traduzindo-se, principalmente, em furtos e roubos (Cusson, 2006; Poiares, 2016a), conduzindo, necessariamente, a alterações na lógica punitiva.

As desigualdades sociais são objeto de atenção por parte de autores como Rousseau (1762), que destaca o impacto do sistema económico nas desigualdades entre indivíduos, ou Mandeville (1723), que debruça as suas

reflexões sobre fenómenos sociais como o alcoolismo, prostituição e pobreza, considerando-os não exclusivamente negativos, pois geram postos de trabalho, e considerando os vícios como um meio para o Estado produzir riqueza (Agra & Faria, 2012).

A este período histórico corresponde um significativo processo de racionalização das penas, abandonando-se o seu carácter cruel, havendo uma crescente preocupação humanitária e de proporcionalidade entre o crime e a respetiva sanção, sendo Beccaria um dos seus principais defensores, considerando que penas moderadas, mas certas, seriam mais eficazes e benéficas do que as severas.

Ao Legislador competia corrigir os sujeitos que ultrapassavam as Leis em busca de benefício próprio, tipificando as ações das quais resultasse maior mal do que bem, devendo a pena concorrer para a felicidade da maioria, anulando as satisfações que resultariam da prática criminosa. Considera-se que apenas as leis podem fixar as penas e que aos magistrados compete exclusivamente a sua aplicação e não interpretação, mediante determinação da culpa do arguido.

Como consequência destes pressupostos, uma vez que à Lei não lhe é possível considerar as circunstâncias da prática do crime, tal como não era ao seu Aplicador, o arguido tendia a ser excessiva ou insuficientemente sancionado, conduzindo a que, por vezes, fossem absolvidos sujeitos sabidos culpados com o fim de evitar a aplicação de severas sanções.

Apesar da inovação e desenvolvimentos na lógica punitiva que acarretou, a influência da corrente iluminista nas reformas penais não

conduziu a um aumento da eficácia dos seus pressupostos, pelo contrário, verificando-se um aumento da criminalidade, da sua diversidade e havendo elevados níveis de reincidência criminal (Beleza, 1985; Dias & Andrade, 1997; Cusson, 2006; Beccaria, 2007; Agra & Faria, 2012).

1.1. A alteração na lógica punitiva: o transgressor enquanto objeto de estudo

No século XIX, face às circunstâncias sociais, históricas e políticas, acentua-se o interesse e, por conseguinte, os estudos sobre o sujeito criminoso, enquanto principal personagem da tragédia do crime, consagrando-se a penetração da Psiquiatria e, posteriormente, da Psicologia nos domínios jurídicos, emergindo, assim, a preocupação com a *perigosidade do criminoso* (Manita, 1997).

Encontramos em Esquirol (1838) a primeira proposta de definição e caracterização do criminoso sobre o conceito de *Monomania Homicida*, considerando a existência de uma forma de loucura cujo principal sintoma seria a prática de crimes. Anos depois, Morel (1857) desenvolve a *Teoria da Degenerescência*, conferindo uma maior amplitude ao conceito de perigosidade, tornando-se a sua teoria a base de estudos futuros das diferentes áreas do saber (Dias & Andrade, 1997; Agra & Faria, 2012).

Inspirado por Morel, Lombroso desenvolve os seus estudos anatómicos e morfológicos, procurando identificar as características morfológicas que caracterizassem o sujeito transgressor, chegando à definição de um conjunto de tipologias de criminosos. Com base neste autor o criminoso seria um

fenómeno de atavismo, uma regressão da espécie humana (Beleza, 1985; Manita, 1997; Lombroso, 1876/2013).

É essencialmente através dos estudos e obras de Lombroso que se inaugura uma distinta corrente de pensamento designada de Escola Positiva Italiana. A este período é tendencialmente atribuído o nascimento da criminologia, sendo caracterizado pelo início do estudo científico da criminalidade, existindo, no entanto, na literatura referências a estudos sobre o fenómeno datados anteriormente. Nesta linha de pensamento entende-se que o sujeito criminoso se encontra condicionado na sua ação pelo que, por conseguinte, precisa de tratamento.

Surge, assim, a prevenção especial, assente nas penas e no pressuposto ressocializador, fundamentalmente no século XIX, e intimamente associado às penas de prisão. Passou a entender-se que durante o cumprimento da pena os transgressores alcançariam o arrependimento, concorrendo para que, de futuro, não reincidissem na criminalidade. A essência do crime é colocada no ator, ao invés o ato, visando a defesa da sociedade contra o transgressor. Nesta alteração do foco do ato para o ator emerge a necessidade de que as penas aplicadas passem a considerar a personalidade do criminoso, bem como a sua perigosidade.

Neste período verifica-se uma alteração na lógica penal, em que a ciência substitui Deus, o pecado é substituído pelo conceito de crime e a penitência pelo tratamento. A punição a aplicar era definida com base no *estado perigoso* do criminoso, bem como no risco que este representaria para a sociedade (Beleza, 1985; Manita, 1997).

Trata-se de um período de alteração do paradigma compreensivo-explicativo da criminalidade, do criminoso e do respetivo sistema punitivo. Ao contrário da Escola Clássica, os pensadores da época defendiam os seus ideários com base no estudo científico do fenómeno criminal, entendiam o sujeito criminoso como dotado de pré-disposições criminógenas, emergindo a pena numa lógica de tratamento, concretizando a finalidade da prevenção especial das penas. A ausência de livre-arbítrio relativamente ao comportamento do criminoso conduzia, simultaneamente, ao questionamento da eficácia da punição (Dias & Andrade, 1997).

Inseridos nesta corrente de pensamento, destacamos os trabalhos de Ferri, que desenvolve os seus estudos seguindo a linha de Lombroso, atribuindo, no entanto, a essência da explicação da criminalidade aos fatores sociais e de Garofalo (1885), que procura nas dimensões morais e psicológicas a compreensão da criminalidade, considerando a *anomalía moral* como causa do crime. O entendimento dos autores sobre a punitividade é também distinta, Ferri acredita na lógica preventiva, no entanto visando sempre a proteção da sociedade, já Garofalo questiona a utilidade da prevenção, considerando a expulsão, ou mesmo eliminação, dos sujeitos que demonstram incapacidade para se integrarem socialmente.

Neste contexto, a reincidência criminal era fortemente punida, nomeadamente com medidas de detenção por tempo indeterminado e, sempre que se verificassem condições para a prevenção, previa-se a realização de intervenções específicas para esse fim (Manita, 1997; Baratta, 2000; Agra & Faria, 2012).

No decurso do século XIX desenvolve-se e consolida-se uma corrente explicativo-compreensiva da criminalidade fundamentada, essencialmente, em teorias sociológicas, designada por sociologia criminal (Dias & Andrade, 1997). Trata-se de uma abordagem que procura explicar a influência e interferência de fatores de índole social na conduta humana, particularmente no que à criminalidade respeita, desenvolvendo-se sobre distintas perspetivas.

Neste enquadramento surge, no segundo quartel do mesmo século, a Escola Franco-Belga do meio ambiente, explicando a criminalidade essencialmente através de fatores sociais como a pobreza, meio familiar ou a educação. Destacamos que com esta Escola teve início a utilização de informação sobre a forma estatística no estudo da criminalidade, com enfoque ecológico e cartográfico, demarcando-se assim em termos de metodologia com outras Escolas de pensamento (Beleza, 1985).

No âmbito da corrente da sociologia criminal é essencial referir autores como Lacassagne, que atribui às causas sociais a explicação da criminalidade, considerando que cada sociedade “constrói” os seus próprios criminosos; Tarde, que compreende a criminalidade com base em interpretações psicológicas, formulando as *leis da imitação*; e Durkheim, que desenvolveu o conceito de *anomia*, referindo-se à indiferença perante as regras, conduzindo ao seu desrespeito, resultado de enquadramentos de isolamento e alienação, consequência da divisão do trabalho característico do capitalismo, defendendo ainda a normatividade do desvio, inerente a qualquer sociedade (Beleza, 1985; Manita, 1997; Durkheim, 1999; Baratta, 2000; Poiars 2016).

A corrente fenomenológica surge no século XX introduzindo alterações no paradigma compreensivo do sujeito criminoso, fortemente influenciada por De Greeff, visando a compreensão do transgressor a partir das suas vivências internas, estudando o processo de passagem ao ato. Esta corrente considera que não existem diferenças qualitativas entre criminosos e não criminosos, mas sim quantitativas, relativamente a um conjunto de características que facilitariam a passagem ao ato criminoso. O transgressor passa a ser entendido com base numa perspetiva holística, enquanto ser portador de uma história de vida, bem como de todo um conjunto de características psicológicas, sociais, morais, afetivas, entre outras, que o conduziram a trajetórias transgressivas.

No apuramento da responsabilidade penal do criminoso a tónica deixa de residir exclusivamente na controvérsia entre liberdade e determinismo, passando a ser considerada necessária a efetiva compreensão do indivíduo.

No mesmo período, com base numa distinta lógica, Pinatel (1975) desenvolve os seus estudos sobre o sujeito criminoso considerando ser possível a distinção entre delinquentes e não delinquentes através da análise dos seus traços de personalidade. O autor conceptualiza o “núcleo central da personalidade criminal”, teoria que defende a necessidade de presença de determinados traços de personalidade como o egocentrismo, a labilidade, agressividade e indiferença afetiva para que os crimes graves ocorram.

Sob influência da corrente fenomenológica surge o *labelling approach*, colocando a tónica da explicação do comportamento desviante na reação social (Andrade, 1995), traduzindo-se na formulação de teorias explicativas do comportamento desviante com base em dimensões sociais e culturais.

Nesta abordagem, Tarde desenvolveu a teoria da imitação, considerando que os comportamentos desviantes seriam disseminados através da imitação. Sutherland dedica-se ao estudo do processo ao longo do qual um sujeito se torna criminoso, compreendendo o comportamento criminal como aprendido através de processos interpessoais. O mesmo autor defende que a principal característica do crime é ser um comportamento proibido pelo Estado, conduzindo a uma reação penal. Sellin, por seu lado, entende que a cultura orienta o comportamento, dedicando-se à tentativa de conceptualização da distinção entre norma e desvio, acabando por concluir que o crime resulta de um conflito cultural, estando em oposição as normas de um Estado e as normas específicas de determinado grupo de indivíduos, o que antecede - e abre caminho - às teorias da subcultura que emergiram nos anos 1960. Szabo encontra na capacidade de integração ou, pelo contrário, de exclusão, das sociedades a génese da criminalidade. O autor considera que numa sociedade desintegradora há diferenças culturais e de valores que criam e legitimam ações opostas às da maioria. Para Merton, o crime traduz-se num comportamento adaptativo, enquadrado numa sociedade desigual e com poucos recursos (Sellin, 1938; Dias & Andrade, 1997; Baratta, 2000; Cusson, 2006).

A reação social à desviância foi igualmente objeto de estudo no século transato, sendo o crime entendido como resultado de uma determinada reação social, emergindo, neste sentido, a substituição do termo *crime* por *desviância* (Poiars, 2016b).

A supremacia do sistema punitivo por parte das classes sociais favorecidas, enquanto instrumento de dominação, foi denunciada por autores

como Vold (1958), Turk (1969) e Foucault (1975). Com base nesta perspectiva, seria a influência política de determinados grupos sociais que estariam na gênese da criação de Leis que os favorecessem. Assim, as pessoas socialmente desfavorecidas seriam mais condenadas pois os seus costumes seriam frequentemente criminalizados.

Becker, em 1971, formula definitivamente a teoria de etiquetagem, considerando que as sociedades criam o desvio ao formularem regras e ao qualificarem as pessoas que as transgridem de marginais. Nesta perspectiva, o crime traduz-se essencialmente na aplicação de uma qualificação a alguém que transgrediu determinada regra (etiqueta), não estando o mesmo relacionado com características específicas do seu autor. Ao etiquetar determinado sujeito como transgressor, a sociedade dirigiria um processo de estigmatização social, promovendo a interiorização de uma identidade negativa por parte do sujeito, conduzindo a enquadramentos de exclusão e ao desenvolvimento da desviância.

O processo de etiquetagem de determinado sujeito como transgressor, resultado de certo comportamento praticado, funciona enquanto sistema social de controlo informal, gerando, necessariamente, impacto no processo de criminalização, desde o Legislador (criminalização primária), enquanto *produtor de Leis*, ao seu Aplicador (criminalização secundária), enquanto agente executor das mesmas. Neste contexto, o processo de criminalização é dinâmico, ao invés de estático, sofrendo influências em ambos os seus sentidos, resultado da interação com o sistema social, enquanto condicionador da conduta humana (Andrade, 1995; Dias e Andrade, 1997; Poiares, 2016a).

O entendimento do Homem enquanto *ator social* é formulado por Touraine, considerando o sujeito enquadrado num dado contexto e temporalidade, construindo ao longo do seu percurso existencial significados próprios para a sua ação, assim como para o posicionamento que adota perante o mundo. Assim, uma efetiva compreensão do sujeito deve contemplar a sua temporalidade, considerando os processos de construção realizados ao longo da história de vida, bem como à sua intencionalidade, que respeita aos significados por si construídos (Touraine, 1992; Manita, 2000; Fonte, 2007).

No seguimento da linha fenomenológica, Agra (1990) desenvolveu a teoria do *sujeito autopoietico*, modelo no qual o indivíduo é compreendido enquanto construtor de si, das suas realidades e vivências, dotado de capacidade de evolução e adaptação ao meio. Entendido como um sistema complexo, o sujeito é capaz de construir projetos de vida, criar e definir posições existenciais significativas para si. Neste processo de construção o indivíduo sofre influências de fatores internos e externos a si, como a dimensão psicológica, biológica, eco-social da sociedade e cultura em que se insere, posição social ocupada, o contexto que integra ou as relações que estabelece (Manita, 2001).

Com base na teoria desenvolvida por Agra, o sujeito organiza-se em três sistemas que se articulam entre si: sistema de personalidade, sistema de ação e sistema de significação. A teoria do sujeito autopoietico foi desenvolvida e aplicada ao fenómeno da transgressionalidade, conduzindo, assim, à formulação de *posições de significação transgressiva*, que co-

existem com os restantes planos de significação definidos pelo autor (Manita, 1997; Fonte, 2007).

O Homem, entendido como construtor de si, é dotado de capacidade de mudança, de evolução, construção dos seus trajetos e definição de posições de significação existenciais que poderão, ou não, incluir a criminalidade. Assim, as explicações deterministas e absolutistas sobre o criminoso e a criminalidade tornam-se reducionistas da complexidade tanto da individualidade humana como do fenómeno criminal. A prática de crimes deverá ser compreendida e explicada enquanto modalidade de ação adotada pelo seu ator, enquadrada na sua história de vida, num determinado contexto e temporalidade, através da interação com o mundo (Manita, 2000).

O percurso evolutivo relativo à conceptualização e compreensão do sujeito transgressor e do crime praticado refletiu-se, necessariamente, no sistema penal. Contemporaneamente, as penas têm como fim último a prevenção geral e especial. A prevenção geral visa o controlo social, pretendendo evitar que as pessoas cometam crimes, com base nos princípios que a norma penal define. Esta forma de prevenção poderá obter-se de duas formas: a) Prevenção geral de integração, que se sustenta no Direito Penal como orientador dos comportamentos Humanos, definindo o que é norma e desvio numa determinada sociedade. Neste sentido as penas são aplicadas com vista ao reforço da confiança dos cidadãos em relação às normas penais; b) Prevenção geral de intimidação, baseada na crença de que as consequências adversas do incumprimento de determinada norma intimidariam a população a não transgredir.

Por sua vez, a prevenção especial baseia-se na convicção de que a submissão do sujeito a determinada pena irá evitar que recaia na transgressão novamente, visando a emenda e correção do indivíduo (Beleza, 1998; Silva, 2011). Encontramos nesta definição um pressuposto ressocializador, na medida em que a aplicação da pena irá prevenir futuras reincidências. Porém, se a pena não detém um efeito ressocializador, pretende-se que, pelo menos, intimide o transgressor e o iniba de novas práticas criminais.

Presentemente a pena de prisão é a base do sistema punitivo e apesar do inquestionável avanço no que respeita às práticas punitivas que a mesma representa, tem vindo a ser questionada a sua efetiva eficácia. As penas alternativas à prisão têm vindo a surgir com o objetivo de aproximar a sanção dos seus pressupostos, nomeadamente, ressocializadores, colocando novos desafios ao Legislador e Aplicador da Lei, no que respeita à sua execução (Sá, 2012).

Conforme verificamos, a lógica subjacente à prática punitiva do sujeito transgressor traçou um percurso ao longo do qual a aplicação de penas adquiriu uma função instrumental, variando as suas finalidades e características em conformidade com os distintos períodos histórico e evolutivo das sociedades, em estreita relação com o entendimento vigente do transgressor e da transgressão. Tratou-se de uma trajetória que progrediu dos castigos corporais, num registo de “ortopedia punitiva” (Foucault, 1975), às medidas privativas de liberdade e, atualmente, às penas alternativas, como vemos no exemplo do trabalho a favor da comunidade (Silva, 2011).

O interesse pelo criminoso e respetivo indivíduo crime desenvolveu-se e consolidou-se ao longo do século XIX, tratando-se assim do período

científico do Direito Penal, consumado através da permeabilidade, ainda que condicionada, à Psiquiatria e Psicologia, nomeadamente. Este é o período que se prolonga até ao presente e ao longo do qual o entendimento do sujeito transgressor variou do louco ou alienado à monomania homicida, passando pela luta entre o livre arbítrio e a corrente determinista, homem perigoso e personalidade criminal, culminando, já em tempos presentes, num entendimento do sujeito transgressor como construtor de si, parte integrante de diversos subsistemas, com uma apreensão do real própria e uma posição existencial significativa para si, neste caso, transgressiva (Manita, 2013).

2. A afirmação da Psicologia no território judicial: a convergência de saberes

A relação entre a Psicologia e o Direito remota a longa data, no entanto, apenas no final do século XVIII se afirma na Europa, particularmente na Alemanha e Itália, consolidando-se nos finais do século XIX, resultado da preocupação de vários autores relativamente aos saberes necessários para um efetivo conhecimento do criminoso (Poiares, 2001; Sierra, Jiménez & Buela-Casal, 2006; Manita & Machado, 2012).

Conforme verificámos, o ponto de partida de uma efetiva intercontribuição entre a Psicologia e o Direito estabeleceu-se aquando do surgimento da preocupação com a *perigosidade* do transgressor, passando a importar ao Direito a sua valoração para efeitos de determinação da pena, sendo, para o efeito, fundamentais os saberes psicológicos. Esta progressiva aproximação entre as áreas resulta de uma contínua, e ainda hoje em curso, permeabilização do Poder ao Saber, motivada pelos denominadores comuns que possuem: o transgressor, ainda que valorizado sob diferentes óticas, e os comportamentos, ancorados não apenas no cardápio jurídico, antes no campo da saúde mental. Ao Direito importa o autor e respetivo comportamento que transgrediu determinada normativa, por outro lado, à Psicologia importará estudar as motivações psicológicas do transgressor que estão subjacentes à sua ação (Poiares, 2001; Poiares, 2008; Sierra, Jiménez & Buela-Casal, 2006).

Estava, então, anunciado um percurso de progressivos e contínuos apelos à intervenção da Psicologia numa maior compreensão e explicação do transgressor e respetiva ação transgressiva.

Introduzida a prática psicológica no território judicial, amplificam-se as necessidades da sua intercontribuição, refletindo-se num encadeamento de apelos à sua intervenção, nomeadamente, no que respeita ao testemunho, tanto de vítimas como de transgressores, na obtenção de evidências delituosas, na compreensão do crime e respetiva motivação psicológica, na realização de perícias sobre as mesmas, bem como no que concerne à ressocialização do delinquente (Mira Y López, 1932).

Da dificuldade em definir e identificar um denominador comum para as plurimas interseções entre a Psicologia e o Direito foram surgindo variadas propostas de designação para as mesmas (Arce, 2005), nem sempre estando em harmonia entre si.

Psicologia do comportamento desviante seria a definição mais abrangente, focando-se no desvio, seja legal, social ou cultural, estabelecendo correspondências entre o patológico e normativo, o criminal e não criminal. *Psicologia da Justiça* é tendencialmente associada aos saberes psicológicos aplicados à compreensão, avaliação ou intervenção nos variados contextos judiciais. Sob o espectro de intervenção da Psicologia da Justiça emerge a *Psicologia Legal*, que se relaciona com a intervenção realizada no âmbito do cruzamento entre os domínios da Psicologia e da justiça. Já a *Psicologia Jurídica* corresponderia à aplicação dos conhecimentos psicológicos a um melhor exercício do Direito. Para uma melhor clarificação da sua concetualização recorreremos à definição proposta pelo Colégio Oficial de Psicólogos em Espanha, que entende a Psicologia Jurídica como o campo de atuação do saber psicológico especializado, que incide no estudo do comportamento das pessoas envolvidas no território

jurídico. Por sua vez, a *American Psychological Association* (APA), através da Divisão 41, defende que a intervenção da Psicologia no domínio judicial pretende contribuir para um melhor conhecimento da lei e respetivas instituições legais, tratando-se da aplicação da Psicologia ao sistema legal. A definição de *Psicologia Forense* traduz-se num conceito mais amplo comparativamente aos anteriores e respeita a todos os contextos que relacionam o sujeito com a lei. Urra e Vázquez (1993) definem-na como a ciência que abrange todos os saberes psicológicos no âmbito da justiça, concorrendo para um melhor exercício do direito. Pela maioria dos autores esta é entendida como uma subdisciplina da Psicologia da Justiça, que se dedica em particular à intervenção psicológica que confere suporte à tomada de decisão judicial, detendo um papel esclarecedor, intervindo junto dos diversos atores do sistema judicial como agressores, vítimas, testemunhas ou magistrados. Já a *Psicologia criminal* refere-se ao estudo do crime e do seu protagonista, o criminoso (Mira Y López, 1932; Urra, 2002; Sierra, Jiménez & Buela-Casal, 2006; Gonçalves, 2010; Manita & Machado, 2012).

Resultado das diferentes problemáticas sociais e enquadramentos culturais conducentes à necessidade de interseção entre os saberes psicológicos e judiciais, vemos o exemplo dos EUA, em que as principais áreas de intervenção e investigação da Psicologia Forense se distinguem das anteriormente descritas e se subdividem em: *Psicologia da Polícia*, relativa à aplicação dos conhecimentos psicológicos à ação policial e segurança pública; *Psicologia do Crime e Delinquência*, entendida como a ciência do comportamento e processos mentais relativos aos agressores adultos e juvenis; *Vitimologia*, vinculado ao estudo de pessoas que tenham vivenciado

determinado dano físico, psicológico, social ou financeiro enquanto vítimas de certo crime; *Psicologia Legal*, amplo campo de estudo relacionado com a Psicologia e os tribunais; por último, a *Psicologia Correccional*, que respeita à intervenção psicológica orientada para a ressocialização e integração social dos transgressores (Bartol & Bartol, 2012).

De facto, a Psicologia Jurídica emerge e consolida-se através da sua prática, e não em resultado de reflexões ou pressupostos teóricos, pelo que a procura da sua conceptualização em função dos variados campos de atuação no território judicial origina uma tipologia de Psicologia Jurídica que, no fundo, nada mais seria do que a aplicação dos saberes psicológicos ao âmbito jurídico. Assim, a Psicologia Jurídica deverá aludir ao universo e não a uma ou várias “psicologias” próprias desse mesmo universo (Chaud, 2010; Bartumeus, 2013).

É a partir de meados dos anos 80 que se inicia uma progressiva afirmação da Psicologia, adquirindo visibilidade os seus distintos ramos de atuação, no qual se inclui a Psicologia da Justiça (Gonçalves, 2010). A solicitação do Direito à intervenção psicológica tem-se tornado cada vez mais explícita, refletindo-se na progressiva impressão de constructos psicológicos nas normativas, como vemos no exemplo de *comportamento*, *consciência*, *ato deliberado*, *perturbação* ou *doença mental*, mas também na produção legislativa que, diretamente e indiretamente, reflete, apela e requer de intervenção psicológica, particularmente no que respeita à criação em 1982 do Instituto de Reinserção Social, ou ao domínio das toxicodependências, em que se verificou uma alteração na sua racionalidade

passando a ser considerada a intervenção psicossocial, ou ainda a reforma e reorganização penal (Poiares, 2001b; Poiares, 2013).

Consolida-se a intercontribuição de saberes entre a Psicologia e o Direito, traduzindo-se na cientificidade da ação judicial, resultado da introdução de saberes, práticas e métodos da Psicologia, enquanto ciência, no território judicial, emergindo, assim, a *intervenção juspsicológica* (Poiares, 2001a; Poiares, 2013). Neste sentido, ambas as disciplinas articulam-se através de conteúdos teóricos, traduzindo-se na base de atuação do psicólogo no contexto jurídico e judicial, conduzindo à edificação de um marco teórico interdisciplinar associando o saber psicológico e as normativas jurídicas (Chaud, 2010).

Independentemente da área específica em que o psicólogo intervém no contexto judicial, a sua prática deve ser dotada de um forte sentido ético e reger-se pelo que são considerandos os princípios gerais: respeito, pela pessoa junto da qual intervém, abstendo-se de crenças próprias e formulação de juízos de valor, mas também pela ciência que exerce; competência, garantindo deter os conhecimentos teóricos e práticos necessários a um rigoroso exercício profissional; responsabilidade, estando consciente da relevância da sua atuação e vulnerabilidade dos contextos em que intervém; integridade, revestindo a sua prática de honestidade (Bartumeus, 2013).

É fundamental atender-se a algumas das que constituem as principais singularidades da prática psicológica em contexto forense e que regulam, necessariamente, a atuação do psicólogo, como as particularidades das relações estabelecidas (Towl & Crighton, 2010), condicionadas pelos limites da confidencialidade estabelecidos, a motivação dos indivíduos

(transgressor, vítimas, outros atores sociais) para a intervenção, muitas vezes imposta, o cenário em que esta decorre, frequentemente intimidatório e coercivo, bem como o contexto, habitualmente vulnerável, em que se insere.

Neste enquadramento, a prática metodológica do psicólogo forense deverá, rigorosa e objetivamente, orientar-se para a captação, descodificação, compreensão e explicação dos comportamentos e fenómenos (Poiares, 2001a). Neste processo, conforme nos alude Debyust (2012), a observação detém função determinante, particularmente no que concerne à *captação* dos fenómenos, constituindo-se como suporte à intervenção psicológica. Ao psicólogo é exigido um acentuado sentido crítico e abertura à experiência, na medida em que importa dotar este processo de observação da maior neutralidade possível, o que se reconhece extremamente difícil, particularmente no contexto forense, em que tão frequentemente contactamos com trajetos e enquadramentos vivenciais em situação limite, díspares da lógica *normativa*, podendo, assim, condicionar a objetividade tão necessária. Este mesmo facto abarca alguns perigos, na medida em que ao contactarmos com uma realidade que nos é estranha e desconhecida é extremamente fácil, frequentemente automático e inconsciente, que preenchemos essas lacunas de informação e conhecimento com estereótipos e ideias pré-concebidas sobre fenómenos, pessoas ou grupos, minando, assim, a intervenção, o que reforça e legitima a necessidade de sentido crítico que ao psicólogo forense é exigida.

Efetivamente, importa entender o transgressor como um ator social, construtor de si e dos seus trajetos, e, simultaneamente, produto das suas

próprias histórias, dotado de *auto-organização*, na medida em que é capaz de desenvolver uma posição existencial significativa para si e organizar-se em função da mesma, emergindo, assim, a necessidade de compreender o *processo* subjacente à ação transgressiva, ao invés das suas *causas*, sendo necessária a leitura das suas próprias narrativas (Debyust, 2012; Pina, 2012).

Resultado da criminalização da violência doméstica e progressiva conscientização social para a sua problemática, emergiu, ainda que tímida e gradualmente, a necessidade de intervenção psicológica nos meandros da violência, particularmente praticada contra a mulher. As possibilidades de intervenção do psicólogo forense neste contexto são várias, desde ao nível da Psicologia do Testemunho, âmbito de particular relevo nesta tipologia de crime em que, resultado das suas especificidades, o testemunho é fundamental à decisão judicial, avaliação de danos, acompanhamento e suporte à vítima durante processo judicial, intervenção ao nível do agressor, tanto durante processo judicial como durante a criminalização terciária, correspondente à promoção da sua ressocialização (Álvarez-Bello, 2013).

O reconhecimento da importância da intervenção junto do agressor surge tardiamente, fruto da persistente perspetiva de que a intervenção junto das vítimas deveria ser prioritária e exclusiva, considerando-se um desperdício o investimento em intervenções junto de agressores, refletindo, implicitamente, uma desculpabilização e desvalorização da sua ação transgressiva. Apenas com o reconhecimento de que a punição em exclusivo não conduziria a uma alteração do comportamento transgressivo, que a intervenção junto dos agressores seria essencial tanto à proteção da vítima como à diminuição da reincidência criminal, não refletindo uma

desvalorização mas, ao invés, um incentivo à responsabilização pela sua ação, assim como foram reconhecidos os elevados custos, nomeadamente públicos, que resultavam desta tipologia de violência, passaram a ser considerados e desenvolvidos programas de intervenção junto dos agressores em países como Nova Zelândia, EUA, Canadá, mas também na Europa, nomeadamente em Portugal, a partir da década de 90, consolidando-se, assim, uma nova área de intervenção do psicólogo forense.

Um outro eixo fundamental de interseção entre o Direito e a Psicologia forense é a formação da decisão judicial, considerando os diversos atores sociais envolvidos no processo de criminalização, bem como as interações e dinâmicas que estabelecem entre si, como são exemplo o Legislador, Aplicador, o Transgressor, a Vítima ou as Testemunhas, reconhecendo-se, atualmente, a influência que as motivações ajurídicas exercem sobre o sentenciar. Das investigações desenvolvidas sobre este eixo constatou-se que as medidas penais aplicadas sofrem, por conseguinte, a influência de motivações extra judiciais, repercutindo-se na opinião pública como sendo demasiado brandas ou severas, variando conforme identificação ao criminoso e transgressão praticada, no entanto sem qualquer fundamento científico, legitimando a necessidade de se aprofundar o conhecimento a este nível (Poiares, 2005; Gramet & Darley, 2009; Keller, 2010; Poiares & Louro, 2012).

Particularmente no que concerne ao crime de violência doméstica, reconhecendo-se as especificidades em termos de relações, interações e influências recíprocas entre diversos atores sociais do processo jurídico, nomeadamente o arguido, a vítima e as testemunhas, mas também no que

concerne a outros elementos do processo envolvidos, como o juiz, advogados ou agentes policiais, refletindo, inconsciente e automaticamente, toda uma panóplia de crenças e estereótipos edificados em torno da violência doméstica, valida uma particular acuidade do sistema judicial no que concerne à sua atuação nesta tipologia de crime.

Conhecendo-se as particulares desta tipologia de crime relacionadas ao contexto de familiaridade em que a ação delituosa ocorre, os acentuados índices de reincidência, o risco e sofrimento para a vítima, acresce a necessidade de uma atuação do sistema punitivo concertado com as exigências da situação e, por conseguinte, devidamente suportado pelos contributos do saber psicológico.

3. Da realidade oculta a problemática social: o caso da violência doméstica

O entendimento da violência doméstica, bem como do seu perpetrador, variou ao longo do percurso histórico da sociedade em conformidade com as ideologias dominantes em cada período, verificando-se uma evolução conceptual em consonância com as construções edificadas e significações atribuídas à sua prática (Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009; Quaresma, 2012).

A definição e compreensão da violência implicam, necessariamente, o seu enquadramento temporal e espacial. Globalmente, podemos considerar a violência como uma transgressão a um conjunto de normas definidas socialmente, sendo simultaneamente entendida como a utilização intencional de força, um exercício de poder sobre o outro, que o lese, na sua liberdade e direitos (Antunes, 2002; Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009; Bhona, Lourenço & Brum, 2011). O entendimento de violência enquanto representação social é também referido na literatura, designadamente para vítima, pois esta é quem considera como violenta a ação que vivenciou (Lisboa, Barroso, Patrício & Leandro, 2009).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002) define a violência como a utilização intencional de força, sob a forma de ameaça ou real, contra o próprio, outros, grupos ou comunidade, da qual resultem, ou possam resultar, consequências adversas, como morte, dano psicológico ou prejuízos (Bhona, Lourenço & Brum, 2011). No que respeita especificamente à violência contra as mulheres, a mesma Organização caracteriza-a como todo o tipo de ação violenta praticada contra as mulheres motivada por questões de género

(Fonseca, Ribeiro, & Barbosa, 2012), conceptualizando, assim, uma realidade que tem acompanhado todo o percurso histórico da humanidade.

As agressões perpetradas às mulheres acompanham o percurso histórico-evolutivo das sociedades, remontando ao período bíblico, sendo transversal a culturas, regiões e sociedades (Gelles, 1995; Dias, 2012). A título de exemplo, na literatura grega encontramos referências ao papel submisso da mulher na sociedade, considerando-se que a mesma deveria ser discreta, não discutir ou falar primeiro que o homem, bem como na legislatura romana, que aceitava o homicídio conjugal em situações de adultério, alcoolismo ou outros comportamentos considerados desadequados (Dias, 2012).

Até ao século XX cabia ao marido o direito de castigar a sua esposa, sendo veiculada através das diversas Ordenações, nomeadamente as Filipinas, a posição de desvantagem e submissão da mulher, legitimando-se a violência de género, e traçando-se um percurso em que o poder de controlar as mulheres e crianças era detido pelo homem, sendo estes considerados legalmente como dependentes (Dias, 2012). Esta tradição legal e cultural manteve-se vigente ao longo do percurso histórico, tendo acentuadas repercussões, que ainda hoje existem, no que respeita ao papel da mulher na sociedade (Cortizo & Goyeneche, 2010; Dias, 2010).

Apesar das evoluções e desenvolvimentos que se têm verificado nas sociedades ao longo dos tempos, da conjugalidade, contemporânea e tendencialmente, depender da opção de escolha de cada parceiro, a violência não deixa de existir e de se manter oculta, resultado da privacidade e

individualidade que o casal mantém (Portugal, 2000; Cortizo & Goyeneche, 2010), sendo, assim, uma problemática atual.

A noção da família idealizada, presente no nosso inconsciente coletivo, bem como a identificação com os papéis sociais de cônjuges, pais, mães, filhos. remete-nos para uma dimensão socialmente edificada, condicionando, assim, a efetiva capacidade de perspetivação e compreensão da problemática da violência doméstica. A produção legislativa refletiu e integrou as influências do que ao longo dos anos foi considerado socialmente aceite e normativo, como a figura do homem como gerador do rendimento familiar, o papel central da mulher na educação dos filhos, entre outras, cristalizando, conseqüentemente, a posição de desvantagem de poder da mulher na relação (Cortizo & Goyeneche, 2010; Dias, 2012), tratando-se de uma questão de natureza ideológica e política, muito cara ao capitalismo.

Após o 25 de abril foram efetuadas diversas alterações legislativas, entrando em vigor a nova Constituição, que considera a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, e só em 1978 foi eliminado o conceito do “chefe de família”, até então, a jurisprudência portuguesa aceitava *uma moderada intervenção corretiva por parte do marido*, sendo que apenas no Código penal de 1982, através do art. 153º, passou a ser incluído o crime de maus tratos entre cônjuges, menores ou subordinados, ainda que num registo pouco claro e gerador de interpretações diversas.

A problemática da violência contra as mulheres introduz-se no domínio público, enunciando-se enquanto problemática e adquirindo maior visibilidade a partir dos anos 70, com a formulação da “síndrome da mulher batida”, utilizada para designar o conjunto de sintomas psicológicos

verificados em mulheres que reiteradamente eram batidas pelos homens, fortemente influenciado pelos investimentos de grupos feministas. Agora impulsionada, mas já em curso desde os anos 60, o papel social da mulher sofre alterações através da conquista de direitos, alcançando determinadas posições sociais, emancipando-se economicamente, verificando-se, inclusivamente, alterações nas tradições, nomeadamente, na aceitação da violência praticada no seio familiar, deixando esta, cada vez mais, de ser um fenómeno *aceite* (Antunes, 2002; Dias, 2012).

À luz da renovada compreensão do fenómeno, a violência contra as mulheres passa a ser entendida e conceptualizada como modalidade de ação que traduz formas de violência física, sexual ou psicológica, que tendencialmente se relacionam entre si, concretizada pelo agressor com vista o exercício de poder sobre a vítima (Silva, Coleho & Capon, 2007; Dias, 2012).

Nos anos 80, a violência perpetuada no seio da família contra mulher foi considerada um risco para a saúde pública, surgindo, em 1991, a primeira lei desenvolvida com o objetivo de proteger as mulheres vítimas de violência, a Lei n.º61/91, de 13 de agosto, onde o Estado era, oficialmente, responsabilizado pela promoção de medidas de prevenção e apoio a mulheres vítimas de crimes. Nesta produção legislativa ainda depende da mulher a formalização da queixa na polícia ou tribunal (Antunes, 2002).

Neste seguimento, na década de 90 em Portugal desenvolveram-se, de forma estruturada, várias iniciativas e estratégias por parte das Organizações Não Governamentais (ONG) com vista o apoio à vítima de violência doméstica.

Estas alterações ideológicas tiveram também expressão em termos internacionais, como vemos no exemplo da Plataforma de Ação de Pequim, em 1995, haver considerado a violência doméstica como uma área crítica, formulando-se recomendações para que os Estados Membros desenvolvessem iniciativas com vista a sua supressão, ou ainda o Roteiro Europeu para Igualdade, que assinalou a violência doméstica como uma área de intervenção prioritária para o período de 2006 a 2010 (Lisboa *et. al*, 2009).

Em 1995 houve esforços no sentido de alterar o texto referente ao ilícito, clarificando-o, e um acentuar da respetiva penalização, ao mesmo tempo que a violência doméstica era considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) uma grave violação dos direitos humanos e um obstáculo à igualdade, desenvolvimento e paz (Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2010), tratando-se de um marco na alteração de paradigma relativamente à perspetivação da mulher. No ano de 1998 novas alterações são efetuadas no sentido de aumentar a eficácia da aplicação legislativa, deixando o processo de estar dependente de queixa mas cabendo ainda à vítima a última palavra.

Finalmente, no ano 2000, surge a Lei n.º 7/2000, de 27 de maio, em que através do artigo 152º, “Maus tratos e infração de regras de segurança”, adquire natureza pública a violência praticada contra o cônjuge ou similar.

Em 2007 há uma diferenciação e surge o artigo 152º do Código Penal, prevendo o crime de violência doméstica. Através do referido artigo, a violência doméstica é definida como a prática de maus tratos físicos ou psíquicos, de forma sistemática ou pontual, a cônjuge ou ex-cônjuge, a outra pessoa, independentemente do seu género, com quem mantenha ou tenha

mantido uma relação de namoro, análoga à de cônjuge ou de coabitação, seja progenitor ou descendente em 1º grau, ou ainda a quem seja particularmente indefeso por motivos diversos e que coabite com o agressor. A prática deste crime passa a ser punida com pena de prisão de 1 a 5 anos, e caso o crime seja praticado contra menor, na sua presença, em domicílio comum ou no da vítima, o transgressor é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. Se da ação resultar ofensa à integridade física grave a punição varia de 2 a 8 anos, sendo em situação de morte o agente punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.

A legislação prevê que possam ser aplicadas penas acessórias de proibição de contacto com a vítima, de proibição de uso e porte de armas, pelo período de 6 meses a 5 anos, bem como a obrigação de frequência de programas específicos no âmbito da prevenção da violência doméstica.

Contemporaneamente, a violência doméstica é uma problemática que abrange tanto os homens como mulheres, transversal nas faixas etárias, envolvendo crianças, adultos e idosos. No entanto, investigações apontam para a predominância de agressores do género masculino e referem a situação de maior vulnerabilidade das mulheres em serem vítimas por parte de um elemento da sua intimidade, colocando a essência da problemática da violência doméstica no processo de exercício de poder sobre o outro (Pais, 1998; Choudhuri, 2007; Felson & Pare, 2008; Matos, 2012).

Entre 1991 e 2006 verificamos várias produções legislativas que direta e indiretamente pretendem defender a vítima de violência, como vemos no exemplo da previsão de indemnização da vítima de crimes violentos (Decreto-Lei n.º 423/91, de 30 de Outubro) ou na criação de uma rede pública

de casas de apoio a mulheres vítimas de violência (Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto) (Lisboa, Barroso, Patrício & Leandro, 2009).

Os planos nacionais contra a violência doméstica que, desde 1999, têm vindo a ser produzidos são reflexo das recomendações e orientações internacionais no que respeita à defesa dos direitos humanos das mulheres e promoção da igualdade de género (Santos, 2012).

No presente vigora o V Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, (2014/2017), que abrange não só a violência doméstica como outras manifestações de violência de género, como a mutilação genital feminina e as agressões sexuais. Concretamente no domínio da violência doméstica, o Plano prevê a proteção das vítimas, a intervenção junto dos agressores, o aprofundamento do conhecimento sobre os temas, bem como a qualificação dos profissionais e o reforço da rede e estruturas de apoio à vítima (Comissão para a Igualdade de Género, 2015).

Destacamos ainda a entrada em vigor, em agosto de 2014, da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), tendo Portugal sido o primeiro Estado-membro a ratificar este instrumento, no qual se considera a violência doméstica uma grave violação dos direitos humanos e sendo atribuída aos Estados-membro a responsabilidade de intervir junto das vítimas e agressores.

O percurso descrito em termos de produção legislativa reflete as alterações verificadas na compreensão do fenómeno da violência doméstica, designadamente no que respeita ao entendimento dos seus atores,

desmistificando-se, ainda num processo em progressão, os mitos sobre a família idealizada.

A realidade presente legitima esta alteração de estereótipos, uma vez que o papel social da mulher traçou um percurso emancipador e de empoderamento, traduzido, nomeadamente, no aumento da integração da mulher no mercado de trabalho e sistema de ensino, contrariando, assim, o modelo tradicional que atribui à mulher o papel de “dona de casa”.

Apesar da crescente conscientização relativamente ao papel social da mulher, um longo caminho há ainda a percorrer, pois várias são as influências adversas que se manifestam contemporaneamente resultado de uma longa tradição de compreensão da mulher enquanto elemento subordinado do casal, conduzindo a que no presente, a título de exemplo, as mulheres sejam alvo de segregação profissional, recebendo em média um salário inferior ao do homem (Dias, 2012).

Traçado o panorama geral relativo ao percurso evolutivo percorrido no que respeita à violência doméstica, tanto a nível nacional como ao que respeita às orientações internacionais, importa aprofundar a reflexão sobre a construção da problemática.

A literatura sobre a temática da violência doméstica revela variadas tentativas de conceptualização da violência doméstica, tendo, naturalmente, as mesmas variado ao longo do percurso histórico da sociedade, muito em função das ideologias dominantes em cada período.

Contemporaneamente, e em complementaridade à sua definição jurídica, a violência doméstica é entendida como um padrão de abuso num

relacionamento de intimidade, tipicamente praticado pelo homem contra a mulher, cuja gênese reside no exercício de poder, tratando-se de uma *constelação de abusos*, face a diversidade de manifestações de que se pode revestir (Gilchrist, 2010).

O conceito de violência sobre as mulheres, fortemente estudado e defendido pelas correntes feministas, refere-se a todos os atos que provoquem sofrimento às mulheres, seja físico, sexual ou psicológico, incluindo morte, ameaça, coação. É um tipo de violência que é especificamente dirigido e concretizado contra a mulher e pode adquirir variadas manifestações, tanto na esfera privada como pública, envolvendo as dimensões físicas, emocionais e psicológicas (Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009).

Por violência conjugal entende-se uma versão mais circunscrita da violência doméstica, referindo-se às manifestações de violência acima descritas praticadas exclusivamente por cônjuges ou ex cônjuges, ou pessoa com quem tenha mantido relação semelhante, independentemente do seu género.

A violência nas relações de intimidade traduz-se numa abordagem mais alargada que abarca diferentes estilos relacionais, nomeadamente de namoro ou entre casais do mesmo género.

Conforme verificámos, a definição jurídica da violência doméstica é baseada no artigo 152º do Código Penal e abrange todo o tipo de violência, praticado de forma reiterada ou não, incluído as dimensões físicas e psicológicas, o cônjuge ou ex-cônjuge, a outra pessoa, independentemente

do seu género, com quem mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro, análoga à de cônjuge, ou de coabitação, seja progenitor ou descendente em 1º grau, ou ainda a quem seja particularmente indefeso por motivos diversos e que coabite com o agressor (Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009).

Quanto à sua explicação técnica, tendencialmente a violência doméstica desenvolve-se em espiral e em ciclos, possuindo uma génese progressiva no que respeita à intensidade da sua manifestação. Segundo a teoria das três fases da violência familiar, a mesma inicia-se com a fase de emergência da tensão, seguindo-se a fase do incidente de agressão, culminando na fase de reconciliação. Contudo, com o progredir da violência, os períodos destas três fases tendem a alterar-se, sendo a tendência no sentido de uma crescente diminuição da fase de reconciliação, bem como aumentando a perigosidade e intensidade da violência (Antunes, 2002; Alves & Diniz, 2005; Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009; Gilchrist, 2010).

O desenvolvimento de períodos de tensão decorre naturalmente no contexto das relações de intimidade, sendo a mesma superada através do recurso dos elementos do casal a estratégias de resolução de problemas; contudo, nas relações disfuncionais e violentas, o agressor não recorre, por não saber ou não querer, a esta tipologia de estratégias, visando um exercício de poder e intimidação para com o parceiro e utilizando qualquer simples questão do quotidiano como legitimadora da sua ação, aumentando, continuamente, a tensão junto da vítima (Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009).

A procura de entendimento e explicação desta tipologia de crime constituiu objeto de estudo de variados autores, tendo sido formuladas

diferentes teorias em função do foco colocado na compreensão da problemática.

A perspetiva feminista considera que a violência contra a mulher, e mais especificamente a doméstica, se baseia em modelos sociais organizados e hierarquizados, verificando-se uma desigualdade entre homens e mulheres, emergindo, assim, o termo violência de género, enquanto reprodutora de estereótipos e papéis sociais relacionados com processos dinâmicos de construção de identidades. Esta abordagem está intimamente relacionada com a dimensão sociocultural e papéis de género, com a desigual distribuição do poder na família no âmbito do tradicional modelo patriarcal, sendo essencialmente atribuído ao homem o papel de liderança e dominação, situando-se as mulheres e crianças num contexto de desvantagem (Manita, 2005; Machado, 2008; Lisboa *et al.*, 2009). Frequentemente, o abuso possui uma intencionalidade, um carácter instrumental, na medida em que teorias explicativas da violência doméstica com base em dificuldades de autocontrolo têm sido genericamente rejeitadas (Gilchrist, 2010).

No que respeita à intergeracionalidade da violência nas relações tendemos a encontrar na literatura a sua explicação no processo de socialização do indivíduo no contexto de uma família violenta. Vários estudos concluem que a exposição à violência durante a infância está relacionada com a perpetuação de comportamentos violentos nas relações futuras. A compreensão da intergeracionalidade da violência é frequentemente explicada com base na Teoria de Aprendizagem Social (Bandura, 1973), na medida em que se considera o ambiente social como determinante na aquisição de comportamentos agressivos. Teorias destacam

que padrões educativos marcados pelo recurso frequente a castigos corporais, limitadas interações positivas, reduzido contacto físico e emocional, crítica excessiva, práticas agressivas entre os progenitores e/ou para com a criança, favorecem a prática futura de comportamentos violentos (Manita, 2005; Cortez, Padovani & Williams, 2005; Gilchrist, 2010). Outros estudos apontam para a necessidade de serem consideradas também as variáveis individuais e contextuais no processo de perpetuação da violência, ou seja, apesar de a exposição a prática violentas no contexto da família facilitar a interiorização e reprodução dos mesmos comportamentos, importa considerar a influência das características individuais do sujeito, psicológicas e biológicas, bem como contextuais, como a influência dos pares (Oliveira & Sani, 2009; Sani, 2011).

Explicações contextuais podem contribuir para a compreensão de trajetórias de violência como a existência de filhos, dependência económica, divórcio ou circunstâncias específicas do meio envolvente. O receio do desconhecido que representaria o iniciar um percurso de vida autónomo, bem como o risco financeiro e relativo à educação monoparental dos filhos pode condicionar a opção pela permanência no percurso de violência, na medida em que se trata de uma realidade já conhecida ao invés do enfrentamento do risco da marginalidade resultado da opção de independência (Lisboa *et al.*, 2009).

Por sua vez, modelos alternativos de génese sociocultural compreendem a violência doméstica enquanto produto de uma sociedade agressiva, emergindo a própria violência como uma estratégia de resolução de problemas.

A abordagem ecológica propõe uma explicação multifacetada do complexo fenómeno social que é a violência doméstica. Este modelo considera necessário atender à influência das estruturas gerais da sociedade, ao impacto de valores subculturais (*e.g.* influência de pares), sistemas familiares, o contexto específico da agressão, bem como variáveis e respostas individuais (Gilchrist, 2010).

A Teoria do Desânimo Apreendido contribui igualmente para a compreensão de trajetórias de violência ao explicar que as sistemáticas agressões de que a mulher é vítima tendem a diminuir a motivação para a reação. Este desânimo resultaria de um processo de socialização com base em papéis sexuais rígidos e no papel submisso do género feminino (Dias, 2010). Esta teoria assenta no pressuposto de que atribuições internas, contínuas e estáveis, como o papel social tendencialmente atribuído à mulher, conduzem a uma menor capacidade de mobilização de estratégias ativas de resolução de problemas (Silva & Maia, 2011).

Em torno das características individuais do agressor, sendo o mesmo definido como todo aquele que evidencia comportamentos ou atitudes que colocam em risco a pessoa com quem mantém, ou manteve, uma relação de intimidade, do ponto de vista de integridade física e psíquica (Gonçalves, Cunha & Dias, 2011; Llor-Esteban, García-Jimenez, Ruiz-Hernández y Godoy-Fernández, 2016), foram desenvolvidas várias abordagens explicativas.

Estilos de vinculação decorrentes de experiências da primeira infância constituem uma proposta de explicação de futuros problemas nas relações de intimidade, apesar de não ser possível o estabelecimento de causalidade

direta. Esta perspectiva defende que o estabelecimento de uma vinculação insegura ao cuidador primário conduz à replicação desta tipologia de vinculação em relações futuras, podendo resultar em conflito e violência.

A violência doméstica é um fenómeno diversificado e multifacetado; no entanto, são identificadas características nos agressores em comum com os autores de outras tipologias de crime, como o desemprego, condenações prévias por crimes violentos e não violentos, testemunho de violência doméstica na infância ou até a própria vitimização na família de origem (Gilchrist, 2010)

As perspectivas psicológicas encontram nas características individuais a explicação da violência doméstica, defendendo que determinados défices ao nível comportamental e de competências sociais, como impulsividade ou a tendência para a passagem ao ato, dificuldades na resolução de problemas associados a disfuncionais interpretações de interações no relacionamento, estariam na génese de comportamentos violentos (Manita, 2005; Gilchrist, 2010). Encontramos na literatura considerados fatores de risco de prática de violência doméstica as características individuais das vítimas e agressores como a idade, sexo, escolaridade, estatuto socioprofissional, autonomia financeira, consumo de álcool e drogas, bem com a existência de um percurso histórico de violência, especialmente no contexto de socialização primária (Lisboa *et al.*, 2009). A relação entre transtornos psicológicos, características individuais do agressor e o risco de reincidência criminal é igualmente considerada na compreensão do fenómeno (Llor-Esteban, García-Jimenez, Ruiz-Hernández y Godoy-Fernández, 2016).

Enquadradas na perspetiva psicológica, algumas abordagens focalizam-se no percurso de vida do sujeito e nela procuram a explicação para a violência doméstica.

Apesar das diferentes teorias explicativas da violência doméstica, da complexidade associada ao fenómeno, a procura de categorização em termos de perfis do agressor é defendida e estudada por vários autores.

Encontramos na literatura características heterógenas referenciadas como típicas do perpetrador desta tipologia de violência, como o isolamento social, reduzida auto-estima, ciúme, consumo de álcool ou drogas, diminuto auto-controlo, dificuldades ao nível da comunicação e de resolução de problemas, insegurança, elevada dependência da parceira, manipulação, acentuada necessidade poder / controlo, tendência para a autovitimização, distorções cognitivas, perturbações mentais, distúrbios de personalidade ou ainda historial de violência na infância. A tendência para responsabilizar a parceira bem como para atribuir a fatores externos, como o stress laboral, a responsabilidade pelos seus atos constitui igualmente uma característica apontada aos perpetradores de violência. Existem ainda agressores que evidenciam ajustamento e funcionalidade em termos psicológicos (Cortez, Padovani & Williams, 2005; Gilchrist, 2010; Gonçalves, Cunha & Dias, 2011; García-Jiménez, Godoy-Fernández, Llor-Esteban, Ruiz-Hernández, 2014).

A minimização do comportamento violento, a sua negação, a culpabilização da vítima pelas agressões, bem como tentativas de explicação das mesmas, como por exemplo o consumo de álcool, são características

desta tipologia de violência (Cortez, Padovani & Williams, 2005; Gilchrist, 2010).

As características descritas quando em associação a circunstâncias ansiogénicas, como problemas financeiros, conflitos com a lei ou o desemprego, tendem a propiciar a prática da violência doméstica (Cortez, Padovani & Williams, 2005). Situações de separação, ciúme ou processos de definição da responsabilidade parental são igualmente apontados como potenciadores de agressões (Gilchrist, 2010).

Partindo das teorias explicativas da aquisição e desenvolvimento de comportamentos violentos, autores compreendem o agressor como uma vítima do seu percurso histórico, de situações de abuso, reações inadequadas face ao stresse, *deficits* ao nível do relacionamento interpessoal, considerando-se a possibilidade de tratamento, emergindo, assim, a hipótese de elaboração de modelos compreensivos da violência a partir do desenvolvimento de programas de intervenção (Cortez, Padovani & Williams, 2005). Importa, no entanto, garantir a simultânea responsabilização do indivíduo pelas suas ações, contrariando modelos e sistemas perpetuadores da violência.

A procura da compreensão e entendimento dos perpetradores da violência doméstica conduziu vários autores a formularem teorias explicativas sobre o processo de categorização dos agressores.

A literatura referencia a definição de, pelo menos, duas tipologias de agressores, diferindo ambas no foco da violência, na medida em que para uns a violência reveste-se de elevada carga emocional, enquanto, para outros,

adquire uma função essencialmente instrumental. Procurando categorizar os autores da violência doméstica, Gondolf (1988) formula três categorias de agressores: os sociopáticos, anti-sociais e típicos; Saunders (1992) propõe três grupos, globalmente violentos, os emocionalmente violentos e os exclusivamente familiares; ainda Mitchell e Gilchrist (2006) identificam duas tipologias de agressores distintas, um cujo ataque expressa uma ação predatória e outro em que se traduz numa estratégia de defesa afetiva, indicando o envolvimento de diferentes respostas neuronais (Gilchrist, 2010).

Jacobson e Gottman (1998) formulam dois perfis de agressores baseados nas características do seu padrão de atuação. O tipo I, metaforicamente designado de *cobra*, é constituído por agressores que demonstram variadas perturbações comportamentais, adotando em variados contextos práticas violentas, frequentemente em co morbilidade com o consumo de álcool e outras drogas, associando-se, tendencialmente, a uma estrutura antissocial, com reduzida indicação para a intervenção psicológica, sendo defendida nesta tipologia de agressores e aplicação de pena de prisão. Os agressores de tipo II, figurativamente apelidados de *pit bulls*, por sua vez, constituem a maioria dos agressores, evidenciam dificuldades no controlo da agressividade, revelam insegurança e dependência para com as parceiras, sendo indivíduos junto dos quais se crê serem benéficos programas de treino de competências (Jacobson & Gottman, 1998; Manita, 2005).

Procurando categorizar os agressores com base nas suas características individuais, Walker (1995) propõem a organização de três principais tipos de agressores. Os indivíduos tendencialmente apenas agressivos no âmbito

familiar, visando o exercício de poder e controlo, cujo comportamento poderá ser modificado por via de uma intervenção psicoeducacional; o grupo dos agressores portadores de problemas psicológicos e junto dos quais a psicoterapia individual ou de grupo será adequada; os que apresentam uma trajetória criminal, possuindo padrões de comportamentos agressivos em diferentes contextos, sendo classificados de antissociais, junto dos quais o tratamento se revelaria ineficaz, sendo apenas recomendado pela autora a intervenção judicial (Manita, 2005).

Constatamos que as diferentes teorizações sobre a violência doméstica variam em conformidade com o foco adotado por cada autor, seja na dimensão sociocultural, contextual ou individual, conduzindo à limitação da compreensão do fenómeno. A violência doméstica anuncia-se como uma problemática multifacetada, carecendo a sua explicação da consideração e integração da interação entre fatores biológicos, sociais, psicológicos e socioculturais, sendo determinista e redutora a abordagem explicativa que não considere esta dinâmica interacionista.

4. Sistema punitivo, fins e meios: a severidade punitiva

Punir os sujeitos cujo comportamento houvesse transgredido a norma constituiu, desde sempre, uma preocupação da humanidade, tendo-se a mesma revestido de variadas expressões e manifestações ao longo do percurso histórico. As motivações subjacentes à punição, no entanto, têm variado ao longo dos tempos, muito em resultado do seu enquadramento sócio-temporal, alternando entre a lógica retributiva, preventiva e ressocializadora.

O tradicional modelo judicial culmina na determinação do inocente/culpado e na respetiva atribuição de uma sentença, que se pretende refletora da reação social à ação transgressiva. Esta sentença possui vários objetivos dos quais destacamos: a retribuição, procurando retificar o dano causado pelo transgressor, adquirindo uma vertente reprovadora e assente no princípio da proporcionalidade entre o dano causado e a sanção atribuída; incapacitação, na medida em que pretende afastar o transgressor do contexto em que poderá praticar o delito, sendo o mais claro exemplo deste pressuposto a pena de prisão, mas também os mais recentes meios de vigilância eletrónica; a dissuasão, procurando inibir o comportamento transgressivo através do reconhecimento das consequências adversas que daí resultam, revestindo a sanção de uma função utilitarista e considerando como fundamental os princípios que se relacionam com a certeza, a celeridade e severidade da sanção. A ressocialização do transgressor constitui igualmente um pressuposto teoricamente associado à aplicação de determinada sanção, havendo inclusivamente autores que defendem que a própria sentença deveria incluir referências explícitas relacionadas com a sua reabilitação,

como por exemplo o encaminhamento para formação profissional, psicoterapia ou programas específicos para agressores (Davies & Beech, 2012). Conferindo suporte à sentença, a pena de prisão tem constituído um elemento central no processo de criminalização (Regis, 2013), adquirindo crescente utilização ao longo da história, sendo no presente a medida punitiva mais comumente utilizada (Simons, 2010; Junior, 2011), contrariando toda uma panóplia de estudos, assentes nas mais diversas teorias, que evidenciam a sua falência enquanto medida promotora da ressocialização do transgressor.

Refletindo estes princípios à luz da perspectiva economicista, a prática de crimes é entendida como um processo que se baseia, essencialmente, na conjugação de três análises: custo-benefício esperado como resultado da ação; probabilidade de ser apanhado; severidade da punição, se descoberto, tratando-se, assim, de uma decisão racional (Becker, 1968; Vera, 2008). Neste sentido, desde os finais do século XVIII que a teoria da dissuasão defende que o aumento da certeza da punição ou da sua severidade irá conduzir ao aumento do custo potencial da execução de um determinado crime, conduzindo, por conseguinte, à sua não concretização (Mendes & McDonald, 2001), sendo comumente estabelecida uma correspondência entre a severidade punitiva e a eficácia do sistema penal, na medida em que quanto mais severa a pena for maior será a emenda do transgressor. Esta crença influenciou fortemente a produção legislativa tendo, a título de exemplo, a pena de prisão sido ampliada em países como os Estados Unidos da América (EUA) com o objetivo de dissuadir a criminalidade (Junior, 2011).

No entanto, reconhece-se contemporaneamente que esta associação é muito mais intuitiva, refletindo um desejo íntimo de punição (Cusson, 1983; Gramet & Darley, 2009) e de vingança, do que propriamente técnica, uma vez que vários são os autores e estudos que nos alertam para a ineficácia da severidade punitiva, como o aumento da duração da pena de prisão, na dissuasão da criminalidade (Darley, 2005; Simons, 2010; Thomas, 2010; Davies & Beech, 2012; Berenji, Chou & D'Orsogna, 2014). Aliás, estudos apontam no sentido de que a probabilidade de se ser apanhado pela prática de um crime tem um maior poder dissuasor do que a severidade da punição a aplicar (Grasmick & Bryjok, 1980; Mendes & McDonald, 2001; Darley, 2005; Friesen, 2012), concluindo-se também que a severidade da pena não influi ao nível da criminalidade na sociedade. Efetivamente, não será a probabilidade de se ser apanhado ou de receber determinada punição que condiciona o comportamento humano, mas a perceção estabelecida dessas mesmas probabilidades, tratando-se de uma distinção crucial (Doob & Webster, 2003).

Estas são conclusões importantes na medida em que intersectam diversos segmentos da sociedade, como o sector jurídico e económico, influenciando direta e indiretamente, tanto no que respeita à produção legislativa como à sua aplicação, conduzindo, necessariamente, a uma reorganização das estratégias interventivas e respetiva canalização de financiamentos. A título de exemplo, seria mais profícuo e económico o investimento em ações de prevenção baseadas no policiamento e intervenção de proximidade do que no aumento da pena de prisão.

Apesar destas constatações, existe uma tradição histórica de recorrência à afirmação de estratégias punitivas em reação a alterações sociais que se refletem, nomeadamente, na criminalidade, bem como na necessidade de criminalização de comportamentos que ao Estado importa condicionar. A título de exemplo, os EUA nos anos 80 colocou em prática um conjunto de estratégias como “Tolerance Zero”, “War on crime” ou “Three strikes and you are out”, procurando exercer a função simbólica, retributiva e punitiva da ação penal. Estas estratégias conduziram, em última instância, a um aumento da duração das penas e conseqüente, a uma problematização maior da questão que se refletiu na sobrelotação dos estabelecimentos prisionais (Junior, 2011; Regis, 2013; Berenji, Chou & D’Orsogna, 2014).

Os custos implicados na utilização da pena de prisão não se limitam aos diretamente imputados ao orçamento público, estendendo-se ao próprio ex-recluso, que após término do cumprimento de pena de prisão, especialmente se esta se prolongar no tempo, vivencia uma série de adversidades como as fragilizações nas relações afetivas com a rede de suporte, problemas de saúde direta ou indiretamente relacionados com o encarceramento, o estigma que lhes é associado à condição de ex-recluso, bem como eventual condicionamento de competências pessoais e sociais, fundamentais à integração profissional, que se encontra, assim, limitada. Além das implicações para o próprio sujeito, todos estes fatores se repercutem, negativamente, na sociedade, traduzindo-se também em custos.

Vemos que a utilização da pena de prisão reveste-se de uma função instrumental ao serviço do Estado, nomeadamente da medida em que assume o princípio da máxima segurança da sociedade, que no entanto não resolve o

problema, mas neutraliza-o, isolando socialmente o transgressor, refletindo-se numa efetiva fábrica de exclusão. Por outro lado, o poder político, sob o perfil do Legislador, ambiciona que ao estarem detidos por longos períodos de tempo os sujeitos, ao terminarem o cumprimento da sua pena e regressarem aos seus locais de origem, frequentemente territórios marcados por exclusão social e onde creem existir potenciais futuros criminosos, transmitam a mensagem sobre a sua experiência e que a mesma tenha um efeito dissuasor (Darley, 2005).

Contudo, as explicações psicológicas defendem que uma determinada experiência que se prolonga no tempo tende a perder intensidade, mesmo as adversas, pois verifica-se um fenómeno de adaptação, gerando uma fraca representação mnemónica. Pelo contrário, a lembrança é marcada por “picos” de aversão, logo amplas penas de prisão dificilmente cumprirão o seu objetivo dissuasor da criminalidade, contrariando, assim, as legitimações subjacentes a estas iniciativas. Assim, a perceção de que se pode ser “apanhado” na prática de determinado crime produz um maior efeito dissuasor. A título de exemplo, as campanhas de condução sobre o efeito de álcool, envolvendo operações policiais, tendem a conduzir a uma diminuição da sua prática, pois determinam a conscientização dos infratores para o facto de poderem ser capturados, estado contrário ao que tendencialmente se verifica (Darley, 2005).

Globalmente, é reconhecido que o atual sistema de justiça criminal é ineficaz na sua relação custo/benefício, considerando os custos implicados e imputados ao orçamento público, e a sua capacidade preventiva, tanto geral como especial, de comportamentos transgressivos, estando esta premissa na

base das investigações desta perspetiva vindo a ser designada por “nova penologia” (*new penology*). Esta abordagem sugere um repensar da política criminal e respetivas finalidades da punição, que tem vindo a ocorrer desde meados de 1970, conduzindo a uma sensível alteração no que respeita aos seus pressupostos e implicando a substituição da punição, retribuição e reabilitação pelo gerenciamento de grupos de risco (Motta, 2015).

Contrariando a premissa associada ao maior poder dissuasor da criminalidade relacionado com o acentuar da severidade punitiva, estudos têm revelado que a antecipação de recompensas e punições futuras têm pouco efeito no comportamento humano, comparativamente às mesmas recompensas e punições no presente (Darley, 2005). Simultaneamente, a literatura alerta-nos para a ineficácia ao aumento da severidade da punição enquanto promotora da diminuição da criminalidade, nomeadamente através do aumento da duração das penas. Além de uma medida cara, estudos concluem que as pessoas tendem a não basear as suas decisões em elementos que são objetivamente relevantes, antes com base em representações mentais desses elementos. Frequentemente, estas mesmas representações não são consonantes com a realidade, resultando, assim, em decisões incongruentes (Darley, 2005). Nesta linha, Brennan e Mednick (1994), no estudo realizado com o objetivo de compreender a relação entre a punição e o comportamento criminal, concluíram que as taxas de reincidência criminal não diferem de acordo com a severidade da punição recebida.

A própria correspondência que comumente é estabelecida entre a confiança da população no sistema judicial e a maior severidade das penas aplicadas é contrariada pelo estudo desenvolvido no Canadá, que concluiu

não existir relação entre as penas aplicadas e a confiança depositada no sistema judicial, tendo-se chegado a conclusão semelhante na Austrália, havendo, inclusivamente, dados que apontam que as taxas de aprisionamento são inferiores em áreas onde os cidadãos referem maior confiança no sistema judicial (Sprott, Webster & Doob, 2013).

Conclusivamente, verificamos através da interceção entre as várias teorias e estudos, refletindo diferentes perspetivas relacionadas com a severidade punitiva, que o pressuposto e objetivo retribucionista subjacente ao sistema jurídico é, em essência, motivado por uma resposta intuitiva ao crime, refletindo o respetivo desejo de punição (Gramet & Darley, 2009), concluindo-se, assim, que se trata, principalmente, de uma ação empírica, ao invés de técnica, pelo que urge a necessidade de ser reequacionada.

5. A falência do sistema: o caso da reincidência criminal

É comumente aceite pela comunidade científica a reincidência criminal enquanto evidência da falência do sistema punitivo no que respeita à ressocialização do transgressor, podendo, simultaneamente, ser entendida como uma incapacidade da sociedade no que concerne à sua reintegração (Mariño, 2002).

Conforme o presente enquadramento legal expresso no 75º do Código Penal Português, “é punido como reincidente quem, por si só ou sob qualquer forma de participação, cometer um crime doloso que deva ser punido com prisão efetiva superior a 6 meses, depois de ter sido condenado por sentença transitada em julgado em pena de prisão efetiva superior a 6 meses por outro crime doloso, se, de acordo com as circunstâncias do caso, o agente for de censurar por a condenação ou as condenações anteriores não lhe terem servido de suficiente advertência contra o crime”.

Conforme manifesta a sua definição, a reincidência criminal depende da *repetição de uma prática delituosa*, necessariamente dolosa e cuja pena inclua a possibilidade de pena de prisão efetiva superior a 6 meses, *enquadrada temporalmente*, pelo requisito do trânsito em julgado de sentença anterior, remetendo ainda a *apreciação da sua utilização ao entendimento do Aplicador*, apreciando este o grau de censurabilidade a atribuir ao transgressor.

Em consequência, é previsto o agravamento da pena, resultado da presumível necessidade de maior censura, decorrente da recorrência em práticas transgressivas, mesmo após pena anterior. Deste facto concluímos que, segundo o entendimento do Legislador, a reincidência criminal expressa

uma persistência do indivíduo na prática transgressiva, não tendo a sanção anteriormente aplicada sido suficiente para promover a sua regeneração, sendo, portanto, necessário *agravá-la*, a fim de potenciar esse fim. Está, então, implícita a associação entre a severidade punitiva e reinserção social, na medida em que o Legislador estabelece uma correlação entre o agravamento da sanção e o fim ressocializador da pena. Esta tipificação da reincidência criminal exclui a hipótese de responsabilização do sistema punitivo e do Estado social sobre a prática criminal, particularmente no que respeita à sua reincidência.

No presente estudo optámos por considerar reincidente todo o sujeito que, independentemente do crime praticado e da sua temporalidade, tenha tido, ao longo do seu trajeto vivencial, contacto com o sistema de justiça. A opção por este enquadramento, à semelhança de outros estudos (Guillén & Iraeta, 2010), é legitimada pelo facto de considerarmos limitador circunscrever o fenómeno da reincidência criminal ao tipo de crime praticado e à sua temporalidade, não se coadunando com o nosso entendimento do transgressor enquanto ator social, dotado de capacidade de autoconstrução e mudança, de elaboração de significados e definição de posições existenciais, que poderão, ou não, coincidir com a transgressionalidade (Barbosa, Quadros & Ribeiro, 2012).

Apesar da expressividade do fenómeno e do interesse que teria a exploração dos índices de reincidência criminal em cada país, verifica-se que poucos são os dados sistemáticos disponíveis sobre as estatísticas relativas ao fenómeno, tanto nacional como internacionalmente, inviabilizando comparações transnacionais (Fazel & Wolf, 2015). Este é um

facto que nos interpela relativamente às motivações subjacentes à escassez de informação a este nível, sendo pontuais e dispersos os dados que conseguimos obter, podendo refletir um desinteresse dos Estados sobre o conhecimento e estudo do produto dos seus sistemas punitivos, ou, pelo contrário, uma preocupação relativamente ao condicionamento de informação disponível que possa contestar a sua eficácia.

Em Portugal, os dados mais recentes a este nível integram a investigação coordenada por Torres (2007), desenvolvida com o objetivo de conhecer a população prisional portuguesa, assim como as respetivas tendências de consumos de substâncias, concluindo que 40,6% dos detidos se encontram em situação de reincidência. No que respeita especificamente à reincidência criminal no crime de violência doméstica, na população portuguesa, não encontramos informação disponível.

Quanto à realidade internacional, o estudo desenvolvido por Ventura & Davis (2005), com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a reincidência criminal em crimes de violência doméstica na sua relação com a pena aplicada, limitada à cidade de Toledo, Ohio, Estados Unidos da América, concluiu que cerca de 32% da amostra reincidiu no prazo de um ano após o contacto com o sistema de justiça. O mesmo estudo não encontra uma relação de efeito significativa entre a pena de prisão e a reincidência criminal. No mesmo país, Puffett e Gavin (2004) desenvolveram um estudo com o objetivo de conhecerem os efeitos da aplicação da medida de obrigatoriedade de os agressores participarem em programas de intervenção, tendo concluído que 44% reincidiram no período de dois anos após o término do programa.

Mais recentemente, Durose, Cooper, & Snyder (2014) alertam-nos para o fato de que a maioria dos transgressores libertados da prisão (68%), considerando uma amostra de 30 estados dos EUA, foram novamente detidos num período de 3 anos e cerca de 77% no período de 5 anos. O mesmo estudo revela que de todos os transgressores que foram novamente detidos no período de 5 anos, mais de um terço das detenções ocorreu nos primeiros seis meses de libertação, e cerca de 57% até ao final do primeiro ano.

Reflexo das inquietações resultantes da constatação da falência do sistema penal no que respeita à ressocialização do transgressor, refletidas nas conclusões dos estudos acima partilhados, investigadores têm-se debruçado sobre o estudo da reincidência e prática criminal, conduzindo ao desenvolvimento de uma panóplia de teorias explicativas, variando principalmente as mesmas em conformidade com os pressupostos assumidos, refletindo-se, tendencialmente, na lógica psicológica, sociológica ou biopsicológica (Barbosa, Quadros & Ribeiro, 2012).

Focando particularmente o estudo da reincidência criminal, no plano nacional, Marques-Teixeira (2000) agrupa o que considera constituírem as principais áreas influentes da recidiva criminal: área comunitária, relacionada com padrões de comportamento habituais em contextos socioeconómicos de maior desorganização e vulnerabilidade; escolar, no que respeita ao insucesso escolar e reduzido rendimento; área familiar, como a existência de antecedentes criminais na família, défices na gestão de conflitos; social, referente à interação com o grupo de pares, particularmente no que tange a consumos de drogas e práticas transgressivas; área individual,

nomeadamente relacionado com impulsividade, precocidade nos comportamentos agressivos, procura de sensações de risco.

Conhecidas são as teorias relacionadas com os efeitos da reclusão no que respeita à futura reincidência criminal, defendendo-se que esta medida punitiva tem uma influência muito mais adversa ao transgressor do que propriamente reabilitadora (Barbosa, Quadros & Ribeiro, 2012; Berenji, Chou & D’Orsogna, 2014). Explicações relacionadas com a supervisão na pós-reclusão, os limites do aprisionamento, a abrangência e qualidade de programas de intervenção desenvolvidos na prisão bem como a qualidade dos cuidados médicos, particularmente no que concerne às toxicodependências ou perturbações psiquiátricas, são igualmente consideradas na compreensão da reincidência criminal (Fazel & Wolf, 2015).

A previsão da reincidência criminal tem constituído um atrativo para os investigadores da área, tratando-se de uma avaliação de risco, intimamente relacionada com a interação entre um conjunto de fatores que podem propiciar a prática criminal, constituindo fatores de risco, ou, contrariamente, inibi-la, traduzindo-se em fatores protetores (Barbosa, Quadros & Ribeiro, 2012).

Globalmente, a literatura aponta como principais fatores de risco da prática de comportamentos transgressivos os antecedentes criminais, importando considerar o tipo de crime praticado e a gravidade do mesmo, variáveis sociodemográficas, fatores situacionais e fatores individuais. Estes fatores, que poderão se considerados preditores da reincidência criminal, podem ser estáticos, imutáveis, como os antecedentes criminais, ou dinâmicos, logo passíveis de alteração ao longo do tempo, como fatores

individuais ou situacionais (Almeida & Soeiro, 2010). Esta questão remete-nos obrigatoriamente para a necessidade de considerarmos todos os fatores como interligados entre si, em interação constante, e, por conseguinte, a avaliação do risco como um processo dinâmico.

Particularmente no que respeita à violência conjugal, autores referem que os agressores com um risco mais elevado possuem um historial de violência conjugal e apresentam reincidências criminais. Por outro lado, os agressores conjugais mostram constituir um grupo heterogéneo no que respeita à verificação de fatores de risco individuais e ao risco percebido (Kropp & Hart, 2000). O consumo de álcool, bem como a prática precoce de violência doméstica e historial de violência doméstica (Ventura & Davis 2005) têm igualmente sido apontados como características potenciadoras da reincidência criminal (Lin, Su, Chou, Chen, Huang, Wu, Chen, Chao & Chen, 2009) .

A investigação desenvolvida por Llor-Esteban, García-Jimenez, Ruiz-Hernández e Godoy-Fernández (2016) conclui a existência de relações importantes entre transtornos de personalidade, características individuais do agressor e o risco de reincidência criminal. Os autores agrupam os agressores em três sub-grupos, conforme características apresentadas, e relacionam com o risco de transgredirem futuramente. Dos resultados deste estudo destaca-se ainda o facto de terem sido poucas as diferenças identificadas entre os três sub-grupos de agressores no que respeita às características da violência exercida, nomeadamente, ao nível psicológico, da tendente atitude machista e controlo das companheiras.

Por sua vez, Lilaa, Oliverb, Catalá-Miñanaa e Conchell (2014) aludem à relação entre a maior duração e permanência em programas de intervenção para agressores e a maior percepção da gravidade da violência praticada com a diminuição do risco de reincidência criminal. Os mesmos autores concluíram que o risco de reincidência seria inferior para agressores com menores indicadores de antecedentes de consumo de álcool, impulsividade e em crimes envolvendo menor gravidade, encontrando-se estes factos consonantes com o alertado pela literatura no que concerne aos fatores de risco de reincidência criminal.

A investigação recente tem demonstrado a redutividade com que se revestem as teorias ao não considerarem a devida interação e associação entre os variados sistemas que o ser humano integra e que o constituem, caracterizando-o como biopsicossocial.

De fato, ao considerarmos o fenómeno da reincidência criminal importa adotarmos uma postura explicativa e compreensiva (Marques-Teixeira, 1995), que possibilite captar, descodificar, compreender e explicar, holística e sistemicamente, o ato transgressivo e o seu protagonista.

Neste sentido, é na associação entre as variáveis sociais, as particularidades do indivíduo, como o seu funcionamento cognitivo, plano emocional, na sua personalidade, mas também no seu sistema nervoso, enquanto suporte das anteriores, que deveremos procurar a compreensão biopsicossocial da reincidência criminal (Barbosa, Quadros & Ribeiro, 2012).

Particularmente à problemática da violência doméstica, indicadores apontam para que na sua sequência cerca de 70% das vítimas recorra ao apoio

do sistema de justiça; no entanto, a eficácia da sua atuação tem sido questionada, sendo a violência doméstica considerada um dos crimes nos quais se verifica a existência de maiores índices de reincidência criminal (Simon, 1995; Ventura & Davis 2005; Manita, 2008; ABC News, 2015).

Conforme verificámos, globalmente o percurso evolutivo do sistema punitivo, do qual a violência doméstica não constitui exceção, e que Portugal, ainda que tardiamente, procurou acompanhar, variou entre a lógica retributiva, tanto numa perspetiva moral como punitiva, preventiva, visando a proteção e reparação das vítimas e sociedades, bem como a ressocialização dos agressores, ulteriormente. Neste processo a sanção aplicada detém um papel fulcral, sendo o instrumento através do qual, e quase que em exclusivo, o Aplicador procura exercer as finalidades do sistema punitivo, havendo, inclusivamente, perspetivas que defendem que a mesma deve explicitamente aludir ao seu pressuposto ressocializador (George, 2010).

Particularmente no que concerne à violência doméstica, o fim ressocializador do sistema de punitivo abarca responsabilidades acrescidas, na medida em que se reconhecem as vulnerabilidades específicas associadas à mesma, como o facto de ser um crime tendencialmente cometido no seio de relações de intimidade, em que a sua ocorrência não significa necessariamente o término das mesmas, repercutindo-se este facto na ampliação do risco de revitimização. Neste contexto, garantir a eficácia do sistema punitivo no que respeita ao seu pressuposto ressocializador deverá constituir uma prioridade.

Evidências contrárias emergem do estudo realizado pelo Governo do Canadá, com base numa amostra de 1000 indivíduos condenados no ano de

2001 pelo crime de violência doméstica, visando, nomeadamente, o aprofundar do conhecimento sobre a reincidência criminal no crime de violência doméstica, e que concluiu que cerca de 32% dos infratores foram novamente condenados. O mesmo estudo identificou uma forte influência da existência de antecedentes criminais na recidiva após condenação pelo crime de violência doméstica, comparativamente aos indivíduos primários, expressa através da percentagem de 41% para 11%, respetivamente. Relativamente à sanção aplicada, o estudo conclui que 45% dos arguidos condenados a pena de prisão reincidiram enquanto o mesmo apenas se verificou em 19% dos condenados a suspensão provisória (Governo do Canadá, 2015).

Por sua vez, a investigação realizada por George (2010), com o objetivo de estudar os tipos de sanções aplicadas a crimes de violência doméstica e a sua relação com a reincidência criminal, concluiu que, quando comparados os indivíduos cujas sentenças envolveram multas e/ou proibições com os que a respetiva sanção também incluía liberdade condicional, tratamento orientado para a vítima ou suspensão do processo, tinham menos probabilidade de reincidir no crime de violência doméstica durante o período de 5 anos em que foi realizado o *follow-up*. O mesmo estudo refere que sentenças que incluíssem pena de prisão associada multas e/ou proibições possuía maior probabilidade de reincidência criminal. Sentenças que incluíssem o controlo de raiva possuíram menor probabilidade de reincidência. O mesmo estudo concluiu que as sanções aplicadas no crime de violência doméstica possuem significância estatística na reincidência criminal (George, 2010).

A análise dos estudos apresentados legitima a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre relação entre a atuação do sistema punitivo a sua eficácia enquanto agente ressocializador. De facto, os pressupostos punitivos, retributivos, ressocializadores e preventivos do sistema judicial, veiculados através da pena aplicada, desde a sua edificação à atualidade sofreram relativamente poucas alterações e, por conseguinte, não se adaptando à sociedade contemporânea.

As sociedades são sistemas dinâmicos que continuamente se vão alterando e reconstruindo, particularmente nos últimos anos, resultado do processo de globalização, pelo que ao sistema punitivo é colocado o desafio de acompanhar essas mesmas evoluções. Reconhecendo-se este facto torna-se incongruente assumir-se que os princípios que estiveram na origem da produção legislativa e consequente penalização há anos atrás se mantêm atuais e válidas, pois apesar dos desenvolvimentos que também se fizeram notar no sistema jurídico, nomeadamente com o surgimento da mediação penal ou das medidas alternativas à pena de prisão, constata-se que na sua essência os seus fundamentos mantêm-se constantes, muitas vezes, em oposição ao mais atual conhecimento científico.

Verificamos que a pena de prisão, a mais comumente aplicada, é também a mais primitiva, sendo-lhe sabidamente reconhecida a ineficácia enquanto promotora da ressocialização do transgressor. A sua recorrente utilização estará principalmente relacionada com inexistência de uma melhor alternativa, do que propriamente pela crença na sua eficácia.

O desafio do presente é então o encontrar de alternativas à tradicional atuação do sistema punitivo, que congregue, simultaneamente, os seus

princípios e valores, tendo como fim último a defesa e proteção da sociedade, mas que simultaneamente seja eficaz e afetivo na ressocialização do transgressor, promovendo a sua reintegração social e, por conseguinte, concorrendo para a proteção social.

5.1. Aproximações ao pressuposto ressocializador: a intervenção em agressores

Resultado da crescente preocupação e conscientização relativamente à relevância da intervenção junto dos agressores, vários são programas e estratégias interventivas que têm sido desenvolvidos (Babcock & Steiner, 1999; Day, Chung, Carson & O'Leary, 2009). Este crescente investimento resulta, em grande medida, da conclusão de que é fundamental incidir numa maior responsabilização do agressor, de que trabalhar em exclusivo com as mulheres vítimas não é suficiente para culminar com as trajetórias de violência, da evidência de que a intervenção junto dos agressores irá contribuir para uma alteração de estereótipos e construções sociais relacionadas com a aceitação da violência doméstica e, por último, mas não menos importante, a constatação da ineficácia de estratégias exclusivamente punitivas (Manita, 2005; Feder & Wilson, 2005).

Variando em conformidade com o aporte teórico, diferentes modelos de intervenção junto de agressores de violência doméstica foram desenvolvidos orientados, principalmente, para a promoção da diminuição da reincidência futura, existindo, globalmente, um frágil suporte empírico que comprove a sua eficácia, surgindo, no entanto, dados que sustentam o sucesso de

determinados programas interventivos (Lin, Su, Chou, Chen, Huang, Wu, Chen, Chao & Chen, 2009; Gilchrist, 2010; Haggård, Freij, Danielsson, Wenander & Långström, 2015). De facto, a intervenção desenhada especificamente para intervir em agressores de violência doméstica apresenta índices de eficácia inferiores aos programas de intervenção para ofensores em geral (Day, Chung, Carson & O’Leary, 2009), sendo esta, na nossa opinião, uma constatação sobre a qual importa refletir.

Internacionalmente, são os programas de intervenção psico-educacionais e psicoterapêuticos os mais utilizados em agressores de violência doméstica, sendo fundamental e transversal a qualquer modelo ou abordagem de intervenção junto dos agressores a crença na capacidade de alteração comportamental do ofensor, assente na perspetiva de que o homem violento pode aprender a relacionar-se de forma não violenta (Manita, 2005). Trata-se este entendimento do agressor, na nossa opinião, de uma premissa fundamental à opção pela recorrência a modelos de intervenção de índole terapêutica, orientados para a efetiva ressocialização do agressor, importando que os mesmos sejam conjugados com outras estratégias de atuação, nomeadamente punitivas, que reforcem a necessária dialética entre o pressuposto ressocializador, mas também punitivo e retribuidor da ação penal.

Os programas psico-educacionais baseiam-se, fundamentalmente, no treino e desenvolvimento de competências sociais e cognitivas, visando a conscientização do agressor relativamente às suas ações, às consequências dos seus atos e procurando gerar alteração nas suas modalidades de ação agressivas. Esta abordagem é frequentemente inspirada no modelo do Projeto

de Duluth, procurando envolver os agressores no seu processo de mudança e, simultaneamente, responsabilizá-los pelas suas ações. As intervenções desenvolvidas ao abrigo desta perspetiva poderão envolver conteúdos relacionados com questões de género e poder na relação, mas também na sociedade em geral, treino de competências como comunicação, negociação, assertividade, resolução de problemas, entre outras, orientadas para adoção de modalidades de ação não violentas.

Por sua vez, os programas psicoterapêuticos têm como principal objetivo promover uma mudança psico-emocional, efetivamente estrutural. Possuem algumas dimensões em comum com os modelos psico-educacionais e envolvem o treino de competências, abordagens cognitivas, questões de género, desenvolvimento de técnicas de autocontrolo, abordagem sistémica-familiar e baseada no trauma. Nesta abordagem destacamos a relevância do enfoque colocado no desenvolvimento da empatia, visando que ao agressor desenvolva a capacidade de se colocar no lugar do outro, conseguindo antecipar e reconhecer as suas reações (Manita, 2005; Day, Chung, Carson & O'Leary, 2009).

Intervenções junto de agressores em violência doméstica baseadas, teoricamente, na terapia narrativa são igualmente referenciadas. As principais vantagens deste modelo relacionam-se com o facto de possibilitar ao agressor expressar e desconstruir simultaneamente sentimentos de poder e de vergonha (Augusta-Scott & Dankwort, 2002). Esta abordagem baseia-se no princípio de que a forma como cada pessoa experiencia as situações é condicionada e construída através de interações sociais mediadas culturalmente, pelo que se pretende que este procedimento possibilite uma

reelaboração dessas mesmas experiências (Ikonomopoulos, Smith & Claudia, 2015).

Em geral, a participação dos agressores nestes programas poderá ser voluntária ou constituir uma obrigação imposta pelo tribunal, enquanto condição de suspensão provisória do processo ou da execução da pena de prisão, sendo esta última uma estratégia que dota a ação penal de um maior caráter pedagógico (Gordon & Marioarty, 2003). As mais-valias relativas aos programas cuja participação constituiu uma obrigação imposta pelo tribunal são questionadas na medida em que frequentemente acabam por funcionar como instrumento de monitorização ao invés de efetivamente promoverem a alteração de comportamentos violentos (Crockett, Keneski, Yeager & Loving, 2015).

A duração destas intervenções poderão ser variáveis, sendo que as avaliações realizadas concluem que programas com maior duração poderão ser mais eficazes no alcance dos seus objetivos; no entanto, associam-se também a uma maior taxa de desistência dos participantes (Manita, 2005), como vemos no exemplo do estudo desenvolvido por Gordon & Mariarty (2003), realizado com base numa amostra de 248 agressores masculinos cuja sentença coincidiu com os Serviços Comunitários de Correção, em Chesterfield County, Virgínia, que concluiu que a intervenção realizada não influenciou na reincidência criminal. Contudo, identificaram uma relação entre o número de sessões e a futura reincidência, verificando-se que os agressores que completaram o tratamento possuíam uma menor probabilidade de reincidirem. Por sua vez, Shepard, Falk & Elliot (2002), através de um estudo realizado com o objetivo de avaliar a eficácia de um projeto desenhado com

o fim de potenciar as respostas comunitárias analisando as taxas de reincidência, identificaram uma correlação entre a sentença atribuída ao agressor incluir a obrigatoriedade de participação em programas de não-violência e os mesmos terem concluído o programa com inferiores probabilidades de reincidência criminal.

Procurando consolidar a informação sobre os programas de intervenção existentes no âmbito do crime de violência doméstica o *Washington Institute for Public Policy* (2013) desenvolveu um estudo orientado para o levantamento das práticas existentes, explorando, simultaneamente, a sua influência na reincidência criminal. A investigação concluiu que os indivíduos que participavam nos programas de intervenção evidenciavam um decréscimo nos índices de reincidência criminal comparativamente ao grupo de controlo, apesar de que apenas nove programas reuniam os critérios mínimos para serem analisados. A investigação conduziu ainda à conclusão de que as abordagens baseadas no Modelo Duluth (que constituem a maioria nos EUA) evidenciam não produzir efeitos no que concerne à reincidência criminal. Por outro lado, existem intervenções que demonstram efetivamente influir na diminuição da reincidência criminal; no entanto, possuem características tão díspares que se torna inviável identificar estratégias em particular a fim de que pudessem ser propostas enquanto substitutas no Modelo Duluth.

Encontramos na literatura referências a estratégias interventivas que, de alguma forma, demonstraram eficácia na diminuição da reincidência criminal, tais como abordagens baseadas nos princípios do risco (de reincidência), necessidade (abarcando os níveis psicológico, social e

emocional, relacionadas com o desenvolvido e continuidade de comportamento transgressivo) e responsividade (defendendo que os programas interventivos deverão possuir natureza cognitiva e adaptados ao estilo de aprendizagem, capacidades cognitivas, motivação e personalidade dos participantes) (Olver, Stockdale & Wormith, 2011). Face o amplo espectro de motivações que poderá fundamentar a prática de ações violentas, importa considerar a necessidade de, dentro do possível e viável, procurar adaptar as estratégias às particulares de cada agressor, potenciando, assim, a eficácia do programa interventivo (Tijeras, Rodriguez, Armenta, 2006).

Apesar de a literatura não ser consensual no que respeita à eficácia em geral dos programas de intervenção junto dos agressores, no que concerne à efetiva diminuição da reincidência criminal (Sertin, Hansen, & Huss, 2006), inquestionáveis são os seus contributos em distintos níveis, como na ampliação da conscientização relativamente à problemática, repensar da estratégias interventivas sobre as mesmas, eventual impacto a longo prazo, tanto no que respeita à ressocialização do agressor como a diminuição das probabilidades de revitimização das vítimas.

Esta questão remete-nos, ainda, à conclusão da necessidade de investimento nos processos de avaliação dos programas e intervenções desenvolvidas, bem como no que respeita à disseminação do conhecimento científico sobre os mesmos, a fim de potenciar a partilhar de informação que se possa refletir no desenvolver e potenciar da eficácia das intervenções desenvolvidas a este nível.

6. A jurisprudência terapêutica e intervenção juspsicológica no contexto da violência doméstica: hipóteses e alternativas

A justiça criminal, fundamentada numa lógica burocrática e sistematizada, assente na tríade acusação, defesa e julgamento, há muito que vem anunciando a sua falência. A padronização e sistematização com que os principais atores sociais envolvidos, ministério público, advogado ou juiz, revestem a sua atuação, estando todos os princípios e procedimentos previamente estabelecidos, nomeadamente, através da Lei reflete-se no que poderemos designar *por técnica ou método de fazer justiça* (Pallamolla & Achutti, 2014). Este atual método de justiça atribui ao juiz o papel marcadamente autoritário e a missão de promotor da paz social, valendo-se, para o efeito, da sentença que profere, condicionando a possibilidade de flexibilização no estabelecimento de estratégias superadoras do problema (Costa & Reusch, 2015).

A constatação de que o sistema punitivo tradicional, baseado na lógica punitiva e repressora do homem-agressor, poderá não corresponder concertadamente com as exigências e necessidades da sociedade atual, nomeadamente no que respeita à intervenção no crime de violência doméstica, conduziu ao desenvolvimento de metodologias alternativas de intervenção que favoreçam, mais eficazmente, a proteção das vítimas e reabilitação dos agressores (Cesca, 2004; Wexler, 2008; Costa & Reusch, 2015).

Numa perspetiva mais global, a intersecção entre o sistema judicial e o ideal terapêutico materializa-se através da jurisprudência terapêutica, ideologia que defende a possibilidade de a Lei poder atuar como um agente

terapêutico, tal como os procedimentos processuais ou os agentes judiciais (advogados, juízes, polícia), podendo produzir resultados também eles terapêuticos (Simon, 1995; Petrucci, 2002). Com este ideário não se pretende que o pressuposto terapêutico se sobreponha a outros, mas que a ação judicial possa beneficiar a saúde mental dos seus intervenientes, tanto o agressor como a vítima (Simon, 1995).

Neste sentido, vemos o exemplo do Canadá, que desenvolveu um sistema de intervenção extra judicial para crimes ocorridos no contexto familiar ou comunitário, promovendo uma interação vítima-agressor, com base num sistema de compensação. O objetivo desta metodologia é que os incidentes possam ser solucionados sem que seja necessário o enquadramento judicial através de equipas multidisciplinares que atuam no terreno procurando soluções com base em abordagens sistémicas das problemáticas. No mesmo país foi posteriormente constituída uma Rede Pró-Justiça Comunitária e Solução de Conflitos, envolvendo técnicos das variadas áreas como psicólogos, investigadores, mediadores, juristas, entre outros, com vista a criação de respostas extra judiciais para questões como conflitos entre vizinhos, reconciliação vítima/agressor ou conflitos familiares (Hermann, 2002; Cesca, 2004).

A jurisprudência terapêutica encontra-se em consonância com o pressuposto ressocializador subjacente à finalidade das penas, bem como à prevenção, geral e especial da criminalidade, não descurando, assim, o seu objetivo simultaneamente punitivo.

Face o atual cenário de atuação do sistema punitivo espelhado pelos expressivos indicadores de reincidência criminal, aos juízes é colocado o

crecente desafio de fazerem cumprir as suas sentenças, mas também de garantirem que as mesmas alcançam o pressuposto ressocializador, constituindo, neste enquadramento, a jurisprudência terapêutica uma abordagem alternativa.

Esta perspetiva defende que os arguidos terão uma maior tendência para o cumprimento das decisões judiciais se reconhecerem os juízes como figuras fiáveis e credíveis, na medida em que são elementos neutros no processo, constituindo figuras de autoridade honestas, tratando o transgressor com dignidade e dando-lhe oportunidade de se expressar. Neste contexto, a técnica psicológica de contingência comportamental, concretizada através do estabelecimento de um acordo entre terapeuta e agressor, abrangendo os objetivos comportamentais a serem alcançados, bem como o reforço dos resultados adversos para o arguido caso os mesmos não sejam cumpridos, pode concorrer para o cumprimento das sanções aplicadas.

Algumas estratégias tendem a aumentar a eficácia dos acordos estabelecidos em contexto terapêutico, como por exemplo a inclusão de necessidades individuais no acordo, definição de detalhes específicos do comportamento esperado do arguido, listagem das consequências do seu cumprimento ou especificação das datas do acordo. Particularmente, o estabelecimento de uma comunicação clara entre o juiz e arguido, desenvolvida através uma linguagem comum a ambos, tende, simultaneamente, a inferir nos resultados obtidos. Esta abordagem defende ainda que os juízes poderão obter melhores resultados no cumprimento das suas decisões se promoverem um maior envolvimento dos arguidos no

processo judicial, sendo estabelecidas relações de respeito entre ambos, favorecendo, assim, o reforço do compromisso assumido.

A formação especializada de juízes na área de violência doméstica é também referenciada como uma mais-valia ao processo judicial, dotando-o de conhecimentos técnicos fundamentais a uma tomada de decisão esclarecida e que efetivamente concorra para a reparação da vítima e ressocialização do transgressor (Simon, 1995; Petrucci, 2002).

No seguimento da inadequação da intervenção judicial face às características e necessidades da sociedade atual, tem adquirido visibilidade a justiça restaurativa enquanto ideologia que propõe metodologias alternativas de instituir justiça para as vítimas, arguidos e comunidades. O ênfase da justiça restaurativa incide na reparação do dano (restauração) ao invés da sua infligência adicional (retribuição), focando-se na resolução e visa, efetivamente, responsabilizar o arguido pelas suas ações possibilitando-o, objetivamente, de se redimir para com a vítima e comunidade (Cheon & Regehr, 2006; Wormer, 2009; Ptacek & Frederick, 2009; Davies & Beech, 2012; Albuquerque & Robalo, 2012; Costa & Reusch, 2015).

É uma abordagem que procura através de um processo cooperativo envolver os intervenientes no processo, tanto a vítima como o transgressor, desconstruindo os estereótipos tipicamente edificados a seu respeito, sendo atualmente reconhecida como uma autêntica intervenção psicológica que abarca vantagens para ambos (Sherman & Stang, 2010; Pallamolla & Achutti, 2014). Critério fundamental à utilização desta abordagem é a abertura à mesma demonstrada tanto pela vítima como pelo agressor, bem como o reconhecimento deste no que concerne à sua responsabilização sobre o

delito, evidenciando reconsideração e motivação para se redimir (Davies & Beech, 2012; Costa & Reusch, 2015; Simião, 2015).

A justiça restaurativa fundamenta-se no princípio de que a possibilidade de inversão no poder exercido pelo agressor sobre a vítima durante o crime poderá conduzir a acentuadas melhorias nos sintomas de stresse pós traumático da vítima, transtorno tão frequente após a experimentação de um intenso sofrimento, como nos episódios de violência doméstica. É teorizado que a hipótese de a vítima ter a oportunidade de reviver o crime que sofreu, num ambiente seguro, poderá conduzir a uma reelaboração do significado atribuído a essa memória, principalmente se tiver a disponibilidade emocional e psicológica para aceitar a desculpabilização por parte do agressor, sendo fundamental ao processo de superação do trauma. Por outro lado, a possibilidade de um agressor interagir com a sua vítima, consciencializando-se do dano causado, tenderá a conduzi-lo a experimentar um acentuado sofrimento psicológico, superior a qualquer outra sanção penal, concorrendo para uma efetiva alteração das suas modalidades de ação (Sherman & Stang, 2010). Destaque-se que esta metodologia não pretende, de forma alguma, assemelhar-se a estratégias de mediação orientadas para a reconciliação relacional, mas sim constituir um contributo alternativo ao alcance dos objetivos subjacentes ao sistema jurídico.

Uma das principais vantagens desta abordagem consiste no empoderamento da vítima, na medida em que ocorre uma inversão do poder, em que esta detém a oportunidade de num ambiente seguro, neutro e protegido, se exprimir, reivindicar os seus direitos e receber a

desculpabilização do agressor, facilitando, assim, o processo de superação do trauma (Wormer, 2009; Sherman & Stang, 2010).

Destacamos que o foco da justiça restaurativa, e particularmente no crime de violência doméstica, não visa a reconciliação do casal mas a efetiva reparação da vítima, a sua superação do trauma, bem como a responsabilização e ressocialização do agressor.

A operacionalização desta metodologia baseia-se, essencialmente, em 4 modelos: conferência entre vítima e ofensor (reconhecendo-se o estatuto de vítima e agressor, pretende-se alcançar restituição, de alguma forma, e a desculpabilização para com a vítima), *restorative justice conferencing* (envolvendo a família e rede de suporte na solução do problema, responsabilização, ressocialização e reintegração do agressor, bem como na reparação da vítima), círculos de “cicatrização” (pessoas envolvidas no processo de vitimização conferem-se suporte e apoio na superação do trauma), reparações à comunidade (num macro nível, remetendo para crimes cometidos coletivamente e contra a humanidade que requerem compensações para as vítimas, ainda que gerações depois, como nos crimes de guerra) (Ptacek & Frederick, 2009; Wormer, 2009).

Esta metodologia tem sido principalmente utilizada em crimes contra propriedades ou delinquência juvenil (Ptacek & Frederick, 2009; Wormer, 2009), tendo apenas mais recentemente sido transposta para crimes de violência doméstica (Cheon & Regehr 2006; Wormer, 2009), pelo que face as suas particularidades tão distintas requiere uma diferente reflexão sobre a sua operacionalização.

A este respeito autores têm destacado a vantagem de se tratar de um processo que procura envolver ambas as partes na sua superação e na identificação de estratégias para o efeito, ao invés de se prever que da atribuição de uma sentença, proferida por alguém externo ao problema, surja a resolução do conflito (Costa & Reusch, 2015).

Algumas preocupações têm sido colocadas relativamente à utilização desta metodologia em crimes de violência doméstica, nomeadamente, a possibilidade de a vítima se sentir responsabilizada pela necessidade de mudar o agressor, de esta estratégia se aproximar de outras formas de mediação, nomeadamente entre casais, ou até mesmo em termos de riscos para a vítima. Em contrapartida, vantagens como a maior eficácia do processo comparativamente ao sistema judicial tradicional, evidências da sua eficácia particularmente em crimes violentos, possibilidade de desenvolvimento de uma resposta comunitária coordenada ao problema de violência doméstica, são algumas das vantagens apontadas (Ptacek & Frederick, 2009; Sherman & Stang, 2010).

Esta metodologia é utilizada em vários países como Nova Zelândia, Canadá, alguns países europeus como a Holanda, Áustria ou Grécia, sendo integrada sob diferentes formas nos seus sistemas judiciais, sendo a variante mais comum na Europa surgir como opção prévia ao processo criminal (Drost, Haller, Hofinger, van der Kooij, Lunnemann & Wolhuis 2013).

Os resultados desta abordagem têm sido positivos, nomeadamente ao que respeita à opinião das vítimas sobre o processo, reconhecendo-o como mais-valias para si, mas também dos agressores, enquanto possibilidade de se desculparem perante a vítima (Ptacek & Frederick, 2009; Wormer, 2009).

A este encontro o estudo realizado por Strang (2002) releva que as vítimas após participarem no processo de *restorative justice conferencing* apresentam melhorias no que respeita ao seu medo do agressor, sentimento de segurança, ansiedade ou a diminuição da probabilidade de serem novamente vitimizadas (Sherman & Stang, 2010).

Estas abordagens requerem necessariamente um diferente entendimento da criminalidade implicando uma dialética entre o agressor, a vítima e comunidade, visando uma compensação pelo delito praticado tanto para com a vítima como para a sociedade, bem como a ressocialização do transgressor, atuando simultaneamente numa lógica pedagógica e terapêutica.

Acreditamos que esta poderá ser uma via a explorar e desenvolver a fim de procurar ultrapassar alguns dos desajustes identificadas no sistema punitivo, nomeadamente no que respeita à produção legislativa mas também à sua aplicação no crime de violência doméstica, e que como verificámos não estarão a alcançar o seu pressuposto ressocializador. Reforçamos que segundo entendemos a presente metodologia não como um sistema desculpabilizante do agressor, que pretenda diminuir a sua culpa ou perpetuar o ciclo de violência, mas antes uma hipótese alternativa que possa, através de diferentes meios e técnicas, concorrer para os pressupostos subjacentes ao sistema jurídico.

Neste processo o psicólogo forense e a intervenção juspsicológica são não só necessárias como fundamentais, concorrendo para que tanto a arquitetura punitiva, tanto no que respeita à produção legislativa como à sua aplicação, respondam concertadamente às necessidades tanto da vítima,

como do agressor, concorrendo, assim para uma para jurisprudência mais terapêutica e pedagógica, ao encontro do seu pressuposto ressocializador.

7. Legitimação do estudo

O crime de violência doméstica é uma problemática atual, que tem adquirido crescente visibilidade, resultado da progressiva conscientização da sociedade para a sua complexidade, resultado de um longo e penoso percurso ao longo do qual se tem vindo a tornar numa realidade cada vez mais visível e, por conseguinte, foco de investigação.

Esta é uma problemática presente e expressiva em Portugal, sendo referenciados no Relatório Anual da Segurança Interna do ano de 2016 o registo de 27291 ocorrências pela PSP e GNR, referentes a casos de violência doméstica. O mesmo relatório refere que 71.7% as ocorrências respeitam a relações entre cônjuges ou companheiros ou ex-cônjuges ou ex-companheiros. Quanto ao tipo de violência praticada, 82% das situações respeitaram a violência psicológica, 68% a violência física, 16% a violência do tipo social, 9% a violência económica e 3% a violência sexual. Conclui-se, ainda, que em 84% das situações as vítimas foram mulheres e em 86% os denunciados homens, indo ao encontro do defendido pela literatura (Lisboa *et al.*, 2009) de que as mulheres tendem a possuir um risco superior de vitimização. Por este motivo a presente investigação irá incidir essencialmente na violência praticada contra as mulheres, sendo esta considerada o mais generalizado abuso contra os direitos humanos no mundo (Day, *et. al*, 2003; Rosa, Boing, Buchele, Oliveira & Coelho, 2008).

Apesar da expressiva incidência desta tipologia de crime estima-se que apenas uma percentagem residual (por exemplo, cerca de ¼ no caso das agressões físicas) seja reportada às autoridades (Tjaden & Thoennes, 2000; Ptacek & Frederick, 2009; Ringland, & Fitzgerald, 2010; Vasconcellos,

2014), sendo vários os motivos que poderão motivar a resistência das vítimas em apresentarem queixa, nomeadamente o receio pela sua segurança futura (Wormer, 2009) ou a descrença e não identificação com o sistema de justiça. Este facto evidencia o distanciamento ainda existente entre as vítimas e o sistema de justiça, legitimando a necessidade de investimento em ações e estratégias que possam contrariar esta tendência.

A violência doméstica contra as mulheres possui na sua génese a interação entre fatores individuais (*e.g.* psicopatologia do agressor) variáveis situacionais (*e.g.* divórcio), socioculturais (*e.g.* desigualdade de género), relacionais (*e.g.* intergeracionalidade da violência), sendo um fenómeno multicausal e multifacetado (Walker, 1999; Day, *et. al*, 2003; Sani, 2008; Fonseca, Ribeiro, & Barbosa, 2012). Revestindo-se de variadas manifestações desde a intimidação, a ameaça, agressão física, agressão psicológica e emocional ou o isolamento (Antunes, 2002), possui, tendencialmente, um carácter repetitivo e prolongado no tempo (Day, *et. al*, 2003; Instituto de la Mujer, 2006). As suas expressões tendem a ser organizadas por categorias, sendo as mais comuns a dimensão psicológica, física, sexual e omissão/negligência (Day, *et. al*, 2003). Em comum estas expressões possuem o exercício do poder sobre o outro, refletindo uma hierarquia na relação, sendo na maioria das vezes praticado contra as mulheres, sendo estimado que entre 40% a 70% dos homicídios femininos são concretizados por parceiros íntimos e possuindo as mulheres um risco de agressão superior ao do homem (Day, *et. al*, 2003; Barreto, Bucher-Maluschkea, Almeida, & DeSouzac, 2009; Lisboa *et al.*, 2009).

Face a sua complexidade, conceptualizar a violência doméstica tem constituído um desafio para os investigadores da área, tendo sido formuladas diferentes propostas assentes em variadas perspetivas, que no entanto, em comum possuem o facto de destacarem que uma das principais especificidades desta tipologia de violência se trata de a mesma ocorrer no seio das relações de intimidade (Manita, 2005; Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009), repercutindo-se este facto, necessariamente, no acentuar das consequências adversas para todos os intervenientes. Particularmente no que respeita ao agressor, a prática de crimes no contexto das suas relações e contextos de intimidade poderá indiciar um desprendimento tal para com a norma, mas também uma desvinculação para com os diversos sistemas que o constituem, que poderá potenciar a replicação desse comportamento transgressivo, tanto no contexto da violência doméstica como em outros, sendo esta considerada uma das tipologias criminais nas quais a recidiva criminal é mais acentuada (Manita, 2008; Jonhson & Dowson, 2011).

Na presente investigação optou-se pela utilização da terminologia violência doméstica, sendo esta a definição legal que abrange a violência praticada no seio de relações de intimidade nas suas diversas manifestações, particularmente a exercida contra a mulher, reconhecendo-se a sua predominância, legitimada pela necessidade de consonância ao enquadramento jurídico português, no qual se enquadra o desenho metodológico utilizado.

Neste sentido encontramos no Relatório Anual de Monitorização da Violência Doméstica em Portugal referente ao ano de 2015 (Ministério da Administração Interna, 2016) a referência a que em 31% dos casos registados

pela GNR existiam ocorrências anteriores reportadas, ou não, às forças de segurança e das situações registadas pela PSP em 21% existiam ocorrências anteriormente formalizadas através de outras participações, refletindo estes dados o fenómeno da reincidência criminal no espectro da violência doméstica.

A prática desta tipologia de violência conduz a repercussões significativas na esfera pessoal, social, profissional, bem como na própria saúde, física e psicológica, da vítima, tendo também elevados custos económicos e sociais (Manita, 2005; Rosa, Boing, Buchele, Oliveira & Coelho, 2008). A título de exemplo, a literatura refere que um em cada cinco dias de falta ao trabalho resulta da prática de violência contra a mulher na sua casa, a cada cinco anos a mulher perde um ano de vida saudável em situações de violência doméstica, prevendo-se que o custo da prática da violência doméstica varia entre 1.6% e 2% do PIB de um país. Estes factos permitem-nos compreender a dimensão do impacto e das consequências que a prática de violência contra as mulheres aporta, enquanto problemática generalizada, tanto na esfera privada como pública, possuindo repercussões que se estendem a toda a sociedade (Lisboa *et al.*, 2009; Fonseca, Ribeiro, & Barbosa, 2012).

Especificamente para as mulheres, as consequências são nefastas, havendo estudos que referem o desenvolvimento de sentimentos de culpa, sofrimento, decepção, vergonha e adoção de uma postura passiva, percecionando o autor da agressão como doente, possuidor de dupla personalidade, irremediável ou digno de pena (Johnson & Dawson, 2011; Fonseca, Ribeiro, & Barbosa, 2012). O facto de o crime haver sido praticado

por um conhecido, normalmente elemento da sua intimidade, tende a gerar angústia, sentimentos de perda, questionamento face decisões de vida (Day, *et. al*, 2003).

Relativamente à ação do sistema judicial no crime de violência doméstica, o mesmo relatório informa-nos que, do total de inquéritos analisados neste âmbito, entre 2012 e 2015 (n=33841), 78% resultaram em arquivamento, dos quais 74.5% por falta de prova, 17.5% em acusação e 5% em suspensão provisória do processo. Do total de sentenças transitadas em julgado referentes ao mesmo período temporal 59% resultaram em condenação, sendo que em 60% dos casos em que a pena de prisão foi aplicada a mesma teve uma duração de 2 a 3 anos, tendo esta tipologia de pena, na sua maioria, sido suspensa.

Os dados apresentados reclamam uma reflexão e questionamento relativamente à ação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, espelhando os mesmos espelham uma inconsistente ação penal, revestindo-se de um carácter essencialmente intimidatório, possuindo severas penas abstratas não se refletindo as mesmas na execução do Aplicador.

No contexto da violência doméstica, a intervenção desenvolvida deverá revestir-se de um carácter sistémico, incluindo os diversos atores sociais envolvidos no processo, nomeadamente o agressor, enquanto protagonista da ação transgressiva. Considerando que o fim último desta intervenção deva ser a ressocialização e respetiva (re)integração social do agressor, importa atender à atuação do sistema punitivo, particularmente no que respeita à sua severidade, concorrendo para a sua eficácia (Poiães, 2001a).

Neste processo, a intervenção juspsicológica apresenta-se fundamental, em todas as etapas do processo criminalização, da primária à terciária, contribuindo para um sistema jurídico mais esclarecido e que efetivamente possa adequar as suas práticas às especificidades de cada transgressor, concorrendo para a sua efetiva ressocialização, mas também para a proteção da vítima.

Importa, então, entendermos o perpetrador da violência doméstica enquanto ator social, construtor de si, das suas realidades e vivências, dotado de intencionalidade e enquadrado nos diversos sistemas que integra e que o constituem. Assim, a violência doméstica deverá ser compreendida holisticamente e de forma integrada, associando o sistema de personalidade, de ação e significação do seu protagonista, considerando a sua temporalidade e intencionalidade, traduzida numa modalidade de ação.

Neste sentido, a presente investigação é desenvolvida segundo os principais objetivos:

1. Aprofundar o conhecimento sobre a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica e investigar o seu funcionamento preventivo da reincidência criminal;

1.1. Conhecer a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica através do estudo da sua severidade punitiva;

1.2. Inferir em que medida o sistema punitivo possui um funcionamento preventivo da reincidência criminal através do estudo da atuação do Legislador e Aplicador;

Face a complexidade de que a problemática da violência de reveste, da sua evidente expressividade nos planos nacional e internacional, reconhecendo-se os preocupantes indicadores de reincidência criminal nesta tipologia de crime, associados a uma desarticulada ação penal, cremos legitimada a necessidade de aprofundar a investigação a estes níveis, procurando concorrer para uma jurisprudência mais terapêutica e efetivamente ao encontro do seu pressuposto ressocializador.

8. Metodologia

Aprofundar o conhecimento sobre a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, particularmente no que respeita à sua severidade, e, simultaneamente, investigar o seu funcionamento preventivo da reincidência criminal, constituiu o objetivo geral a que nos propusemos com a presente investigação. Tratando-se de uma investigação em Psicologia Forense, importa atender e considerar a particularidade dos fenómenos que nela se inscrevem aquando da definição do seu enquadramento metodológico, assegurando que o mesmo concorre para uma eficaz captação, descodificação, compreensão e explicação dos mesmos (Poiares, 2001a).

Desenvolver uma investigação de cariz científico implica um processo de sistematização de pesquisa e análise com vista à obtenção de conhecimento e compreensão de determinada realidade, sendo, para o efeito, possível adotar vários paradigmas, importando selecionar o que mais se coaduna ao objetivo do estudo (Damasceno, Silva, Ramos, Cortez & Bastos, 2014).

Atendendo ao nosso propósito, optámos por delimitar o objeto de estudo à decisão judicial, pois, enquanto princípio, esta concretiza a atuação do sistema penal sobre o transgressor, refletindo, concomitantemente, o seu pressuposto retributivo, dissuasor e ressocializador. Logo, será esta mesma decisão judicial, por excelência, o meio através do qual mais eficazmente poderemos estudar a atuação do sistema punitivo, bem como procurar inferir em que medida origina, ou promove, o que se entende como a ressocialização do transgressor.

De facto, é a decisão judicial que abarca os principais pressupostos que fundamentam, em princípio, a atuação do sistema judicial, destacando-se a sua função retributiva, dissuasora e ressocializadora (Davies & Beech, 2012), pelo que se nos apresenta lógico através dela circunscrever o seu estudo.

Os objetivos que sustentam a presente investigação são, por um lado, suportados pelo conhecimento teórico sobre os temas em questão, alicerçando-se num modelo hipotético-dedutivo (Duarte, 2009; Coutinho, 2014), que nos alerta e interpela à reflexão sobre o funcionamento do sistema punitivo, em particular no âmbito do crime de violência doméstica, reconhecendo-se a ineficácia da severidade punitiva enquanto estratégia dissuasora da criminalidade, explorando-se, simultaneamente e neste seguimento, o seu funcionamento preventivo da reincidência criminal (Darley, 2005; Simons, 2010; Davies & Beech, 2012; Berenji, Chou & D’Orsogna, 2014). Por outro, importa nas ciências sociais e humanas reconhecer a existência de diferentes e diversas realidades que poderão simultaneamente coexistir sob a forma de construções mentais, pelo que pretendemos, concomitantemente, incluir na investigação uma vertente fenomenológica orientada para um processo de compreensão, significação e ação, no método científico. Trata-se de atribuir ao investigador a função de construtor e produtor de conhecimento, numa lógica indutiva, em que se pretende partir da realidade concreta e objetiva a eventuais pressupostos generalizados (Coutinho, 2014).

Desta forma, estaremos a colocar em dialética os paradigmas quantitativo/positivista e qualitativo/interpretativo, aceitando-se a sua

complementaridade e até integração epistemológica, legitimando a necessidade de comungar ambas as perspectivas numa efetiva compreensão holística do fenómeno em estudo (Manita, 1998; Coutinho, 2014). Trata-se de um modelo misto e compósito, enriquecido pela articulação entre as duas vertentes, que agrega complexidade ao estudo, implicando ao investigador dinamismo e oscilando entre os esquemas de pensamento indutivo e dedutivo (Sampieri, Collado & Lucio, 2006).

Assim, o ponto de partida da investigação será compreender, enquanto princípio de conhecimento (Günther, 2006), a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, inferindo em que medida as penas são, ou não, severas. Explorar o seu funcionamento preventivo da reincidência criminal constitui, igualmente, objetivo fulcral da presente investigação pelo que importará conhecer em particular a atuação do sistema punitivo mediante o fenómeno.

Procurando responder a ambas as questões, iremos recorrer, por um lado, ao método de estudo descritivo, pois cremos ser ajustado ao objetivo explicativo da ação judicial no crime de violência doméstica, procurando identificar as suas características e particularidades, revelando a sua severidade e atuação específica na reincidência criminal. Por outro, procurando aprofundar o conhecimento sobre os temas em questão, propusemo-nos explorar a relação entre o fenómeno de reincidência criminal e a severidade punitiva, verificando se ocorre a existência de conexão entre ambos, e, em caso afirmativo, sobre que características se reveste (Sampieri, Collado & Lucio, 2006; Coutinho, 2014).

A exploração das decisões judiciais que integram a amostra da presente investigação, constituindo o objeto de estudo, decorrerá através da utilização do Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização – (Criminalização Secundária) (ISPP – CS) (Poiares, 2009) (anexo I), permitindo a recolha, sistematização e quantificação da informação recolhida, bem como, simultaneamente, analisar o conteúdo da discursividade do sentenciar, possibilitando, assim, a dialética entre as abordagens quantitativa e qualitativa, num processo de captação e descodificação do fenómeno.

Desta forma, pretendemos partir do estudo descritivo das variáveis severidade punitiva e reincidência criminal, explorar a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica em Portugal, seguindo, através do método estatístico, a verificação de existência de conexão entre ambas as variáveis. Paralelamente, analisando a discursividade do sentenciar, iremos conferir uma maior profundidade e riqueza interpretativa aos resultados alcançados.

Tratar-se-á de um modelo de investigação não experimental, pois o seu objetivo reside na análise da atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, tal como se produz no seu natural contexto, não havendo uma intencional manipulação de variáveis. Mais concretamente, o desenho da presente investigação enquadra-se no modelo transversal, pois centra-se em analisar a presença de determinada variável num certo contexto (a severidade punitiva no crime de violência doméstica, bem como as características da atuação do sistema punitivo face o fenómeno da reincidência criminal), assim como em determinar qual a relação existente entre variáveis num dado momento (verificação da relação existente entre a

reincidência criminal e a severidade punitiva) (Sampieri, Collado & Lucio, 2006).

8.1. Amostra

A amostra da presente investigação foi constituída por 50 decisões judiciais, das quais 26 foram consultadas em sede da Equipa de Reinserção Social Lisboa Penal 6 e 24 através da consulta on line nas Bases Jurídico-Documentais em <http://www.gde.mj.pt>.

Seguindo o natural processo de constituição de amostragem definimos como unidade de análise as decisões judiciais, considerando apenas as referentes a processos de violência doméstica relacional, excluindo, portanto, as que poderíamos classificar como enquadradas no âmbito familiar (como a violência contra descendentes), procurando, assim, conferir um maior rigor relativamente à informação que pretendemos obter.

Trata-se de uma amostra não probabilística, de conveniência, na medida em que intencionalmente seleccionámos apenas decisões judiciais no âmbito do crime de violência doméstica enquadradas numa dinâmica relacional, a fim de melhor servir o nosso objetivo de estudar a atuação do sistema punitivo no mesmo crime (Sampieri, Collado & Lucio, 2006).

Entendemos que esta será uma amostra que responde aos objetivos da presente investigação, uma vez que a sua principal finalidade não reside na generalização dos resultados à população em geral, mas antes, explorar em profundidade determinado fenómeno em certas circunstâncias

específicas: no presente caso, a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, particularmente no que respeita à reincidência criminal.

8.2. Medida

Almejando o aprofundar do conhecimento relativamente à arquitetura penal e respetiva aplicação da lei no que respeita aos crimes de violência doméstica, aplicámos o Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização – (Criminalização Secundária) (ISPP – CS) (Poiares, 2009) às decisões judiciais consultadas, a fim de obter informação sobre tendências e alterações na aplicação da lei aos arguidos pelo crime de violência doméstica.

O ISPP-CS encontra-se em fase de aferição para a população portuguesa e foi desenvolvido por Poiares (2009), tendo como objetivo geral possibilitar o conhecimento sobre a atuação do sistema judicial entre diferentes arguidos para uma mesma tipologia de crime, bem como evidenciar os apelos ao contributo da Psicologia Forense, através da verificação do grau de psicologização.

No que respeita à sua constituição, o ISPP-CS congrega conteúdos relacionados com o arguido, o processo atual e com a medida penal finalmente adotada. O instrumento é preenchido através de respostas aos itens que variam entre escala múltipla ou respostas diretas, variando a duração da sua aplicação a cada processo com a dimensão do mesmo.

O ISPP-(CS) inicia-se com uma folha de rosto sintetizando a informação sobre o tribunal em questão, prevendo-se a identificação se singular ou coletivo. Requer a explicitação do número de arguidos envolvidos; sobre o tipo de decisão final aplicada (condenatória ou absolutória); bem como as penas aplicadas a cada arguido.

A primeira dimensão do ISPP – (CS) inclui itens relativos ao tipo de tribunal, número de arguidos, informação quanto à decisão judicial, pena aplicada, data e identificação do investigador. Na sua totalidade, o ISPP-CS é constituído por três secções, sendo que a primeira abrange itens referentes à dimensão sociodemográfica (*e.g.* naturalidade, género, estado civil) e cultural do arguido (*e.g.* etnia, escolaridade), bem como à anamnese judicial, referente ao registo criminal do sujeito, que inclui uma dimensão clínica (*e.g.* referência a diagnóstico de saúde mental, adições) e uma dimensão forense (*e.g.* realização de avaliação psicológica forense, realização de perícia de personalidade, antecedentes criminais). Na segunda secção encontramos itens orientados para a recolha de informação sobre o processo atual (*e.g.* crimes porque está pronunciado, medida de coação, tipo de crime imputado, preceito incriminador). A última seção do ISPP-(CS) aborda a medida penal adotada e a sinopse geral (*e.g.* pena aplicada a cada crime, prisão efetiva, decisão referenciou a realização de avaliação psicológica, perícia determinou agravamento da pena, dosimetria penal).

Para efeitos de cotação do ISPP-(CS) existe um caderno de instruções contendo toda a informação necessária para a elaboração da informação recolhida, bem como possui uma plataforma de cotação desenvolvida por Branco & Poiares (2013), onde os resultados são introduzidos viabilizando

a obtenção do índice de severidade punitiva aplicada a cada decisão judicial. A análise da informação obtida é desenvolvida através do método estatístico com o programa SPSS 24 (*Statistical Package for Social Sciences*).

Trata-se, globalmente, de um instrumento que possibilita uma efetiva análise da decisão judicial, captando e viabilizando a descodificação da ação objetiva do sistema judicial sobre o arguido, possibilitando ao investigador uma efetiva compreensão sobre a severidade punitiva exercida entre arguidos relativamente a determinada tipologia de crime, bem como o índice de psicologização envolvido no mesmo, concluindo-se, ou não, a influência do saber psicológico no exercício da justiça.

8.3. Procedimento

O procedimento numa investigação científica deverá traduzir-se num processo que conduza o investigador a progredir em direção ao seu objeto de estudo, devendo, para o efeito, garantir o cumprimento de certos requisitos. O seu ponto de partida deverá consistir na rutura com pré-conceitos, ilusões de compreensão e conhecimento totalitário sobre a realidade em geral, e em particular, sobre os temas em estudo (Quivy & Compenhoudt, 2005). Este processo deverá ser suportado pela construção de uma base concetual e teórica, abarcando a lógica explicativo-compreensiva do investigador sobre o fenómeno. Por último, a verificação, etapa de confirmação sobre a proposição estabelecida através dos resultados obtidos com investigação desenvolvida.

O processo de investigação no qual o procedimento consiste é essencialmente suportado pelo paradigma metodológico adotado pelo investigador, sendo, no presente estudo, refletido na intercontribuição estabelecida entre a variante quantitativa e qualitativa.

Neste sentido, o ponto de partida de presente investigação residiu no processo de rutura e construção através da sistematização da produção científica disponível sobre os temas em estudo, tanto no panorama nacional como internacional, cuidando-se de espelhar a dialética estabelecida entre as diferentes abordagens existentes sobre os assuntos, concorrendo para uma holística e sistemática compreensão dos mesmos. Reconhecendo-se a almejada neutralidade que ao perfil do investigador é solicitado, importa assumir a falibilidade da mesma, natural da condição humana, tratando-se, antes assim, de uma compreensão condicionada à significação por si adotada, uma vez que o conhecimento humano não é direto, antes subordinado ao processo de descodificação e interpretação da realidade (Popper, 1977; Manita, 1998).

Esta perspetiva contraria o posicionamento positivista, na medida em que reconhece o condicionamento do conhecimento à subjetividade inerente à interação sujeito-objeto, inviabilizando a génese de conhecimento puro e totalitarista das produções científicas, visando, antes, a integração dessa mesma subjetividade ao invés da tentativa da sua exclusão (Manita, 1998).

Tendo-se na presente investigação optado por delimitar o objetivo de estudo a decisões judiciais no âmbito do crime de violência doméstica, importou, de seguida, solicitar autorização à Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais para recolha de amostra na Equipa de Reinserção

Social Lisboa Penal 6, que por uma questão geográfica era a mais conveniente, explicitando os objetivos da investigação e os contributos que se pretendiam obter através da consulta de decisões judiciais do referido Dispositivo.

Nesta etapa, conforme anteriormente referido, importou especificar e delimitar a consulta de decisões judiciais ao âmbito do crime de violência doméstica praticada em contexto relacional, uma vez que o enquadramento jurídico português abrange, na sua tipificação, outras manifestações de violência, nomeadamente para com dependentes ou descendentes. Desta forma, pretendemos conseguir um maior rigor e fiabilidade na informação obtida através da consulta das referidas decisões judiciais, procurando, assim, delimitar da melhor forma possível o nosso objeto de estudo aos objetivos da presente investigação.

Cada decisão judicial foi consultada através da utilização do ISPP-CS (Poiares,2009), no entanto importa referir que a maioria dos processos não possuía toda a informação abrangida pelo referido instrumento, pelo que se revelou necessário adaptar a utilização do mesmo à realidade da amostra em questão.

Respeitando a Equipa de Reinserção Social Lisboa Penal 6 ao território correspondente à antiga Comarca da Amadora, natural será que a totalidade de decisões judiciais consultadas nesse dispositivo correspondam à referida localização.

No que concerne à recolha de amostra através de método de consulta de informação *online*, o procedimento traduziu-se numa pesquisa sobre as

potenciais localizações de decisões judiciais que se enquadrariam no objetivo do presente estudo. Assim, verificámos que através do site www.gde.mj.pt era possível aceder a acórdãos dos Tribunais da Relação de várias partes do país, facto que considerámos interessante face aos objetivos a que nos propusemos com a presente investigação, uma vez que possibilitaria obter um panorama mais alargado de atuação do sistema penal em Portugal no âmbito do crime da violência doméstica.

As tecnologias de informação e comunicação constituem eficazes meios de recolha de informação, tendo a internet, nomeadamente, vindo a desempenhar um papel fulcral no desenvolvimento das investigações, particularmente nas ciências sociais e humanas, revestindo-se de vantagens como a economia temporal e financeira (Vaz, Rodrigues, Loureiro, Barbosa & Antunes, 2009; Damasceno, Silva, Ramos, Cortez & Bastos, 2014). A este propósito autores alertam para a necessidade de versatilizar os procedimentos de recolha de informação quantitativa, valorizando a recorrência aos dados de natureza qualitativa, como são exemplos textos, relatórios (Freitas & Moscarola, 2002) ou, no caso da presente investigação, decisões judiciais, sistematizando a informação e elaborando-a, num processo de construção de conhecimento.

Ao longo do presente estudo constituiu ainda preocupação a contínua adoção de uma postura de honestidade intelectual, dotada de sentido ético, estando cientes da responsabilidade relativamente aos produtos da investigação e, simultaneamente, almejando contribuir para a ampliação do conhecimento relativamente à atuação do sistema penal no crime de violência doméstica em Portugal (Prodanov & Freitas, 2013).

9. Resultados

Para efeitos de exploração quantitativa dos resultados utilizámos o SPSS Statistic Pacage 24 bem como a plataforma de cotação do ISPP, desenvolvida por Branco & Poiares (2013). Para o efeito recorremos a métodos estatísticos paramétricos e não paramétricos, em função das variáveis em questão, potenciando a análise dos resultados obtidos.

Situamos que a amostra da presente investigação foi constituída por 50 decisões judiciais no âmbito do crime de violência doméstica enquadrada no domínio relacional, das quais 26 foram consultadas em sede da Equipa de Reinserção Social Lisboa Penal 6 e 24 através da consulta *on line* nas Bases Jurídico-Documentais em <http://www.gde.mj.pt>.

As decisões judiciais consultadas são provenientes de diferentes tribunais, distribuindo-se da seguinte forma: 52% pertencem ao Distrito Judicial de Lisboa, 20% ao Tribunal da Relação do Porto, 10% ao Tribunal da Relação de Guimarães, 8% ao Tribunal da Relação de Évora, 6% ao Tribunal da Relação de Lisboa e 4% ao Tribunal da Relação de Coimbra.

Iniciando com a caracterização sociodemográfica dos agressores, os mesmos possuem uma média de 46,39 anos de idade, compreendidas entre os 27 e 65 anos, sendo 98% do género masculino. Relativamente às habilitações literárias, 24% possui o ensino básico, 18% o primário, 8% o secundário, 10% frequência universitária, licenciatura ou mestrado. Quanto ao estado civil, conforme verificamos no gráfico seguinte, 34% dos agressores são casados ou vivem em união de facto, 40% divorciados ou separados e 18% solteiros.

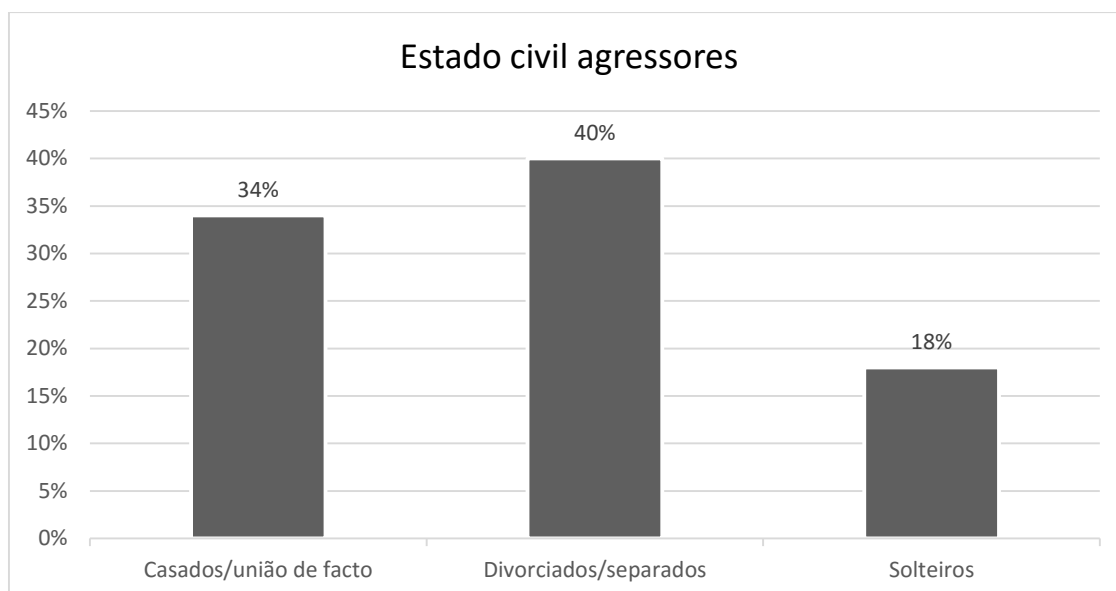


Gráfico 1. Estado civil agressores

No que concerne à sua naturalidade, destacamos que 28% dos agressores nasceu no distrito de Lisboa, 4% em Angola, 4% no distrito de Setúbal e 2%, respetivamente, nos distritos de Castelo Branco, Bragança, Porto ou em zona rural, sem outra especificação. Na atualidade 56% dos agressores da amostra residem no distrito de Lisboa, 6% no distrito de Braga, 4% no distrito do Porto, 4% no distrito de Portalegre e nos distritos de Coimbra, Beja, Guarda, Viana do Castelo, Aveiro e na Madeira residem, em cada respetivamente, 2% dos agressores, de acordo com o seguinte gráfico.

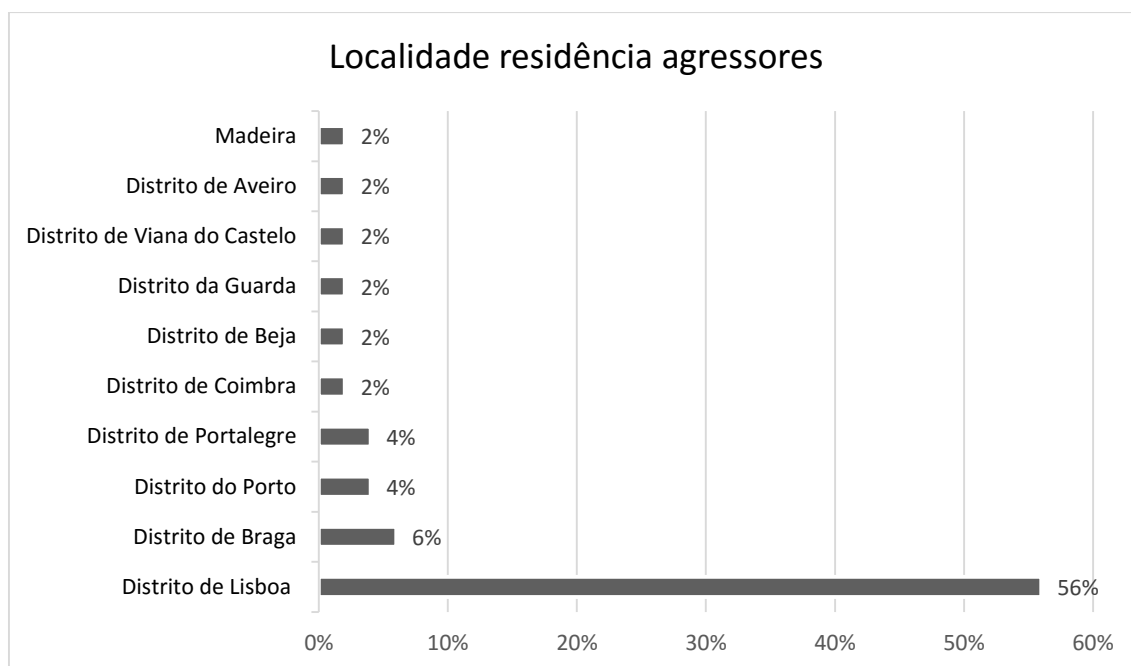


Gráfico 2. Localidade de residência dos agressores

Relativamente à situação profissional dos agressores, 56% encontram-se empregados, 32% desempregados, 4% reformado ou pré reformado e 2% são estudantes. Quanto às atividades profissionais desempenhadas pelos agressores, 20% trabalha no 1º sector / manufatura, 16% é empregado por conta própria, 10% trabalha em serviços, 8% em transportes, 6% em restauração, 6% em serviços de segurança, 4% em trabalho administrativo e 2% como professor.

Nas decisões judiciais consultadas encontrámos referência a algum tipo de perturbação psicológica em 6% dos agressores, notando, no entanto, a elevada escassez de informação disponível a este nível.

Quanto a adições, em 38% dos agressores verificámos referências ao consumo de álcool e em 2% ao consumo associado de álcool e drogas, sem outra especificação.

Relativamente à intervenção juspsicológica no domínio da atuação do sistema judicial no crime de violência doméstica, apenas numa decisão judicial verificámos referência à realização de avaliação psicológica.

No que concerne à existência de antecedentes criminais, a trajetória de 30% dos agressores coincidiu anteriormente, em algum momento e independentemente do motivo, com o sistema judicial. Relativamente aos crimes anteriormente cometidos, 8% dos arguidos havia praticado crime de violência doméstica e 20% crimes diversos como, por exemplo, condução sob efeito de álcool e sem habilitação ou tráfico de estupefacientes.

Quanto à pena anteriormente aplicada, a 10% dos agressores foi-lhe atribuída a suspensão provisória do processo, a 4% a suspensão da execução da pena e a 8% multa.

Referente às medidas de coação aplicadas no corrente processo, em 20% das decisões judiciais verificámos referência a esta obrigatoriedade. Quanto à prisão preventiva, 2% dos agressores foram sujeitos a esta medida. Apenas 4% dos agressores beneficiaram de acompanhamento terapêutico no domínio das dependências durante o processo judicial decorrente.

Relativamente à punição aplicada nas 50 decisões judiciais consultadas, 50% respeitou a suspensão da execução da pena mediante o cumprimento de obrigações, 26% a suspensão provisória do processo, 8% a suspensão da execução da pena simples, 6% a pena de prisão efetiva, 6% absolvição e 4% a suspensão da execução da pena mediante o pagamento de multa e cumprimento de obrigações.

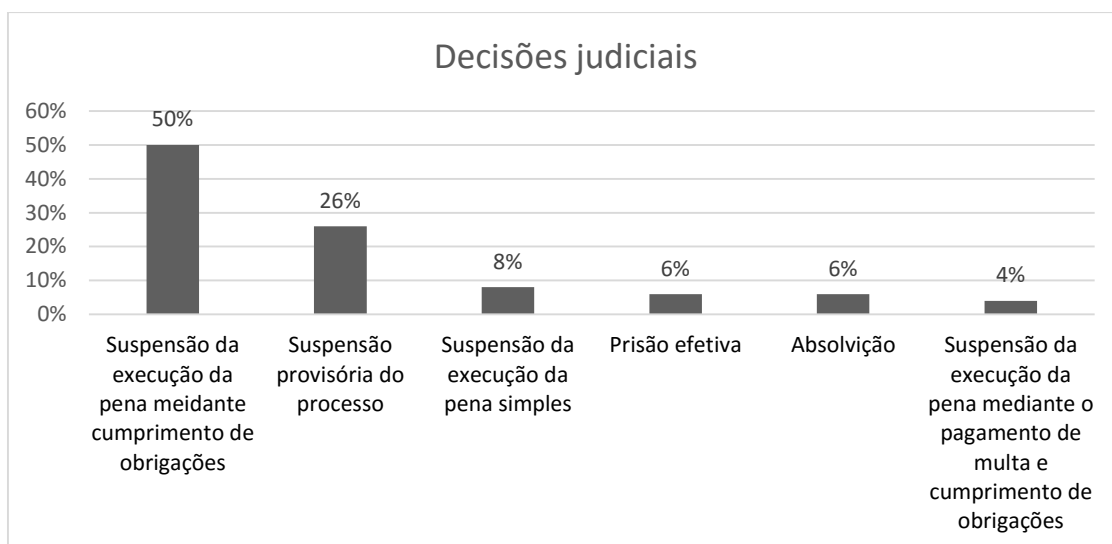


Gráfico 3. Decisões judiciais aplicadas

A fim de explorarmos a severidade punitiva referente às decisões judiciais que efetivamente se traduziram na aplicação de uma sentença/acórdão, que corresponderam a 68% da amostra, utilizámos a plataforma de cotação do ISPP (Branco & Poiares, 2013). Os resultados evidenciaram uma média de severidade punitiva de 39,03, numa escala de 0 e 100, variando a cotação entre 11 e 79.

Tabela 1

Índice de Severidade Punitiva e Psicologização

Índice de Severidade Punitiva e Psicologização	
Média	39,03
Mínimo	11
Máximo	79
Desvio padrão	16,50

Através da análise de variância comparámos a severidade punitiva entre os agressores com referência a antecedentes criminais e os que não possuíam essa referência, verificamos que a média da severidade nos agressores que possuíam trajetória transgressiva situa-se nos 39,31 ao passo que a média da severidade nos agressores sem essa referência é de 38,68, não se verificando, uma associação com significância estatística entre a severidade punitiva e a referência à existência de antecedentes criminais $F_{(1,30)}=0,010$, $P=,921$.

Explorando a relação entre o tipo de decisão judicial aplicada e a referência a antecedentes criminais nos agressores, verificámos que a suspensão provisória do processo foi aplicada a 7% do total de agressores com referência a antecedentes criminais e a 32% do total de agressores sem referência a essa trajetória. Por sua vez, a suspensão da execução da pena simples foi aplicada a 13% dos agressores com referência a antecedentes criminais e a 7% dos agressores sem referência a mesma referência. Quanto à suspensão da execução da pena com obrigações, a mesma foi aplicada a 60% dos agressores com referências a antecedentes criminais e a 48% dos agressores sem essa referência. Quanto à suspensão da execução da pena com multa e obrigações, apenas foi aplicada a 3% dos agressores sem referência a antecedentes criminais. A pena de prisão efetiva foi aplicada a 13% dos agressores que já possuíam trajetória transgressiva e a 3% dos agressores que não possuíam essa indicação. Finalmente, a absolvição foi aplicada a 7% dos agressores que possuíam referência a antecedentes criminais e a 7% dos agressores sem essa referência. As diferenças identificadas entre decisões aplicadas aos agressores em função da existência, ou não, de referência a

antecedentes criminais não possuem significância estatística ($\chi^2=5,648$, $P=,342$).

Tabela 2

Percentagem de decisões judiciais aplicadas por referência a antecedentes criminais

Decisão judicial	Referência antecedentes criminais	Sem referência antecedentes criminais
Absolvição	6,7%	6,5%
Suspensão provisória do processo	6,7%	32,3%
Prisão efetiva	13,3%	3,2%
Suspensão da execução da pena simples	13,3%	6,5%
Suspensão da execução da pena com multa e obrigações	0,0%	3,2%
Suspensão da execução da pena com obrigações	60,0%	48,4%

Quanto à localização geográfica dos Tribunais em questão, constatamos que a média da severidade punitiva das decisões judiciais correspondentes ao Tribunal da Relação de Lisboa é 37, do Distrito Judicial de Lisboa é 44,58,

do Tribunal da Relação de Coimbra 41,50, do Tribunal da Relação de Évora 38,50, do Tribunal da Relação do Porto 34,44 e do Tribunal da Relação de Guimarães 33,50 não se verificando diferenças estatisticamente significativas entre si ($F_{(5,28)}=0,479$, $P=,789$).

No que concerne à idade do agressor não identificámos relação com a severidade punitiva aplicada ($R=-,108$, $P=,681$).

Relativamente ao consumo de álcool, a média da severidade punitiva das decisões judiciais aplicadas a agressores com referências a essa adição situa-se nos 38,18 e de 39,73 nos agressores sem essa referência, possuindo uma significância de 0.909, não se podendo concluir existir uma relação entre a referência ao consumo de álcool e a severidade da sanção aplicada ($F_{(2,31)}=0.095$, $P=.909$).

Analisando a severidade punitiva no espectro das habilitações literárias dos agressores, verificamos que nos licenciados e mestres a média da severidade punitiva foi de 35.67, nos agressores com ensino secundário 51.33, com o ensino básico 32.75 e 39.14 para os que possuem uma escolaridade inferior, não possuindo diferenças significativas entre si ($F_{(3,17)}=1.153$, $P=.356$).

No que respeita à profissão exercida pelo agressor, verificamos que a média da severidade punitiva para os profissionais do 1º setor/manufatura é 38.63, na área dos serviços é de 38.80, nos serviços de segurança é 54, nos empregados por conta própria 36.29, nos transportes 17, no trabalho administrativo 38 e no professor de 46, novamente, não possuindo estas diferenças significância estatística, apesar do expressivo acentuar da

severidade junto dos profissionais na área de segurança ($F_{(7,18)}=.517$, $P=.810$).

Procurando aprofundar o estudo sobre as decisões judiciais no crime de violência doméstica, importou-nos associar a análise do discurso do sentenciar, na medida em que considerámos que poderia incluir indicadores relevantes ao objetivo da presente investigação, e contribuir para um ampliar da informação recolhida a este nível. Particularmente, neste âmbito, importou-nos explorar as indicações veiculadas pelo Aplicador, no papel de juiz, no que poderemos designar por uma intervenção especializada junto dos agressores, considerando, particularmente, o que respeita à intervenção juspsicológica.

Constatámos que em 46% do total de decisões judiciais constituintes da amostra foi recomendado o acompanhamento por parte da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, em 20% o tratamento no âmbito da problemática de adições, em 12% a obrigatoriedade de participação em programas de intervenção especificamente desenhados para agressores e em 8% foi realizado o encaminhamento para intervenção psicológica / psiquiátrica, conforme reflete o gráfico seguinte.

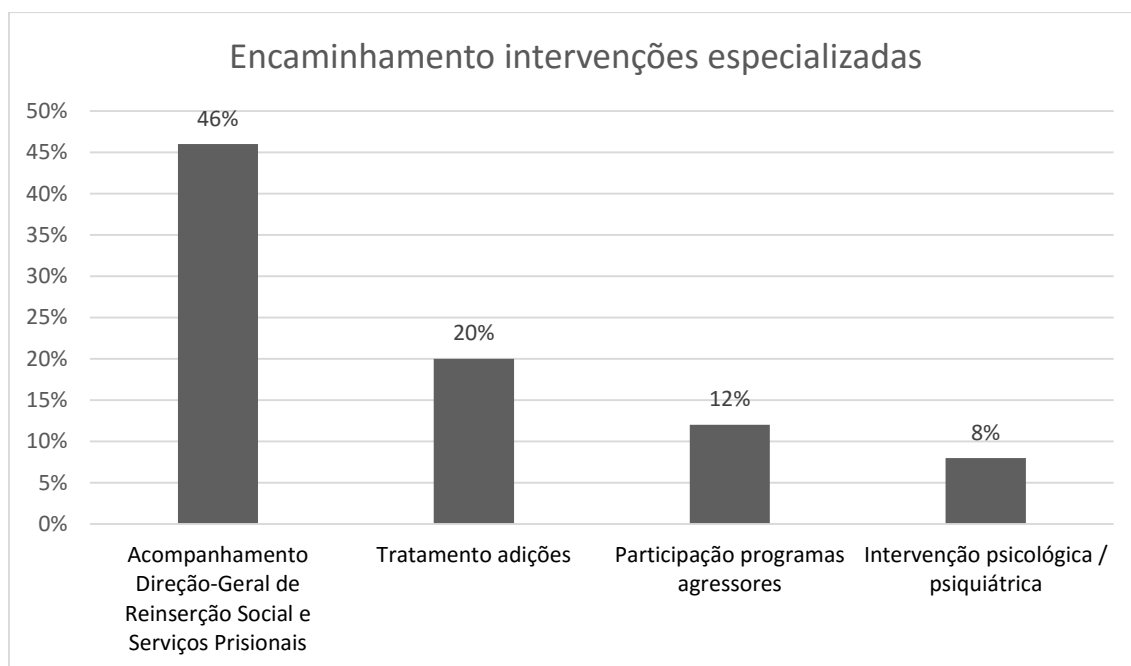


Gráfico 4. Encaminhamento para intervenções especializadas

Considerando estas dimensões, importou explorar as diferenças entre agressores com referência a antecedentes criminais e agressores sem esta indicação, procurando aprofundar o conhecimento no que respeita à intervenção do sistema jurídico no fenómeno da reincidência criminal no crime de violência doméstica. Neste sentido, verificámos que 53% dos agressores com referência a trajetória transgressiva e 42% dos agressores sem essa indicação foram encaminhados para acompanhamento da Direção-Geral de Reinsersão Social e Serviços Prisionais. Quanto à intervenção psicológica / psiquiátrica, apenas 7% dos agressores com antecedentes criminais e 10% dos agressores sem essa informação foram encaminhados para este suporte. Por sua vez, o tratamento no âmbito das adições foi recomendado a 13% dos agressores com informação sobre práticas criminais anteriores, ao passo que 19% dos agressores sem informação sobre trajetória transgressiva foram encaminhados para o mesmo apoio. Quanto à integração

em programas de intervenção específicos para agressores, 7% dos indivíduos com referência a antecedentes criminais e 10% dos agressores sem esta indicação foram encaminhados para este suporte, conforme evidencia o seguinte gráfico. Apesar das diferenças registadas ao nível dos referidos encaminhamentos entre reincidentes e não reincidentes, as mesmas não possuem significância estatística (anexo II).

Tabela 3

Percentagem de encaminhamentos para intervenção especializada por referência a antecedentes criminais

	Com referência a antecedentes criminais	Sem referência a antecedentes criminais
Acompanhamento DGRS	53%	42%
Intervenção psicológica / psiquiátrica	7%	10%
Tratamento adições	13%	19%
Programas de intervenção agressores	7%	10%

10. Discussão

Globalmente, cremos que a amostra recolhida e metodologia utilizada servem os objetivos da investigação, conduzindo-nos a um processo de progressivo conhecimento e conscientização relativamente à problemática da atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, particularmente no que à reincidência criminal concerne. No entanto, e tal como em qualquer processo de investigação, deparámo-nos com condicionantes a que importa atender e considerar nesta etapa de discussão.

O facto de a amostra ser constituída apenas por 50 decisões judiciais implica a sua consideração aquando da análise e interpretação, nomeadamente estatística dos resultados, que, no entanto, cremos corresponderem, na sua globalidade, aos objetivos a presente investigação.

Os resultados obtidos através da amostra utilizada apresentam uma acentuada variabilidade, condicionando, por um lado, o trabalho estatístico dos mesmos, por outro, espelhando a efetiva realidade da atuação judicial em Portugal, o que legitima a reflexão sobre os seus fundamentos e fins. Neste sentido, consideramos válido aos objetivos da investigação o procedimento de recolha de amostragem bem como os resultados por si obtidos.

O facto de as decisões judiciais consultadas não possuírem toda a informação prevista no Índice de Severidade Punitiva e Psicologização, bem como por alguns dos documentos utilizados não se apresentarem completos, constituindo-se, essencialmente, instrumentos de trabalho da equipa da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais por si responsáveis,

poderá, de alguma forma, haver consistido numa condicionante à informação recolhida. No entanto, apesar desta heterogeneidade evidenciada, entendemos que a mesma serve o objetivo da investigação, aportando informação essencial à análise e reflexão sobre a atuação do sistema punitivo, em particular, da atuação do Legislador e Aplicador, no crime de violência doméstica, com especial consideração pelo fenómeno da reincidência criminal, objetivos a que nos propúnhamos com a presente investigação.

No sentido inverso, cremos que a diversidade geográfica conseguida na recolha da amostra, bem como as diferentes fontes utilizadas, a Internet e Equipa de Reinserção Social Lisboa Penal 6, enriquece a metodologia utilizada, potenciando os resultados obtidos, espelhando uma visão mais abrangente da atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica em Portugal.

No processo de tratamento de informação optámos por não diferenciar as sentenças e acórdãos consultados uma vez que para efeitos da presente investigação entendemos ambas as tipologias jurídicas enquanto decisões judiciais, refletindo estas a atuação do sistema jurídico sobre o transgressor, espelhando, simultaneamente, o seu pressuposto retributivo, dissuasivo e ressocializador, informação necessária aos objetivos da presente investigação.

Considerando válidos a amostra recolhida e procedimentos utilizados na investigação, importa avançarmos para a efetiva discussão dos resultados obtidos.

Analisando o perfil socioeconómico dos agressores constituintes da amostra verificamos que possuem em média 46 anos de idade, variando estas entre os 27 e 65 anos, refletindo a transversalidade em termos de faixas etárias associadas à prática deste crime, não se circunscrevendo em determinado padrão, mas alterando entre a juventude e a terceira idade, tantas vezes intergeracionalmente relacionadas (Cortez, Padovani & Williams, 2005; Oliveria & Sani, 2009). Como esperado, a esmagadora maioria da amostra é constituída por homens, 98%, ao encontro do referido na literatura no que respeita à tendencial vitimização da mulher nesta tipologia de crime (Day *et al.*, 2003; Lisboa *et al.*, 2009; Gilchrist, 2010).

A maioria dos agressores encontra-se integrado profissionalmente, no entanto uma ainda expressiva parte, 32%, apresenta-se em situação de desemprego. Relativamente às atividades profissionais por si desempenhadas, verificamos que a maioria respeitam a atividades instrumentais e operativas, como 1º sector, manufatura, serviços ou restauração, sendo que apenas uma residual percentagem de agressores desenvolve atividades que possuem uma vertente mais intelectual e académica, como os professores e administrativos, que respeitam, respetivamente, a 2% e 4% da amostra.

Quanto à atual zona de residência dos agressores constatamos que a sua maioria, 56%, é residente no Distrito de Lisboa, mas distribuindo-se os restantes por diversas zonas do país como Porto, Braga, Coimbra ou Madeira, por exemplo, não sendo, no entanto, possível diferenciá-las em termos de zonas rurais ou urbanas, o que consideramos que seria igualmente interessante de observar.

Explorando a trajetória vivencial dos agressores, constata-se que a de 30% havia anteriormente coincido com a transgressão dos quais 8% diretamente relacionada com violência doméstica e os restantes 20%, que possuíam esta informação disponível, com crimes diversos como vemos no exemplo da condução sob o efeito de álcool e sem habilitação ou o tráfico de estupefacientes. Este é um dado que se encontra coincidente com o alertado pela literatura, reconhecendo-se os expressivos índices de reincidência criminal nesta tipologia de crime mas também em outros, conforme validamos através da presente amostra (Simon, 1995; Ventura & Davis 2005; Manita, 2008).

Relativamente à sanção anteriormente aplicada, observa-se que a 10% dos agressores reincidentes foi aplicada a suspensão provisória do processo, a 4% a suspensão da execução da pena e a 8% multa. Direta ou indiretamente, trataram-se de decisões judiciais que falharam o seu objetivo ressocializador, confirmando-se a futura recidiva criminal destes indivíduos.

Relativamente à associação entre adições e a prática de violência doméstica, constatámos em 38% dos agressores a referência ao consumo de álcool e em 2% ao consumo de álcool associado a drogas, sem outra especificação, estando este facto concordante com o referenciado pela literatura no que respeita ao fator de risco que os consumos representam relativamente a práticas transgressivas (Lisboa *et al.*, 2009; Gonçalves, Cunha & Dias, 2011). Em contrapartida, quanto ao acompanhamento terapêutico durante o processo, apenas 4% dos agressores beneficiaram deste suporte. Cremos que a problemática aditiva requereria uma acuidade particular por parte do sistema jurídico, havendo autores que defendem,

inclusivamente, uma ação específica neste âmbito, reconhecendo-se a sua influência no processo ressocializador do transgressor (Larkin, 2016).

Relativamente à exploração da dimensão psicológica no contexto judicial, verificamos que em apenas 6% dos agressores foi referenciada a existência de algum tipo de perturbação psicológica, sendo notável a escassez de informação a este nível, bem como em apenas numa decisão judicial identificámos informação sobre a realização de avaliação psicológica. Os resultados evidenciam a pouca permeabilização ainda existente no que respeita à necessidade e legitimidade da intervenção psicológica no território judicial, apesar do longo historial de apelos e evidências que reclamam ação contrária (Poiares, 2001; Gonçalves, 2010; Manita & Machado, 2012; Poiares, 2013).

Particularmente no âmbito do crime de violência doméstica, reconhecendo-se a sua complexidade, seria fundamental a realização de um diagnóstico inicial realizado ao agressor a fim de melhor determinar uma efetiva atuação do sistema de justiça, iniciando na definição das medidas de coação a estabelecer, potenciando a efetiva proteção da vítima e início do processo de responsabilização e ressocialização do agressor pela ação praticada. A informação sobre as medidas de coação não estava disponibilizada na maioria dos documentos que consultámos sendo que apenas 20% especificava a referência a esta obrigatoriedade, concluindo-se da informação recolhida que apenas 2% dos agressores foram detidos em prisão preventiva.

Creemos que a fase de instrução em que determinado indivíduo é indiciado pela prática de um crime se apresenta como uma etapa

fundamental, e muitas vezes subvalorizada, no processo jurídico. O investimento no processo de acompanhamento ao indivíduo deve ter início imediato, com destaque à medida de coação aplicada, particularmente no que respeita ao crime de violência doméstica, reconhecendo-se os riscos associados à vítima aquando do início do processo judicial. Procurar simplistamente afastar o agressor da vítima, sabendo-se a falibilidade também associada a esta medida, trata-se de procurar evitar danos, no imediato, não considerando uma efetiva promoção na alteração da modalidade de comportamento do agressor.

Quanto às decisões judiciais aplicadas a sua maioria, precisamente 50%, respeitou a suspensão da execução da pena mediante o cumprimento de obrigações, 26% à suspensão provisória do processo, 8% à suspensão da execução da pena simples, 6% a pena de prisão efetiva, 6% a absolvição e 4% à suspensão da execução da pena mediante pagamento de multa e cumprimento de obrigações. Em apenas 6% das decisões judiciais se efetivou o cumprimento do disposto na moldura penal do crime de violência doméstica: a pena de prisão. Em todas as restantes 94% o Aplicador optou por vias alternativas que acreditou melhor corresponderam às exigências do crime praticado, às necessidades da vítima e do agressor.

Analisando a escala de severidade punitiva que a plataforma de cotação do ISPP nos permite identificar, concluímos que a média de severidade das penas aplicadas se situa nos 39,03, numa escala de 0 e 100. Trata-se de uma média de severidade punitiva extremamente reduzida, mas que confirma o já anunciado através da opção pelas medidas alternativas à pena de prisão utilizadas. Os resultados refletem ainda a tamanha diversidade em termos de

severidade punitiva aplicada ao mesmo tipo de crime, uma variância entre 11 e 79.

Os resultados obtidos revelam uma inconsistente atuação do sistema jurídico, refletindo um amplo espectro de severidade punitiva exercida pelo Aplicador e não sendo possível estabelecer relações, com significância estatística, com nenhuma das variáveis previstas no ISPP relacionadas com o agressor, seja a reincidência criminal (o que seria esperado), dimensões socioeconómicas, referência a consumos ou perturbação psicológica. Conclui-se, ainda, uma branda e incerta atuação do sistema punitivo, agindo, essencialmente, numa lógica intimidatória, possuindo severas penas abstratas mas não as aplicando na prática, bem como apresentando uma elevada variabilidade no tipo e na severidade de sanção aplicada. Prevê-se, assim, a falência da sua atuação ao associar à leveza da punição a incerteza da sua aplicação, conforme nos alerta consistentemente a literatura a este respeito (Becker, 1968; Mendes & McDonald, 2001; Darley, 2005; Beccaria, 2007).

Estas conclusões remetem-nos, necessariamente, para o domínio das motivações ajurídicas do sentenciar, na medida em que cremos que a livre convicção Aplicador, envolvida em cada decisão judicial aplicada, poderá fundamentar tamanha diversidade dos resultados obtidos (Quivy & Campenhout, 1998).

Concretamente no que respeita ao pressuposto ressocializador da ação jurídica, atendendo particularmente às estratégias que mais objetivamente parecem ter sido utilizadas para este fim, constatamos que a 46% dos arguidos foi realizado o encaminhamento para acompanhamento da Direção-

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a 20% para tratamento no âmbito da problemática das adições, apenas em 12% foi determinada a obrigatoriedade de participação em programas de intervenção específicos para agressores e a 8% foi realizado o encaminhamento para intervenção psicológica / psiquiátrica.

Os resultados refletem um escasso investimento do sistema punitivo no que respeita ao encaminhamento dos agressores para intervenções especializadas, promotoras de alterações comportamentais e de uma efetiva ressocialização do agente. Este facto se por um lado espelha a ainda escassa permeabilização do Poder ao Saber, particularmente juspsicológico, evidencia, simultaneamente, uma ação do sistema jurídico desconcertada com os objetivos ressocializadores associados à sanção.

Estas reflexões afirmam-se, ainda, mais pertinentes quando atendemos ao fenómeno da reincidência criminal, refletindo esta, *à priori* a falência do sistema penal relativamente ao seu pressuposto ressocializador, devendo implicar, por conseguinte, uma maior acuidade na ação penal.

Os resultados obtidos revelam um acentuar da severidade punitiva concertada com a existência de antecedentes criminais refletidos no facto de as sanções mais severas, como a pena de prisão efetiva, suspensão da execução da pena, simples ou com obrigações, terem sido principalmente aplicadas a agressores reincidentes e, pelo contrário, a suspensão provisória do processo tendencialmente aplicada a transgressores primários. Quanto à média da severidade punitiva aplicada verificamos que a mesma se situou em 39.31 nos agressores reincidentes e em 38.68 nos não reincidentes.

Apesar das diferenças identificadas entre reincidentes e não reincidentes, umas mais expressivas que outras, não existem diferenças estatisticamente significativamente ao nível da severidade punitiva aplicada, tanto em termos do tipo de decisão aplicada como ao nível da sua escala de severidade.

Relativamente à intervenção especializada junto dos agressores considerando a dimensão reincidência criminal, verificamos que a necessidade de acompanhamento pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais foi atribuída a 53% de reincidentes e a 42% não reincidentes, contrariamente, o encaminhamento para intervenção psicológica / psiquiátrica foi obrigatória para apenas 7% dos agressores reincidentes e para 10% de não reincidentes, o tratamento no âmbito de adições foi indicado a 13% de reincidentes e a 19% de não reincidentes e o encaminhamento para programas de intervenção específicos para agressores a 7% de reincidentes e 10% não reincidentes.

Apesar de os encaminhamos para estas tipologias de intervenção terem sido, em geral, residuais, constata-se que na sua maioria foram realizados a transgressores primários, refletindo, assim, um desinvestimento no processo ressocializador do indivíduo reincidente.

Creemos que esta seja uma atuação inversa ao esperado face aos princípios ressocializadores do sistema punitivo, na medida em que, independentemente do motivo, o indivíduo reincidente já possuiu um contacto prévio com o sistema jurídico, refletindo a sua recidiva a falência da sua atuação, pelo que seria expectável o reconhecimento da necessidade de reforçar o investimento na vertente pedagógica, juspsicológica. No

entanto, pelo contrário, constata-se que o Aplicador encaminha residualmente para intervenções especializadas e ainda com menos regularidade nestas circunstâncias, comparativamente aos agressores primários.

Globalmente, cremos que os resultados alcançados na presente investigação legitimam uma séria reflexão sobre a ação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, particularmente no que concerne à reincidência criminal, urgindo a necessidade de uma rutura com o paradigma punitivo vigente.

A ação do sistema jurídico revela-se marcadamente incerta, sendo amplo o espectro das tipologias de sanções e severidade punitiva aplicadas, não se conseguindo estabelecer relações estatisticamente significativas com nenhuma variável referente ao agressor integrada no ISPP. Apresenta, ainda, uma ação predominantemente intimidatória, na medida em que o Legislador define severas penas abstratas, no entanto o Aplicador opta por punir brandamente, desinvestindo, fortemente, na psicologização do processo jurídico, refletido na escassa recorrência a esta área do saber ao longo de todo o processo de criminalização. A gravidade destas conclusões acresce ao reportarmo-nos à sua atuação no âmbito da reincidência criminal em que se verifica o desinvestimento, ainda superior, na vertente pedagógica e ressocializadora da ação jurídica, punindo mais severamente e encaminhando com menor regularidade para intervenções especializadas.

Reconhecendo-se a complexidade do crime de violência doméstica afirma-se necessária uma efetiva reflexão crítica sobre a ação jurídica, reforçando a necessidade e legitimidade da intervenção psicológica no

território judicial, concorrendo para uma jurisprudência mais terapêutica e que efetivamente promova o seu pressuposto ressocializador.

11. Considerações finais

Creemos que a investigação realizada nos conduziu ao alcance dos objetivos a que inicialmente nos propusemos, na medida em que foi possível a mesma lançar luz sobre a atuação do sistema punitivo no crime de violência doméstica, particularmente no que respeita à sua severidade, permitindo-nos inferir sobre o seu funcionamento preventivo, atendendo, particularmente, à atuação do Legislador e Aplicador.

Os resultados obtidos, acima de tudo inquietantes, aportam conclusões importantes ao estudo da atuação global do sistema punitivo no crime particular de violência doméstica, pelo que cremos deles extrair importantes aportes à reflexão, profunda e urgente, que se exige sobre os temas em questão.

Constata-se uma ação do sistema punitivo marcadamente incerta, sendo amplo o espectro de tipologias de sanções e de severidade exercida, não sendo possível o estabelecimento de relações, com significância estatística, que expliquem tamanha diversidade. Trata-se de um atuação marcadamente intimidatória, na medida em que o Legislador define amplas penas abstratas, prevendo a severa punição do transgressor (ainda que relativamente, se analisada comparativamente a outros delitos, como o furto ou roubo); no entanto o Aplicador pune brandamente, optando pelas medidas alternativas à pena de prisão, refletidas numa média de severidade que se situa em 39.03, numa escala de 0 a 100, conforme nos revela o ISPP e oportunamente discutido em capítulo anterior.

Ora, este registo punitivo, incerto, não sendo presumível a sanção resultante de determinada ação transgressiva, e intimidatório, sendo severas as penas abstratas mas não sendo executadas na prática, descredibiliza a ação jurídica e contraria os princípios ressocializadores associados à sanção, mas também os preventivos.

Reforçando esta convicção, constata-se, na globalidade, um escaço encaminhamento dos agressores para intervenções especializadas, bem como de recorrência ao saber psicológico, ao longo de todo o processo de criminalização, sendo contemporaneamente reconhecidas as vantagens associadas à intervenção desta área do saber, sabendo-se que medidas punitivas, em exclusivo, não são eficazes na promoção de alterações comportamentais.

Particularmente no que respeita à reincidência criminal, constata-se um acentuar da severidade punitiva concertada com a existência de reincidentes criminais, bem como um inferior encaminhamento para intervenções especializadas, comparativamente aos transgressores primários, evidenciando um desinvestimento, ainda superior, no processo ressocializador destes sujeitos.

De facto, conforme já tivemos oportunidade de explorar, a reincidência criminal, entre as diversas conclusões e ilações que dela se podem extrair, pode revelar a falência do sistema punitivo no que concerne ao seu pressuposto ressocializador, pelo que, cremos, nos deva conduzir a uma maior acuidade na atuação do sistema jurídico a este nível. Por outro lado, e numa perspetiva global, não deixa também de evidenciar a incapacidade da sociedade em reintegrar o indivíduo após a prática delituosa, alocando-nos,

a este nível, a uma abordagem efetivamente holística e sistémica que, cremos, a ação penal, nomeadamente no que concerne ao seu fim ressocializador, deva ter.

Particularmente reconhecendo-se a complexidade de que se reveste o crime de violência doméstica, validado pela presente investigação, nomeadamente, pela trajetória vivencial dos agressores integrantes da amostra, confirmando o alertado pela literatura no que respeita aos preocupantes índices de reincidência criminal, mas também de consumos, nomeadamente de álcool, evidenciando multifactorialidade de problemáticas envolvidas no fenómeno, cremos necessária uma ação jurídica concertada a estas mesmas especificidades e, para o efeito, devidamente fundamentada no saber psicológico.

Neste seguimento, os resultados obtidos através da presente investigação conduzem-nos às conseqüentes considerações globais:

- A ação marcadamente incerta do sistema punitivo, particularmente no que respeita ao variável tipo de sanção aplicada bem como à respetiva severidade, punindo, em média, brandamente, contraria os princípios dissuasores associados aos seus pressupostos e concorre para a sua descredibilização e desvalorização.
- A impossibilidade de estabelecimento de relações, com significância estatística, que expliquem esta variabilidade remete-nos para o domínio das motivações ajurídicas do sentenciar, apresentando-se estas como ponto de partida, originando a necessidade de estudo da severidade punitiva, e fim, pois a conclusão da sua investigação conduz-nos à sua consideração.

- Conclui-se a, ainda, frágil permeabilização do Poder ao Saber, ao longo de todo o processo de criminalização, refletido na escassa recorrência ao saber psicológico ao longo de todo o processo, desde o suporte à formulação da decisão judicial ao seu fim, que em princípio, se assume ressocializador.
- Em complementaridade com o *item* anterior, verificamos um frágil investimento na vertente ressocializadora da ação punitiva, sendo a dimensão psicológica do agressor, e, portanto, fundamental, omissa na esmagadora maioria das decisões judiciais consultadas, constatando-se, um parco investimento do Aplicador no encaminhamento para intervenções especializadas e que possam concorrer para uma efetiva alteração de modalidades de ação, neste caso, transgressivas.
- A integração das considerações anteriores no espectro da violência doméstica, reconhecendo-se as suas particularidades e necessidade de maior acuidade por parte do processo penal, acrescentando a gravidade das mesmas.

Conforme já tivemos oportunidade de aludir, entendemos que os resultados da presente investigação legitimam uma reflexão estrutural sobre a ação jurídica no crime de violência doméstica, sendo fundamental a alteração ao paradigma vigente.

No entanto, esta urgência aparenta escapar ao poder político, sendo evidentes as escassas informações ao nível da reincidência criminal disponíveis, especialmente oficiais, bem como uma total omissão no que respeita à necessidade de reequacionamento das práticas punitivas. Cremos

que a ação jurídica deva acompanhar o desenvolvimento ocorrido ao nível da sociedade contemporânea, sendo fundamental que as suas práticas, nomeadamente punitivas, se adaptem à realidade atual.

No entanto, pelo contrário, verificamos um sistema que, apesar de algumas procuras de evolução como vemos no exemplo das medidas alternativas à pena de prisão ou na mediação penal, mantém a mesma tradição penal há décadas, não estando as mesmas em consonância com as características sociais atuais nem com conhecimento científico disponível a este nível. Ignorar estes factos será perpetuar práticas punitivas desajustadas com os seus pressupostos e desconcertadas aos seus destinatárias, concorrendo assim, invariavelmente, para a sua falência.

Importa, então, agir no sentido da rutura com o paradigma atual, reivindicando a legitimidade de psicologização do processo jurídico, através de um método dinâmico e de uma abordagem sistémica, tendo como ponto de partida o transgressor.

Acreditamos fundamental a necessidade de incluir e considerar no processo de punição do transgressor os diversos sistemas que o mesmo integra e que lhe estão associados, sendo centrando em si o processo de atuação da ação jurídica.

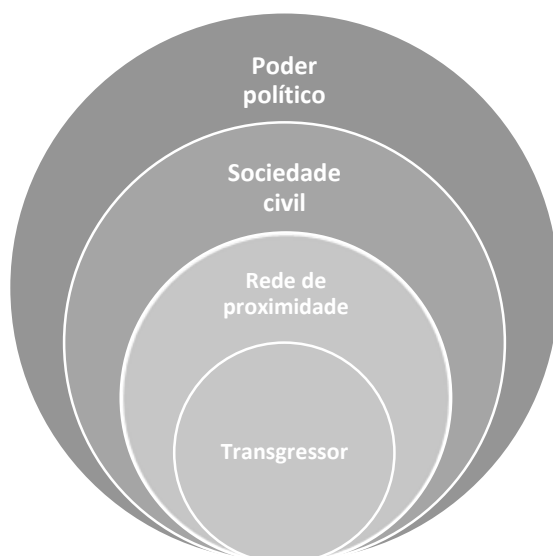


Figura 1: Modelo sistémico de intervenção

Envolver a rede de proximidade que o transgressor integra no processo de criminalização secundária, promovendo um maior comprometimento do sujeito com a aplicação da Lei, a sua efetiva responsabilização pela ação praticada, bem como envolvendo o próprio e elementos de sua referência na decisão proferida, seriam algumas estratégias que concorreriam para uma maior credibilização e eficácia da ação penal. Fundamental é também a inclusão da rede de proximidade no processo de criminalização terciária, ao nível da reintegração social do transgressor, podendo o sistema penal deter um papel importante neste processo de envolvimento e responsabilização.

Simultaneamente, importa uma ação contínua junto da sociedade civil, uma efetiva educação para a cidadania, que, por um lado, forme cidadãos para uma integral igualdade de género e respeito pelo próximo, bem como a responsabilize num sentido integrador do indivíduo transgressor. Aliás, o Aplicador, ao tornar público o crime de violência doméstica, apela diretamente à responsabilidade social de cada cidadão no processo de

denúncia desta tipologia de crime devendo também, cremos, envolvê-lo no processo de ressocialização e integração social.

Naturalmente todas as sugestões sobre as quais acabámos de refletir implicam, necessariamente, o envolvimento do poder político, designadamente no que respeita ao Aplicador, por um lado, promovendo uma maior psicologização do processo jurídico e adaptação de estratégias interventivas aos efetivos pressupostos da ação penal, por outro, permeabilizando-se à atualidade social, mas também ao conhecimento científico, no que respeita a esta mesma redefinição de princípios de atuação.

Cremos que através deste processo dinâmico e sistémico de intervenção, fundamentado na ação juspsicológica, seria promovida uma ação penal concertada com as exigências do crime de violência doméstica, que efetivamente convergisse com os princípios que a fundamentam, concorrendo para uma jurisprudência mais terapêutica e ressocializadora.

Conscientes das alterações profundas em termos de paradigma punitivo vigente que as sugestões aportadas constituem, bem como da interferência com Poderes atualmente instituídos em diversos segmentos e atores sociais envolvidos, direta e indiretamente, no sistema punitivo, acreditamos que a presente investigação possa constituir um ponto de partida à reflexão e rutura que urge ser desenvolvida sobre na temática.

Futurament, e seria interessante, partindo do princípio metodológico que fundamentou a presente investigação, alargar a sua amostra, tanto quantitativamente como qualitativamente, nomeadamente no que respeita à dimensão geográfica, podendo considerar-se, eventualmente, uma lógica

transnacional, alargando o processo de reflexão sobre as temáticas em questão, considerando a sua globalidade, e reforçando fundamentos estruturais a alterações que poderiam, e deveriam, ocorrer no sistema jurídico para que os seus princípios fossem favorecidos.

12. Referências bibliográficas

ABC News (2015). Sentencing of domestic violence offenders to be reviewed by NSW Government. Acedido em <http://www.abc.net.au/news/2015-08-10/sentencing-of-domestic-violence-offenders-to-be-reviewed-nsw/6684686>.

Agra, C. & Faria, R. (2012). A história epistemológica da criminologia. In Agra, C. (Dir.). *A criminologia: um arquipélago interdisciplinar*. Porto: Universidade do Porto.

Agra, C. (1990). Sujet autopoïétique et transgression. In *Acteur social et délinquance – homage à Christian Debuyst*. Bruxelles: Pierre Mardaga, Ed.

Albuquerque, T. & Robalo, S. (2012). Dois modelos de justiça restaurativa: a mediação penal (adultos) e os family group conferences (menores e jovens adultos). In *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Ano 22, (1), 79-128.

Almeida I. e Soeiro C. (2010). Avaliação de risco de violência conjugal: Versão para polícias (SARA: PV). *Análise Psicológica*, 1 (28), 197-192.

Álvarez-Bello, F. (2013). El control del engaño en la evaluación psicológica forense de la violencia de género: posibilidades y limitaciones en el contexto chileno. In *Anuario de Psicología Jurídica*. Acedido em <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315028685009>.

Alves, S. & Diniz, N. (2005). “Eu digo não, ela diz sim”: a violência conjugal no discurso masculino. *Revista Brasileira de Enfermagem*, nº (58 - 4), 387-392.

Andrade, V. (1995). Do paradigma etiológico ao paradigma da reacção social: mudança e permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. *Sequência* 30. Acedido em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15819>.

Antunes, M. (2002). Violência e vítimas em contexto doméstico. In Gonçalves, R. & Machado, C. (Coord.). *Violência e vítimas de crimes*. Vol. I: adultos. Lisboa: Quarteto Editora.

Antunes, M. (2002). Violência e vítimas em contexto doméstico. In Gonçalves, R. & Machado, C. (Coord.) *Violência e vítimas de crimes*, Vol. I: adultos. Lisboa: Quarteto.

Arce, R. (2005). La construcción de la psicología jurídica en europa y sue status actual. In Gonçalo, R. & Machado, C., (Coor.). *Psicologia Forense*. Lisboa. Quarteto Editora.

Augusta-Scott, T., Dankwort, J. (2002). Partner abuse group intervention: Lessons from education and narrative therapy approaches. *Journal of Interpersonal Violence*, 17(7), 783-805. doi: 10.1177/0886260502017007006

Babcock, J. & Steiner, R. (1999). The relationship between treatment, incarceration, and recidivism of battering: a program evaluation of

- Seattle's coordinated community response to domestic violence. *Journal of Family Psychology*. Vol 13, (1), 46-59.
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A social learning analysis*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall
- Baratta, A. (2000). *Criminología crítica y crítica del derecho penal*. Mexico: Siglo Veintiuno Editores.
- Barbosa, F.; Quadros, F. & Ribeiro, L. (2012). *Reincidência Criminal: Tópicos de Avaliação e Intervenção Biopsicossocial*. Porto: Livpsic.
- Barreto, A., Bucher-Maluschkea, J., Almeida, P. & DeSouza, E. (2009). Desenvolvimento Humano e Violência de Gênero: Uma Integração Bioecológica. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, (22 -1), 86-92. Acedido em <http://www.scielo.br/pdf/prc/v22n1/12.pdf>.
- Bartol, C & Bartol, A. (2012). *Introduction to forensic psychology: research and application*. Los Angeles. Londo: SAGE.
- Bartumeus, A. (2013). Ética del psicólogo jurídico. *In Nuevos aportes de la psicología jurídica*. Madrid. EOS Editora.
- Beccaria, C. (2007). *Dos Delitos e das Penas – 2º Edição*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*. Vol. 76, (2), 169-217.
- Beleza, T. (1998). *Direito Penal – 1º volume*. Lisboa. Editora: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

- Berenji, B., Chou, T. & D'Orsogna, M. (2014.) *Recidivism and Rehabilitation of Criminal Offenders: A Carrot and Stick Evolutionary Game*. Acedido em <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085531>.
- Bhona, F., Lourenço, L. & Brum, C. (2011). Violência doméstica: um estudo bibliométrico. In *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, vol. 63, (1), 87-100.
- Brennan, P. & Mednick, S. (1994). Learning Theory Approach to the Deterrence of Criminal Recidivism. *Journal of Abnormal Psychology*. Vol. 103. (3), 430-440.
- Cesca, T. (2004). O papel do psicólogo jurídico na violência intrafamiliar: possíveis articulações. *Psicologia & Sociedade*. 16 (3), 41-46. Acedido em <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v16n3/a06v16n3>.
- Chaud, I. (2010). *Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico: hacia una definición del concepto de psicología jurídica*. Madrid. Editorial EOS.
- Cheon, A. & Regehr, C. (2006). Restorative Justice Models in Cases of Intimate Partner Violence: Reviewing the Evidence. *An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*. Vol 1, 369-394.
- Cheon, A., & Regehr, C. (2006). Restorative justice models in cases of intimate partner violence: Reviewing the evidence. *Victims and Offenders*, (1), 369-394.

Choudhuri, D. (2007). *Community planning for intervention for victims of domestic violence: adaption of the model from Kassel, Germany, for disadvantaged urban neighborhoods in Pune City, India*. Kassel: Kassel University Press.

Código Penal (2009). 16ª Edição. Coimbra Editora.

Cortez, M., Padovani, R. & Williams, L. (2005). Terapia de grupo cognitivo-comportamental com agressores conjugais. *Estudos de Psicologia*, v. 22, (1). Acedido em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2005000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.

Cortizo, M. & Goyeneche, P. (2010). Judicialização do privado e violência contra a mulher. *Rev. Katál. Florianópolis*, v. 13, (1), 102-109.

Costa, M. & Reusch, P. (2015). Justiça Restaurativa: instrumento alternativo para a solução de conflitos envolvendo a mulher em situação de violência doméstica. *In XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea*. Universidade de Santa Cruz do Sul. Brasil.

Coutinho, C. (2014). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática*. Coimbra: Almedina.

Crockett, E.; Keneski, E.; Yeager, K. & Loving, T. (2015). Breaking the Mold: Evaluating a Non-Punitive Domestic Violence Intervention Program. *Journal of Family Violence*. Vol. 30 (4), 489-499.

Cusson, M. (1983). *Why delinquency?* Toronto: University of Toronto Press.

Cusson, M. (2006). *Criminologia*. Alfragide: Casa das Letras

Damasceno, L.; Silva, P.; Ramos, A.; Cortez, A. & Bastos, E. (2014).

Potencialidades e limitações da coleta de dados através de pesquisa on line. *XVII SEMEAD, Seminários em Administração*. Acedido em <http://sistema.semead.com.br/17semead/resultado/trabalhosPDF/1099.pdf>.

Darley, J. (2005). On the unlikely prospect of reducing crime. Notes by increasing the severity of prison sentences. *Journal of Law and Policy*, vol 13, article 10, 189-208.

Davies, G. & Beech, A. (2012). *Forensic Psychology: Crime, Justice, Law, Interventions*. New York: John Wiley & Sons.

Day, A; Chung, D; O'Leary & Carson, E. (2009). Programs for Men who Perpetrate Domestic Violence: An Examination of the Issues Underlying the Effectiveness of Intervention Programs. *Journal of Family and Violence*, (24), 203 – 212.

Day, V., Telles, L., Zoratto, P., Azambuja, M., Machado, D., Silveira, M., Debiagii, M., Reis, M., Cardoso, R. & Blank, P. (2003). Violência doméstica e suas diferentes manifestações. *R. Psiquiatra*. (25), 9-21.

Debyust, C. (2012). Uma perspectiva histórica da criminologia. In Agra, C. (Coord.) *A criminologia: um arquipélago interdisciplinar*. Porto: U. Porto Editorial.

Decreto Lei n.º61/91 de 13 de agosto da República Portuguesa (1991).

Decreto-Lei n.º 265/79 de 1 de Agosto. Ministério Público, 1979.

- Dias, F. & Andrade, M. (1997). *Criminologia. O Homem delinquente e a sociedade criminogénea*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Dias, I. (2010). Violência doméstica e justiça: respostas e desafios Sociologia. *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, vol. 20, 245-262. Porto: Universidade do Porto.
- Dias, I. (2012). Violência doméstica e justiça: uma relação complexa. In Agra, C. (Coord.). *Criminologia: um arquipélago interdisciplinar*. Porto. U. Porto Editorial.
- Doob, A. & Webster, C. (2003). Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis. *Crime and Justice*. Vol. 30, 143-195.
- Drost, L., Haller, B., Hofinger, V., Kooij, T., Lunnemann, K. & Wolthuis, A. (2015). *Restorative justice in cases of domestic violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs. Comparative report*. Criminal Justice 2013, European Commission. Acedido em http://www.verwey-jonker.nl/doc/2015/7388_restorative%20justice%20in%20cases%20of%20domestic%20violence.pdf.
- Durkheim, E. (1999). *Da divisão do trabalho social*. São Paulo: Martins Fontes.
- Durose, M., Cooper, A. & Snyder, H. (2014). *Recidivism of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 2010*. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice

Statistics. Acedido em

<https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/rprts05p0510.pdf>

Fazel, S. & Wolf, A. (2015). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. *PLoS ONE* 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390

Feder, L., & Wilson, D. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: Can courts affect abusers' behavior? *Journal of experimental Criminology*, 1(2), 239-262. Acedido em doi: 10.1007/s11292-005-1179-0.

Felson, R. & Pare, P. (2008). Gender and the victim's experience with the criminal justice system. *Social Science Research*, (37), 202–219.

Fonseca, D., Ribeiro, C. & Barbosa, N. (2012). Violência doméstica contra a mulher: Realidades e representações sociais. *Psicologia & Sociedade*, vol. 24, (2), 307-314.

Fonte, C. (2007). O Consumo de drogas e os comportamentos aditivos: modelos teórico explicativos. *Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa*, 4, 238-250.

Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir: naissance de la prison*. Paris: Gallimard.

Friesen, L. (2012). Certainty of punishment vs severity of punishment: an experimental investigation. *Southern Economic Journal*, 79 (2), 399-421.

- García-Jiménez, J.; Godoy-Fernández, C.; Llor-Esteban, B. & Ruiz-Hernández, J. (2014). Differential profile in partner aggressors: Prison vs. mandatory community intervention programs. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 6 (2), 69-77. DOI: 10.1016/j.ejpal.2014.06.003
- Garofalo, R. (1885). *La Criminologie*. Paris: Félix Alcan Ed.
- Gelles, R. (1995). *Family violence and abuse. Contemporary Families. A sociological view*. London: Sage.
- George, T. (2010). *Domestic Violence Sentencing Conditions and Recidivism*. Olympia, WA: Washington State Center for Court Research. Administrative Office of the Courts.
- Gilchrist, E. (2010). Domestic violence. In Brown, J. & Campbell, E. (Ed.). *The Cambridge handbook of forensic psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gonçalves, R. (2004). Agressores conjugais: investigar, avaliar e intervir na outra face da violência conjugal. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, (14), 541-558.
- Gonçalves, R. (2010). Psicologia forense em Portugal: uma história de responsabilidades e desafios. *Análise Psicológica*, Vol.28, (1), p. 107-115.
- Gonçalves, R., Cunha, O. & Dias, A. (2011). Avaliação psicológica de agressores conjugais. In Matos, M., Gonçalves, R. & Machado, C. (Coord.). *Manual de Psicologia Forense: contextos práticos e desafios*. Braga: Psiquilibrios Edições.

Gordon, J. & Moriarty, L. (2003). The effects of domestic violence batterer treatment on domestic violence recidivism: The Chesterfield County Experience. *Criminal Justice and Behavior*, 30 (1), 118-134.

Governo do Canadá (2015). *Offender Profile and Recidivism among Domestic Violence Offenders in Ontario*. Acedido em http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/crime/rr06_fv3-rr06_vf3/p5.html.

Gramet, D. & Darley, J. (2009). Retributive and restorative justice: Importance of crime severity and shared identity in people's justice responses. *Australian Journal of Psychology*, Vol. 61, 50-57.

Grasmick, H. & Bryjok, G. (1980). The deterrence effect of perceived severity of punishment. *Social Forces*. Vol. 59:2, 471-491.

Guillén, C. & Iraeta, A. (2010). Análisis de las Sentencias Registradas Judicialmente sobre Delitos de Violencia Intrafamiliar e Impacto de la Aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. *Anuario de Psicología Jurídica*, Vol. 20, 43-57.

Günther, H. (2006). Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a Questão? *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Vol. 22, (2), 201-210.

Haggård, U., Freij, I., Danielsson, M., Wenander, D., & Långström, N. (2015). Effectiveness of the IDAP treatment program for male perpetrators of intimate partner violence a controlled study of criminal recidivism. *Journal of Interpersonal Violence*. Doi: 10.1177/0886260515586377.

Hermann, L. (2002). *Violência Doméstica: a dor que a lei esqueceu*. São Paulo: CEL-LEX.

Ikonomopoulos, J; Smith, R. & Claudia, S. (2015). Integrating Narrative Therapy Within Rehabilitative Programming for Incarcerated Adolescents. *Journal of Counselling & Development*. Vol 93, 460- 470.

Jacobson, N. & Gottman, J. (1998). *When men batter women: New insights into ending abusive relationships*. New York: Simon & Schuster.

Johnson, H. & Dawson, M. (2011). *Violence Against Women in Canada: Research and Policy Perspectives*. Toronto: Oxford University Press.

Junior, I. (2011). A contemporaneidade da prisão e do sistema punitivo: sistema pós correccional no capitalismo de Barbárie. *Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica*. Vol. 3, (1), 33-61.

Keller, M. (2010). What you did only matters if you are one of us. Offenders group membership moderate the effect of criminal history on punishment severity. *Social Psychology*, vol. 41 (1), 20-26.

Kropp, P. & Hart, S. (2000). Spousal assault risk assessment (SARA) guide: Reliability and validity in adult male offenders. *Law and Human Behavior*, 24 (1), 101-118.

Le Blanc, M.; Szabo, D. & Ouimet, M. (2008). *Tratado de Criminologia Empírica*. Lisboa: Climepsi Editores.

Lei nº 59/2007. Diário da República nº 170 Série I de 04/09/2007.

- Lilaa, M.; Oliverb, A.; Catalá-Miñanaa, A. & Conchell, R. (2014).
Recidivism risk reduction assessment in batterer intervention
programs: A key indicator for program efficacy evaluation.
Psychosocial Intervention vol. 23, 217-223.
- Lin, S., Su, C.; Chou, F., Chen, S., Huang, J., Wu, G., Chen, W., Chao, S. &
Chen, C. (2009). Domestic violence recidivism in high-risk Taiwanese
offenders after the completion of violence treatment programs.
Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. Vol. 20, Issue 3, 458-
472. Acedido em <http://web.a.ebscohost.com>.
- Lisboa, M. (coord.), Barroso, Z, Patrício, J & Leandro, A. (2009). *Violência
de género. Inquérito Nacional sobre a Violência exercida contra as
mulheres e homens*. Lisboa: Comissão para a Cidadania e Igualdade de
género.
- Llor-Esteban, B.; García-Jimenez, J.J.; Ruiz-Hernández, J.A. y Godoy-
Fernández, C. (2016). *International Journal of Clinical and Health
Psychology*, 16 (1), 39-46.
- Lombroso, C. (1876/2013). *O Homem delinquente*. São Paulo: Icone Editora.
- Lopes, G. (1993). Achegas para a história do direito penitenciário português.
Boletim do Ministério da Justiça, (430,) 13-43.
- Machado, C. (2008). Género e violência conjugal – uma relação cultural.
Análise Psicológica, Vol.26, (4), 571-586.
- Manita, C. & Machado, C. (2012). A psicologia forense em Portugal – novos
rumos na consolidação da relação com o sistema de justiça. *Análise
Psicológica, Vol. 30*, (1-2). Acedido em <http://www.scielo.mec.pt/>.

Manita, C. (1997). Personalidade criminal e perigosidade: da perigosidade do sujeito criminoso ao(s) perigo(s) de se tornar objectivo de uma personalidade criminal. *Revista do Ministério Público*, (69), 55-80.

Manita, C. (1998). Auto-organização psicológica e transgressão. Análise empírico-crítica de duas figuras do comportamento desviante: criminosos e consumidores de drogas. (Dissertação de doutoramento) Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação, Porto, Portugal.

Manita, C. (2000). Das descobertas privadas aos crimes públicos: evolução dos significados em trajectórias de droga -crime. *Toxicodependências*, vol.6, (2), 17-31.

Manita, C. (2001). Evolução das significações em trajectórias de droga - crime (II): Novos sentidos para a intervenção psicológica com toxicodependentes. *Toxicodependências*, vol.7, (3), 59-72.

Manita, C. (2005), *A intervenção em agressores no contexto da violência doméstica em Portugal. Estudo preliminar de caracterização*. Coleção Cadernos de Estudos de Género n.º2. Lisboa, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.

Manita, C. (2005). *A intervenção em agressores no contexto da violência doméstica em Portugal. Estudo preliminar de caracterização*. Lisboa: Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.

Manita, C. (2008). Programas de intervenção em agressores de violência conjugal. Intervenção psicológica e prevenção da violência doméstica. *Ousar Integrar – Revista de reinserção social e prova*. (1), 21-32.

- Manita, C. (2013). Personalidade criminal e perigosidade: da “perigosidade” do sujeito criminoso ao(s) perigo(s) de se tornar objeto duma “personalidade criminal”. *Revista do Ministério Público*, (69), 55-80.
- Manita, C. (Coor.); Ribeiro, C. & Peixoto, C. (2009). *Violência doméstica: Compreender para intervir. Guia de boas práticas para profissionais de saúde*. Lisboa: Comissão para a Cidadania e Igualdade de género.
- Mariño, F. & Mario, J. (2002). Análise comparativa dos efeitos de base económica, dos tipos de crime e das condições de prisão na reincidência criminal. *Sociologias*, Vol. 4, (8), 220-244.
- Marques-Teixeira, J. (1995). *Reincidência e responsabilidade: reflexões à luz da biopsicossociologia*. Em EPEP (Ed.) Actas do 1º Congresso de Psiquiatria Forense. Porto: EPPE
- Marques-Teixeira, J. (2000). *Comportamento criminal: perspectiva biopsicológica*. Linda a Velha: Vale & Vale.
- Matos, M. (2012). Vítimas de violência doméstica: avaliação psicológica. In F. Almeida e M. Paulino (Orgs.). *Profiling, vitimologia e ciências forenses*. Lisboa: Pactor.
- Mendes, S. & McDonald, M. (2001). Putting severity of punishment back in the deterrence package. *Police Journal*. Vol. 29, (4), 588-610.
- Miller, M.; Drake, E. & Nafziger, M. (2013). *What works to reduce recidivism by domestic violence offenders*. EUA: Washington Institute for Public Policy.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer (2006). *III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres. Informe de los*

resultados. Acedido em
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220373748592&ssbinary=true>.

Mira Y López, E. (1932). *Manual de psicologia jurídica*. Barcelona: Barcelona Salvat.

Morris, N. & Rothman, D. (1997). *The Oxford history of the prison. The practice of punishment in Western Society*. Oxford: Oxford USA Trade.

Motta, F. (2015). Transformações da política criminal em tempos de hiperencarceramento: o modelo atuarial. *Sociedade em Debate, Vol. 21*, (2), 100-139. Acedido em <http://revistas.ucpel.tche.br>.

Oliveira, M. & Sani, A. (2009). A intergeracionalidade da violência nas relações de namoro. *Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais*, 162-170.

Olver, M.; Stockdale, K. & Wormith, J. (2011). A Meta-Analysis of Predictors of Offender Treatment Attrition and Its Relationship to Recidivism. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, American Psychological Association. Vol. 79*, (1), 6 –2.

Pais, E. (1998). *Homicídio conjugal em Portugal: ruturas violentas da conjugalidade*. Lisboa: Hugin.

Pallamolla, R. & Achutti, D. (2014). Justiça Criminal e Justiça Restaurativa: Possibilidades de ruptura com a lógica burocrático-retribucionista.

Sistema Penal & Violência, Revista Eletrônica da Faculdade de Direito. Vol. 6, (1), 75-87.

Petrucci, C. (2002). Respect as Component in the Judge-Defendant Interaction in Specialized Domestic Violence Court that Utilizes Therapeutic Jurisprudence. *Criminal Law Bulletin*, vol. 38, (2), 263-295.

Pina, M. (2012). A aplicação do “Biograma-97 Am” em contexto prisional suíço. In Agra, C. (Coord.). *A criminologia: um arquipélago interdisciplinar*. Porto: U. Porto Editorial.

Poiars, C. & Louro, M. (2012). Psicologia do Testemunho e Psicologia das Motivações Ajurídicas do Sentenciar: da gramática teórica à investigação empírica. In Poiars, C. (Coor.). *Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social – Rotas de investigação e de intervenção – volume I* (105- 129). Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

Poiars, C. (2001a). Da justiça à psicologia: razões & trajectos. *Sub Judice*, (22/23), 25-35.

Poiars, C. (2001b). Psicologia Criminal e do Comportamento desviante, da compreensão à intervenção juspsicológica, *Revista Lusófona de Humanidades e Tecnologias*. Acedido em <http://revistas.ulusofona.pt>.

Poiars, C. (2005). Psicologia do Testemunho: Contribuição para a aproximação da verdade judicial à verdade. In Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (Ed.). *Direitos do Homem: Dignidade e Justiça* (143-160). Lisboa: Principia

Poiars, C. (2008). Justiça, exclusão social e psicologia ou Estranhas formas de vida. In Figueiredo Dias, J. (Org.), *ARSIVDICANDI – Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, vol. I: Filosofia, teoria e metodologia. Coimbra: Coimbra Editora.

Poiars, C. (2013). A intervenção juspsicológica, uma estação da psicologia forense. In Dorado, A & Urrea, J. (Coord.). *Nuevos aportes de la psicología jurídica*. Madrid. Editorial AOS.

Poiars, C. (2016a). Revolução industrial. In R. Maia, L. Nunes, S. Caridade, A. Sani, R. Estrada, C. Nogueira, H. Fernandes, L. Afonso (Coords.) *Dicionário Crime, Justiça e Sociedade*. Lisboa: Edições Sílabo.

Poiars, C. (2016b). Trajetórias desviantes. In R. Maia, L. Nunes, S. Caridade, A. Sani, R. Estrada, C. Nogueira, H. Fernandes, L. Afonso (Coords.) *Dicionário Crime, Justiça e Sociedade*. Lisboa: Edições Sílabo.

Presidência do Conselho de Ministros (2010). *Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2010 de Dezembro de 2010*. Diário da República, 1.^a série — N.º 243.

Ptacek, J. & Frederick, L. (2009). *Restorative Justice and Intimate Partner Violence*. Acedido em <http://www.vawnet.org>.

Puffett, N. & Gavin, C. (2004). *Predictors of Program Outcome & Recidivism at the Bronx Misdemeanor Domestic Violence Court*. United States of America: Center of Court Innovation.

- Quaresma, C. (2012). *Violência doméstica: da participação da ocorrência à investigação criminal*. Coleção Direitos Humanos e Cidadania. Lisboa: Cadernos da Administração Interna.
- Regis, L. (2013). A relativização principiológica do processo penal e as (i)limitações do poder punitivo estatal. *ETIC – Encontro de Iniciação Científica*. Vol. 9, (9). Acedido em <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/viewArticle/3323>.
- Ringland, C. & Fitzgerald, J. (2010). *Factors which influence the sentencing of domestic violence offenders*. Sydney: New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research. Acedido em www.bocsar.nsw.gov.au.
- Rosa, A., Boing, A., Buchele, F., Oliveira, W. & Coelho, E. (2008). A Violência conjugal contra a mulher a partir da ótica do homem autor da violência. *Saúde Soc.*, v.17, (3), 152-160.
- Rousseau, J. (1762/2013). *Do contrato social. Princípios do Direito Político*. São Paulo: Editora Pilares.
- Sá, R. (2012). O caráter punitivo das penas alternativas. *Semana Académica*. Vol. 1. Acedido em <http://semanaacademica.org.br>.
- Sani, A. (2008). Mulher e mãe no contexto de violência doméstica: A experiência de parentalidade. *Ex-aequo – Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as mulheres*, (18), 123-133.
- Sani, A. (2011). *Temas de Vitimologia: realidades emergentes e respostas sociais*. Coimbra: Edições Almedina.

- Santos, A. (2012). Entre duas mulheres isso não acontece. Um estudo exploratório sobre a violência conjugal lésbica. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. (98), 3-24. Acedido em <http://rccs.revues.org/4988>.
- Sertin, R., Hansen, D. & Huss, M. (2006). *Domestic violence treatment response and recidivism: A review and implications for the study of family violence*. Acedido em <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=psychfacpub>.
- Shepard, M.; Falk, D. & Elliott, B (2002). Enhancing Coordinated Community Responses to Reduce Recidivism in Cases of Domestic Violence. *Journal Interpers Violence May*, vol. 17 (5), 551-569.
- Sierra, J.; Jiménez, E. & Buela-Casal, G. (2006). *Psicología forense: manual de técnicas y aplicaciones*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Silva, G. (2011). *Direito penal português I – Introdução e teoria da lei penal*. Lisboa: Editora Verbo.
- Silva, L; Coleho, E. & Caponi, S. (2007). *Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica*. Acedido em www.scielo.org.
- Silva, S. & Maia, A. (2011). Adversidade na infância, características psicológicas e problemas de saúde física: comparação entre obesos e não obesos. *Revista psiquiatria clínica*, vol.38 (5). Acedido em <http://www.scielo.br/>.

Simião, D. (2015). Reparação, justiça e violência doméstica: perspetivas para a reflexão e ação. *Vivência: Revista de Antropologia*, 46, 53-74. Acedido em www.periodicos.ufrn.br.

Simon, L. (1995). A therapeutic jurisprudence approach to the legal processing of domestic violence cases. *Psychology, Public Policy, and de Law*, Vol 1, (1), 43-79.

Simons, M. (2010). Sense and sentencing: our imprisonment epidemic. *Journal of civil rights & economic development*. Vol 25:1, 161-176.

Sistema de Segurança Interna, Gabinete do Secretário-Geral, República Portuguesa (2016). *Relatório Anual de Segurança Interna*. Acedido em www.portugal.gov.pt.

Sprott, J., Webster, C. & Doob, D. (2013). Punishment Severity and Confidence in the Criminal Justice System. *Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice*. Acedido em <http://web.b.ebscohost.com>.

Thomas, G. (2010). *Domestic Violence Sentencing Conditions and Recidivism*. EUA: Washington State Center for Court Research. Administrative Office of the Courts. Acedido em http://www.ofm.wa.gov/sac/pdf/nchip/DV_sentencing_conditions_recidivism.pdf.

Tijeras, J; Rodriguez, J. & Armenta, M. (2006). Theory and description of domestic violence: a therapeutic program for domestic abusers in Pamplona's prison. *Anuario de Psicología Jurídica*. Vol 15, 67-95.

- Tjaden, P., & Thoennes, N. (2000). *Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings from the National Violence Against Women Survey*. Washington, DC: National Institute of Justice, Office of Justice Programs, United States Department of Justice and Centers for Disease Control and Prevention.
- Torres, A. (2007). *Drogas e prisões em Portugal – 2007*. Lisboa: Instituto da Droga e Toxicodependência.
- Touraine, A. (1992). *Critique de la modernité*. Paris: Fayard.
- Towl, G. & Crighton, D. (2010). *Forensic Psychology*. London: Wiley-Blackwell
- Urra, J. & Vázquez, B. (1993). *Manual de psicología forense*. Madrid: Siglo XXI.
- Urra, J. (2002). *Tratado de psicología forense*. Madrid: Siglo XXI.
- Vasconcellos, F. (2014). O tratamento judicial da violência conjugal no Canadá: resposta punitiva, marcadores sociais e expectativas das vítimas. *Confluências: revista interdisciplinar da sociologia e direito*. Vol. 16, (3), 173-195.
- Ventura, L. & Davis, G. (2005). Domestic violence: court case conviction and recidivism. *Violence against Women*, 11 (2), 255-277.
- Vera, D. (2008). Crimen y castigo, víctima y delito; Un problema de oferta y demanda? *Temas de Coyuntura*, (57), 121-148

Vieira, H. (2005). Prisões: Da intervenção institucional à desinstitucionalização das Intervenções. *Temas Penitenciários*, série III, (1 e 2), p. 35-42.

Walker, L. (1999). Psychology and domestic violence around the world. *PsycArticles*, (54), 21-29. Acedido em <http://www.ugr.es>.

Wexler, D. (2008). Jurisprudência terapêutica: como podem os tribunais contribuir para a reabilitação dos transgressores. In Fonseca, A. (Edição) *Psicologia e Justiça*. Coimbra: Editora Almedina.

Wormer, K. (2009). Restorative Justice as Social Justice for Victims of Gendered Violence: A Standpoint Feminist Perspective. *Social Work*, 54 (2) 107-115. Acedido em www.tagv.mohw.gov.tw.

13. Anexos

Anexo I: Índice de Severidade Punitiva e Psicologização - Criminalização Secundária (Poiares, 2009)

**ÍNDICE DE SEVERIDADE
PENALIZADORA
E PSICOLOGIZAÇÃO
(CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA -
ISPP-CS)**

**Carlos Alberto Poiares
2009**

ISPP-(CS)

Tribunal de	_____
	Singular <input type="checkbox"/> Colectivo <input type="checkbox"/>
Nº convencional	_____
Número de arguidos	_____
Decisão	
	Absolutória <input type="checkbox"/> _____
	Condenatória <input type="checkbox"/> _____
Pena(s) Aplicada(s)	
	Arguido 1 _____
	Arguido 2 _____

Data: _____

A(O) Assistente de Investigação,

ARGUIDO 1

DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Naturalidade: Urbana

Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Idade _____

Género: Masculino Feminino

Profissão _____

Empregado (a)

Desempregado(a) Há quanto tempo? _____

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

Casado(a)

União de facto

Divorciado(a)

Separado(a) de facto

Em processo de separação

Viúvo(a)

DIMENSÃO CULTURAL

Etnia _____

Habilitações literárias.

Iletrado

Ensino primário completo incompleto

Preparatório completo incompleto

Secundário último ano concluído _____

Licenciatura

Outro Qual? _____

Residência: Urbana Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Tipo de alojamento: _____

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: _____

ANAMNESE JUDICIAL

DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico _____

Acompanhamento Sim Não

Adições Substância(s) _____

Toxicodependente Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico _____

Deficiência Sim Não

Qual? _____

DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Realizada perícia de personalidade Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Decisão sobre inimizabilidade Sim Não

Conclusões _____

A decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade

b) avaliação psicológica forense

Antecedentes criminais Sim Não

Crimes anteriormente cometidos _____

Medidas de coacção sofridas _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo _____

Multa _____

Prisão _____

Multa com pena suspensa _____

Prisão com pena suspensa _____

P T F C _____

Outras _____

Medidas de coacção neste processo _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

Cumpriu? Sim Não _____

Revogação da suspensão da pena Sim Não

Razão _____

Cumpriu a pena Sim Não _____

Tempo de reclusão cumprido _____

Liberdade condicional Sim Não

Revogação da liberdade condicional Sim Não

Razão _____

PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

PROCESSO ACTUAL

ARGUIDO 1

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

Medida de coação

Prisão Preventiva Sim Não Outro Qual? _____

Se o arguido está preso preventivamente, registe a seguinte informação:

a) preso desde o início do processo Sim Não ;

b) preso a partir de ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____

CRIMES IMPUTADOS

1. Tipo: _____
2. Preceito incriminador: _____
3. Dosimetria penal: de _____ a _____,
Com multa até _____
Sem multa

MEDIDA PENAL ADOPTADA

ARGUIDO 1

Pena aplicada a cada crime:

Cúmulo jurídico Sim Não

Pena em cúmulo jurídico _____

Prisão efectiva Sim Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? _____

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim Não

A perícia determinou o agravamento da pena? Sim Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? _____

Quais? _____

SINOPSE GERAL

(para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)

Dosimetria: 1º crime - de _____ a _____
2º crime - de _____ a _____
3º crime - de _____ a _____
4º crime - de _____ a _____
5º crime - de _____ a _____
6º crime - de _____ a _____
7º crime - de _____ a _____
8º crime - de _____ a _____
9º crime - de _____ a _____

Aplicada a lei dos Jovens Imputáveis: Sim Não

Pena aplicada: _____

Pena aplicada em cúmulo: _____

Cotação Total

Anexo II: Encaminhamentos para intervenções especializadas em função da referência a antecedentes criminais

Tabulação cruzada Acomp. DGRS * Antecedentes criminais

			Antecedentes criminais		Total
			Referência a antecedentes criminais	Sem referência a antecedentes criminais	
Acomp. DGRS	Não	Contagem	7	18	25
		% em Antecedentes criminais	46,7%	58,1%	54,3%
	Sim	Contagem	8	13	21
		% em Antecedentes criminais	53,3%	41,9%	45,7%
Total	Contagem		15	31	46
	% em Antecedentes criminais		100,0%	100,0%	100,0%

Testes qui-quadrado

	Valor	gl	Significância Assintótica (Bilateral)	Sig exata (2 lados)	Sig exata (1 lado)
Qui-quadrado de Pearson	,529 ^a	1	,467		
Correção de continuidade ^b	,170	1	,680		
Razão de verossimilhança	,528	1	,467		
Teste Exato de Fisher				,538	,340
Associação Linear por Linear	,518	1	,472		
Nº de Casos Válidos	46				

Tabulação cruzada Intervenção psicológica/psiquiátrica * Antecedentes criminais

			Referência a antecedentes criminais
Intervenção psicológica/psiquiátrica	Não	Contagem	14
		% em Antecedentes criminais	93,3%
	Intervenção psicológica / psiquiátrica	Contagem	1
		% em Antecedentes criminais	6,7%
Total	Contagem		15
	% em Antecedentes criminais		100,0%

Tabulação cruzada Intervenção psicológica/psiquiátrica * Antecedentes criminais

			Sem referência a antecedentes criminais
Intervenção psicológica/psiquiátrica	Não	Contagem	28
		% em Antecedentes criminais	90,3%
	Intervenção psicológica / psiquiátrica	Contagem	3
		% em Antecedentes criminais	9,7%
Total	Contagem		31
	% em Antecedentes criminais		100,0%

Testes qui-quadrado

Valor	gl	Significância Assintótica (Bilateral)	Sig exata (2 lados)	Sig exata (1 lado)

Qui-quadrado de Pearson	,115 ^a	1	,734		
Correção de continuidade ^b	,000	1	1,000		
Razão de verossimilhança	,120	1	,729		
Teste Exato de Fisher				1,000	,606
Associação Linear por Linear	,113	1	,737		
Nº de Casos Válidos	46				

Tabulação cruzada Tratamento adições * Antecedentes criminais

			Antecedentes criminais		Total
			Referência a antecedentes criminais	Sem referência a antecedentes criminais	
Tratamento adições	Não	Contagem	13	25	38
		% em Antecedentes criminais	86,7%	80,6%	82,6%
	Sim	Contagem	2	6	8
		% em Antecedentes criminais	13,3%	19,4%	17,4%
Total	Contagem		15	31	46
	% em Antecedentes criminais		100,0%	100,0%	100,0%

Testes qui-quadrado

	Valor	gl	Significância Assintótica (Bilateral)	Sig exata (2 lados)	Sig exata (1 lado)
Qui-quadrado de Pearson	,255 ^a	1	,613		
Correção de continuidade ^b	,008	1	,928		
Razão de verossimilhança	,265	1	,607		

Teste Exato de Fisher				1,000	,478
Associação Linear por Linear	,250	1	,617		
Nº de Casos Válidos	46				

Tabulação cruzada Programa de acompanhamento para agressores * Antecedentes criminais

		Referência a antecedentes criminais	
Programa de acompanhamento para agressores	Não	Contagem	14
		% em Antecedentes criminais	93,3%
	Programa de intervenção agressores	Contagem	1
		% em Antecedentes criminais	6,7%
Total		Contagem	15
		% em Antecedentes criminais	100,0%

Tabulação cruzada Programa de acompanhamento para agressores * Antecedentes criminais

		Sem referência a antecedentes criminais	
Programa de acompanhamento para agressores	Não	Contagem	28
		% em Antecedentes criminais	90,3%
	Programa de intervenção agressores	Contagem	3
		% em Antecedentes criminais	9,7%
Total		Contagem	31
		% em Antecedentes criminais	100,0%

Testes qui-quadrado

	Valor	gl	Significância Assintótica (Bilateral)	Sig exata (2 lados)	Sig exata (1 lado)
Qui-quadrado de Pearson	,115 ^a	1	,734		
Correção de continuidade ^b	,000	1	1,000		
Razão de verossimilhança	,120	1	,729		
Teste Exato de Fisher				1,000	,606
Associação Linear por Linear	,113	1	,737		
Nº de Casos Válidos	46				